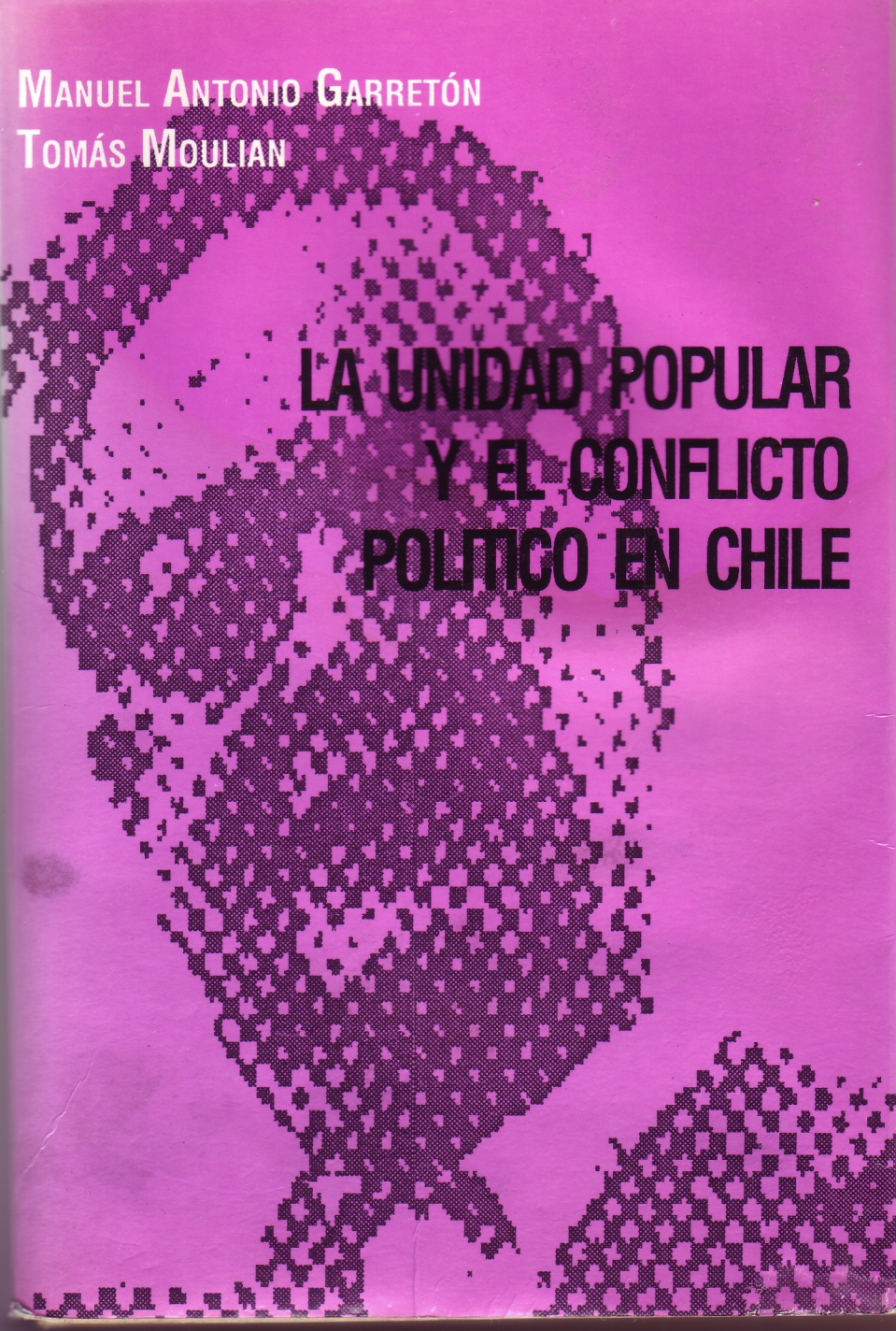


MANUEL ANTONIO GARRETÓN
TOMÁS MOULIAN

**LA UNIDAD POPULAR
Y EL CONFLICTO
POLÍTICO EN CHILE**



Al igual que en la primera edición de este libro, T. Moulian dedica este libro a Giselle, Rodrigo, Isidora, Diego, Ignacio y Manuela. M.A. Garretón lo dedica a María Luisa Merino.

© Manuel Antonio Garretón y Tomás Moulian
Inscripción Nº 58070

Primera Edición 1983
Segunda Edición Julio 1993

Editado Por Ediciones ChileAmérica CESOC
y LOM Ediciones

Portada basada en una fotografía de Luis Poirot

Composición, Diagramación e Impresión
en LOM Ediciones Ltda,
Maturana 9, Santiago.

Impreso en Chile / Printed in Chile

INDICE

Nota de Presentación	9
PRIMERA PARTE:	
La Unidad Popular y El Conflicto Político en Chile	11
1970-1973. A modo de Introducción	13
CAPITULO I	
El marco de Análisis	19
CAPITULO II	
El Desarrollo de la Lucha Política	43
CAPITULO III	
Los Bloques Políticos y los Procesos Globales	151
Anexos	181
Significación de Siglas	183
La Vía Chilena al Socialismo. Elementos de una Definición	184
SEGUNDA PARTE:	
La Crisis de la Democracia en 1973 Nuevas Consideraciones	193
La Trayectoria de una Crisis Tomás Moulián	195
La Crisis de la Democracia en Chile Manuel Antonio Garretón	218

NOTA DE PRESENTACION

Este libro se publicó por primera vez en forma completa y en Chile al cumplirse diez años del derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular, en 1983 en Ediciones Minga. El está dedicado a la memoria de Salvador Allende y los que murieron por sus ideas.

La versión original fue presentada al Primer Taller de Coyuntura de CLACSO, Lima, Perú, en Enero de 1977. Posteriormente se publicaron algunas partes en ediciones distintas, una de ellas en la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), en 1978, bajo el título «Análisis coyuntural y proceso político. Las fases del conflicto en Chile 1970-1973», y otra en la Revista Mexicana de Sociología 1/1979, con el título «Procesos y bloques políticos en la crisis chilena 1970-1973». También se publicaron como Documentos de Trabajo en FLACSO, Santiago. En 1983, se revisó y corrigió la versión original y se le devolvió su carácter de libro, agregándole una Introducción.

Este trabajo formó parte de una investigación más amplia sobre «Ideología y procesos sociales en la sociedad chilena 1970-1973», llevada a cabo por un equipo formado por Manuel A. Garretón, Leopoldo Benavides, Cristián Cox, Eugenia Hola, Eduardo Morales, Tomás Moulián y Diego Portales, realizada en FLACSO, Santiago, entre los años 1975-1977 y que contó con el apoyo del Social Science Research Council de Nueva York y la Fundación Ford. Los materiales de esta investigación están contenidos en cuatro volúmenes, mimeo, de Junio 1976 y Abril 1977. Al mismo tiempo se editaron una Bibliografía completa sobre el período y una detallada Cronología en siete

tomos. Todos estos materiales fueron base fundamental para la realización del libro y en ellos se encuentran muchas de las referencias que se omiten en él para alivianar el texto.

La presente edición se publica gracias a una contribución especial de FLACSO y de CESOC-LOM, en el vigésimo aniversario del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. En la primera parte de esta edición hemos mantenido sin variaciones, incluida la Introducción, el texto del libro publicado en 1983. En la segunda parte hemos incluido dos trabajos recientes de los autores sobre la crisis de la democracia en Chile, presentados al Seminario sobre el tema organizado por el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile en 1990, y cuya publicación aquí ha sido autorizada por el editor de los trabajos de dicho Seminario.

Junto con agradecer a todas las personas e instituciones mencionadas, se deja constancia de la responsabilidad exclusiva de los autores.

Santiago, julio de 1993.

PRIMERA PARTE

La Unidad Popular y el Conflicto Político en Chile

Prólogo a la PRIMERA EDICION 1970—1973 DIEZ AÑOS DESPUES

Este libro habla de un período crucial en la historia de Chile. No para revivir odios, señalar culpabilidades o encerrarse en la nostalgia restauradora de un pasado que ya no vuelve. Sino para intentar recuperar un juicio histórico equilibrado y contribuir así a hacernos justicia como pueblo y como nación.

En estos años de régimen militar el país se ha visto acosado por una propaganda y una visión unilaterales que buscan mantener vivos los traumas, estigmatizar a una parte de la población, y así, justificar la prolongación del estado de cosas inaugurado el 11 de septiembre de 1973. Particularmente la juventud en estos diez años no ha tenido la oportunidad de conocer lo que realmente ocurrió durante el gobierno de la Unidad Popular: ni el sistema educativo, ni los medios de comunicación, ni el debate público, todos ellos sometidos a control y censura, lo han permitido.

Y es evidente que la reconstrucción de un país no puede hacerse sin que un pueblo pueda mirarse con serenidad en su historia y que la juventud la asuma rescatándola del ocultamiento o la deformación.

Pocos períodos de la historia contemporánea de Chile y de América Latina han sido objeto de tantos debates y escritos. En todas partes del mundo se han hecho publicaciones y eventos de diverso tipo para analizar el significado del período 1970-1973. Este debate no ha sido conocido en Chile y la enorme producción intelectual que ha dado origen ha permanecido fuera de nuestras fronteras o penetrado dispersa y ocultamente

en círculos restringidos a nuestro país.

Es hora de poner fin al silencio y al monólogo.

¿Cómo explicarse la trascendencia de lo ocurrido en Chile durante esos años?

Es necesario recordar la magnitud de lo que estaba en juego. Un proyecto político en un país subdesarrollado con larga tradición de estabilidad política, cuya substancia era la reconciliación histórica entre democracia política y transformación socialista y cuyo promotor sería un gobierno elegido por sufragio universal libre. No eran aún los tiempos en que el movimiento socialista mundial contara con experiencias al respecto, ni siquiera con una sólida fundamentación o sistematización teórica. Todo el bagaje ideológico y la experiencia histórica acumulada apuntaba en otra dirección: el socialismo creaba su propio régimen político distinto a la democracia liberal o burguesa. La posibilidad de unir ambas dimensiones era vista como una anomalía, e incluso entre quienes propugnaban este proyecto no dejaba de reflejarse una perplejidad ideológica, como se puso de manifiesto en los debates de la época. Así, lo que se desarrollaba en Chile desde 1970 era visto como una experiencia única y ejemplar. Después del derrocamiento de la Unidad Popular vendría el gran debate ideológico que rescataría la validez de la utopía que afirma al mismo tiempo democracia política y construcción del socialismo.

Pero no solo la envergadura del proyecto político explica la trascendencia del período 1970-1973. También la situación que ese proyecto desató. En Chile, el gobierno y sectores importantes de la economía de los EE.UU. pusieron en juego enormes recursos para terminar con una experiencia que percibían amenazadora para el mundo hegemónico por ellos. Las estrategias de desestabilización y bloqueo invisible parecían inaugurar una nueva etapa en la política de esos sectores hacia los procesos de transformación en países subdesarrollados. El

Archivos Salvador Allende

mundo asistía a un enfrentamiento dramático y desigual en un pequeño país como Chile. El período 1970-1973 muestra la extrema vulnerabilidad de los países subdesarrollados que buscan plantearse con autonomía del juego imperialista. Pero la intervención permanente de los EE.UU. desde el inicio para crear las condiciones de derrocamiento de Allende, no puede hacernos caer en visiones puramente conspirativas de la política donde todo lo que habría ocurrido en Chile se debería a tal intervención. Ella existió, pero por sí sola no puede dar cuenta de un proceso cuya dinámica y desenlace, acotados desde el exterior, fueron definidos por la densidad de fenómenos internos.

El desenlace del período 1970-1973, con su secuela de muertes y con la instauración de una de las dictaduras militares más duras y represivas del continente, es otro factor que explica la trascendencia y repercusión del proceso político desarrollado esos años. El dramatismo de los acontecimientos y los efectos desastrosos para el país del régimen militar que sucedió a la Unidad Popular realzaron y redimensionaron la importancia del período.

La experiencia vivida en estos diez años y la necesaria maduración de aquello que al vivirse intensamente no pudo reflexionarse con serenidad, nos obligan hoy a mirar de un modo distinto y con categorías nuevas aquel período. No es tarea fácil, por cuanto hay necesariamente que rescatar una identidad. La Izquierda chilena será siempre la Izquierda que hizo la Unidad Popular. Pero al mismo tiempo no será nunca más la Izquierda de la Unidad Popular. Sin reivindicar ese período de la historia no habrá política de Izquierda en Chile. Tampoco la habrá si se quiere repetirlo.

Es en esta relación de afirmación y negación con lo que fue la experiencia de la Unidad Popular que reside el problema de identidad de la Izquierda chilena. La Izquierda hace suya la memoria de grandes políticos encabezados por Allende. Tam-

bién asume la necesidad de transformación social dentro de marcos democráticos. La Izquierda reivindica la idea de una coalición plural de organizaciones políticas encabezando un proyecto histórico común pero con sensibilidades y percepciones diferentes. Se reafirman asimismo la vocación de sustitución del capitalismo para profundizar la democracia política y extenderla a los diversos ámbitos de la vida social, la apelación al pueblo y a los trabajadores a asumir su rol de sujetos de su propio destino y la decisión de autonomía nacional. Todo ello es herencia de lo que quiso ser la Unidad Popular.

Pero la Izquierda aprendió también que ningún proyecto de envergadura puede encararse en Chile sin constituir una sólida mayoría dentro de las reglas del juego político. Que el país no se agota en la clase trabajadora y que un proyecto de transformación debe ser popular, pero debe ser también nacional, desbordando los márgenes clasistas y dando cabida genuina a vastos sectores sociales. Que las transformaciones económicas no bastan para construir una nueva sociedad. Que el orden y la seguridad constituyen aspiraciones legítimas de una población. Que la representación partidaria no agota al movimiento popular y que éste requiere de una amplia diversidad y autonomía respecto de esa representación. Que la transformación de la sociedad no puede llevar a ésta a grados de polarización que la dejen a merced de las pasiones que al fin son capitalizadas por quienes poseen los medios de comunicación, el capital o las armas.

En fin, recordar el periodo de la Unidad Popular para aprender de él, rendir un homenaje a quienes dieron sus vidas en la defensa del Gobierno, no significa, entonces, de ningún modo querer repetir ese proyecto histórico político. Significa solamente reconciliar un país, un pueblo, con su historia y con la gran lección: un proyecto político democrático que busque transformar el país hacia una sociedad más justa y que progresivamente elimine las opresiones y desigualdades, debe ser capaz de convocar e incorporar a una amplia mayoría nacional

Archivos Salvador Allende

como única forma de impedir la reacción violenta de las fuerzas que se desatan en su contra.

Santiago. Septiembre 1983.

CAPITULO PRIMERO EL MARCO DEL ANALISIS

I. INTRODUCCION

Este trabajo intenta específicamente una descripción y análisis de los rasgos y procesos principales y de los actores políticos centrales de la lucha política en el período 1970-1973. No se trata pues de un intento de interpretación global del proceso ni tampoco de una discusión de las múltiples interpretaciones que existen al respecto.

Este período ha sido objeto de un sinnúmero de análisis e interpretaciones, dada su trascendencia y significado histórico político. Desde nuestra perspectiva, una interpretación global y una tesis definitiva al respecto es aún un largo camino por recorrer si no queremos enredarnos en visiones y polémicas del pasado que están prisioneras en concepciones que existían antes incluso del desencadenamiento del proceso (1). De ahí que el ejercicio indispensable de inmersión en la historia concreta del período sea precio a una tesis definitiva, si ella puede existir, y permita que los actores y procesos aparezcan en sus perfiles más precisos y sea así posible recuperar los significados más finos de su acción. Para quienes quieran extraer de un proceso como el vivido en Chile en 1970 y 1973 no la reafirmación acrítica de sus convicciones previas sino aquello que permite entender la historia y reformular sus propios proyectos ideológico políticos, insistimos que este ejercicio nos parece una condición necesaria, aun cuando no es suficiente y aun cuando el intento concreto de estas páginas pueda adolecer de errores o insuficiencias.

Es por ello que este ejercicio va acompañado de otro correlativo, cual es ubicarse en una perspectiva que intenta, aunque

(1) Pese a esto, los autores han adelantado algunas hipótesis de interpretación. Ver M.A. Garretón «El proceso político chileno» (FLACSO, 1983) y T. Moulián, «Democracia y Socialismo en Chile» (FLACSO, 1983).

parcialmente, no asumir el punto de vista de un actor específico. Una vez realizados ambos, y una vez que se ha intentado comprender la racionalidad de los otros actores, no desde el punto de vista exclusivo de uno de ellos, es que puede volverse a asumir éste.

Pero no existen análisis inocentes de procesos sociopolíticos. Ello nos obliga a ciertas aclaraciones. Hablamos desde una perspectiva que intenta recuperar el significado de un proceso para el movimiento popular y repensar el proyecto ideológico político de la izquierda. Hablamos también *ex post*, es decir, desde el significado que tiene la derrota del movimiento popular y sabiendo el carácter que asumió un nuevo proyecto de dominación. Esto permite ver el proceso, entonces, en forma distinta a como lo veíamos como actores inmersos en una lucha, aún sin final, y permite recuperar significaciones que no estaban claras o que aparecían obnubiladas durante el proceso mismo.

Pese a que no hay análisis inocentes ya que todos ellos revelan o parten de un interés que los connota, y el nuestro ya está señalado, se requiere una nueva precisión.

Tratamos de no caer presos de las orientaciones y categorías mismas con que los actores conceptualizaron el proceso. Ello llevaría a una ratificación acrítica de lo que siempre se afirmó, a confirmar profecías y proclamar lo que hubo o no de hacerse. Nos apartamos parcialmente, entonces, de ciertas orientaciones que en el caso chileno la ratificación de ciertas leyes generales, la particularización de una teoría, y que ven en el fracaso; entonces, desviaciones o modelos estratégicos errados, frente a los cuales se opone el modelo o la línea correctos. En otras palabras, la crisis o frustraciones de un proceso social, es también la crisis de las categorías con que fue analizado.

La perspectiva elegida es analizar la lucha política del período como el paso de una crisis parcial de la sociedad a una crisis total, a través del desencadenamiento de la crisis del

Archivos Salvador Allende

régimen político. Para ello, una vez explicitada esta perspectiva, recorreremos los hitos fundamentales de la lucha política, recapitulando posteriormente los procesos y la racionalidad de los bloques políticos (2)

Desde ya queda claro el carácter del análisis, limitado al nivel político. Entre algunas otras limitaciones particulares, debemos señalar a) que se deja de lado lo referente a la estructura económica propiamente tal y al desarrollo específico de la crisis económica, así como al contenido y significado concreto de las políticas específicas de Gobierno y, por lo tanto, al desarrollo de su programa; b) que se reduce el análisis de los actores sociales a sus expresiones puramente políticas y primordialmente partidarias; c) que no se concluye directamente el análisis de factores internacionales ni de los actores en que estos factores se expresan. Tales limitaciones se deben en parte a las preocupaciones específicas de los autores pero también a la naturaleza de este trabajo, dado que el carácter mismo de la crisis del período y del marco en que se desarrolla, privilegian necesariamente este nivel del análisis. Respecto al análisis de los factores internacionales, la indiscutible intervención norteamericana en el proceso político del período -ya suficientemente probada- no será objeto de análisis particular aquí. Ella constituye un marco general de la lucha política a través de las estrategias del bloqueo invisible y la más explícita de la desestabilización, dentro de las cuales hay momentos o hitos más precisos o dramáticos. Este marco no puede olvidarse, pero no explica por sí solo los procesos internos de lucha política a los que se refiere este trabajo (3).

(2) Debe matizarse el concepto racionalidad en el sentido que el comportamiento social en el período estuvo traspasado por elementos no siempre atribuibles a una determinada lógica, sino producto de un clima proclive a las acciones no racionales.

(3) Véase al respecto, entre otros, «Covert action in Chile, 1963-1973». «Staff report of the Select Committee to study governmental operations with respect to the intelligence activities» (Washington, 1975), y Richard Fagen. «The United States and Chile: roots and branches» (Foreign Affairs, Enero 1975).

II. LAS ORIENTACIONES DEL ANALISIS

Si bien el objetivo de nuestro trabajo es preciso y limitado, es evidente que hay detrás de él un marco analítico más amplio, dentro del cual aparece más claramente inteligible. No es nuestro interés ni cabe aquí entrar en una larga exposición de ese marco, de modo que nos contentaremos con formular, sin siquiera justificarlas, algunas proposiciones que expresan sintéticamente sus puntos más importantes.

1. La sociedad chilena presenta en 1970 una crisis que caracterizaremos como de crisis parcial. Se trata de una crisis del tipo de desarrollo capitalista dependiente, incapaz de asegurar un crecimiento constante, autosostenido y de repartición equitativa de sus frutos, y de una crisis del Estado de compromiso, incapaz de asegurar una dirección política estatal estable que resolviera la crisis de desarrollo. Hablamos de crisis parcial, en la medida que no existía una crisis del régimen político democrático.

Al respecto es conveniente señalar algunos antecedentes históricos.

Entre ellos cabe recordar la debilidad política de las clases predominantes, que no pueden asegurar una conducción política directa y deben contentarse con una política defensiva (4)

(4) Para entender esta problemática puede elaborarse una tipología de políticas defensivas. Esta se compone de dos clases principales: el ajuste defensivo y el ajuste defensivo. El primer caso está compuesto por dos variedades. Una de ellas sería las situaciones de trasvase donde las clases predominantes modifican su representación política anterior, trasladándose

Archivos Salvador Allende

sin crear hasta 1964 un bloque defensivo y ejerciendo su influencia política a través de los siguientes medios: a) utilización del poder parlamentario para morigerar los programas de los sucesivos gobiernos reformistas; b) participación minoritaria en esos gobiernos, siempre como sustitutos del bloque de centro izquierda desagregado; c) influencia ideológica dentro del Partido Radical, que fue hasta 1958 la organización centrista hegemónica; d) mantención de aparatos autónomos de reproducción en la sociedad civil (instituciones educativas, organizaciones corporativas, medios de comunicación, etc.).

Si se analiza con estas categorías la historia política del periodo 1938-1964, se verá que la Derecha nunca aplicó una política de bloque defensivo y que sólo el 58 tuvo éxito en sus múltiples tentativas de alternativa de poder propia. Entonces, del 38 al 58, durante veinte años cruciales de la industrialización en base a la sustitución de importaciones, la Derecha debió conformarse con alternativas restringidas de poder político. A diferencia de las variedades del bloque, donde las clases predominantes se fusionan o constituyen una alianza en el Centro, las políticas de ajuste sólo pretenden adaptarse, influir o abrirse un hueco dentro de un bloque ya constituido, al margen de la Derecha.

A partir de la ruptura del Estado oligárquico, el auge del reformismo significó la pérdida de la dirección e iniciativa por parte de los representantes políticos de las clases predominantes en manos de los partidos centristas. El éxito de ese esquema y también su estabilidad reposaba sobre una condición estruc-

desde el partido tradicional al partido moderno, en general moderado y policlasista. La otra variedad es aquella en que no hay cambio de representación, la Derecha entrega su apoyo a una alternativa centrista, para evitar el triunfo de la Izquierda, o de un reformismo radicalizado. Forma un bloque político con el centro, pero manteniendo ella la representación que históricamente había asumido. El otro tipo de políticas, la modalidad del ajuste defensivo, implica un grado mayor de restricción de alternativas.

tural que lo hacia orgánico: el reformismo llevó adelante simultáneamente la industrialización y la democratización política y social, creando de ese modo un terreno propicio para el entendimiento entre la burguesía, la clase obrera sindicalizada o políticamente representada y los sectores de capas medias ligadas a la industrialización, al desarrollo del aparato estatal y a la urbanización.

La fuerza política promotora de la industrialización es el centro, que representaba en lo fundamental capas medias urbanas. Este realiza un conjunto de transformaciones burguesas que creaban condiciones para el desarrollo capitalista más perfeccionado, pero ateniéndose a los límites marcados por la estructuración de las clases predominantes. Esto es, sin modificar las relaciones sociales campesinas, excluyendo al campesinado de una participación autónoma en el proceso de democratización y otorgándole un rol subordinado al conjunto de los sectores populares.

A causa del perfil relativamente igualitarista del centrismo, las posibilidades de un crecimiento sostenido entraban en conflicto muchas veces con sus requisitos de legitimación, pues debían responder electoralmente a una base amplia y diversificada.

Pese a que el funcionamiento de la participación política de masas y la movilización social activa provocaban restricciones en la aplicación de políticas cuyo objetivo fuera asegurar a cualquier costo el crecimiento económico, esa contradicción potencial entre lo político y lo económico permanece inactiva durante el período, en sus expresiones críticas al nivel político.

En la base de esto hay una compatibilidad general entre el esquema de democratización parcial, con participación y movilización creciente, y el modelo capitalista de desarrollo económico con industrialización sustitutiva.

Esta situación se altera en 1964, donde el reformismo cam-

Archivos Salvador Allende

bia de dirección política a manos de la Democracia Cristiana que intenta un proyecto de modernización capitalista. La paradoja que enfrentó el Gobierno de Frei fue que la modernización capitalista que favoreció desencadenó su propia decadencia. Por un lado, los movimientos de modernización del sector industrial que implicaron una favorable evolución tecnológica, monopolización e internalización de la economía provocaron, pese a ello, un distanciamiento entre la DC y sectores de la burguesía industrial. Por otro lado, ese mismo distanciamiento se produce respecto a los sectores latifundarios debido a la reforma agraria del período. Ambos sectores entonces, se reagruparon políticamente en la Derecha, la que buscará un camino propio a partir de una crítica radical al sistema político que es visto como un obstáculo al desarrollo capitalista (5).

Deslegitimación del capitalismo e incapacidad de la DC de representar políticamente todos los sectores dominantes constituyen dos resultados importantes del período 64-70. A ello debe agregarse el distanciamiento del Centro respecto de los sectores populares expresados por una Izquierda cada vez más crítica de las insuficiencias del reformismo.

Pero crisis del capitalismo y su legitimidad y crisis del Estado de compromiso no significan necesariamente crisis de legitimidad del régimen político democrático. Cualesquiera fueran las causas de esa legitimidad del régimen político democrático, lo cierto es que ella existía y así ella mantenía a todas las crisis que hemos mencionado en estado latente hasta 1970 o, al menos, sin efectos pertinentes desestabilizadores al nivel político.

2. La estabilidad de la democracia en Chile desde 1938 a

(5) El Programa de la Nueva República de Alessandri es una expresión de ello. Para un análisis detallado de la configuración del proyecto político de derecha. A. Varas, F. Aguero y F. Bustamante, «Chile, Democracia. FF AA.». (FLACSO, 1980, caps. 10 y 12).

1970 no reposa de un modo decisivo en su legitimidad valórica. Ella está también ligada a su capacidad de incorporación de diversos sectores sociales, aunque en forma desigual, a un proceso de democratización sustantiva (acceso a bienes y servicios de la sociedad). Esta democratización sustantiva estuvo marcada por el sello de las clases medias, principales beneficiarias, lo que en el plano político se expresaba en el predominio político del Centro.

Las razones del predominio político centrista, casi constante de 1938 hasta 1970, habría que buscarlas en la compatibilidad entre su carácter organizacional y las condiciones políticas que crearon en Chile el Estado de compromiso.

En el caso chileno ese Estado no sólo se caracterizaba por la capacidad de articular desde arriba algunos de los intereses variados de una base social diversificada. También se caracterizaba por el carácter democrático, con participación amplia, del régimen político.

Este tipo de legalidad democrática cumplía diversas funciones: a) Organizaba la participación de los grupos que podían acceder a la lucha política, limitándolos o excluyéndolos en algunas etapas históricas, pero, en general, permitiéndoles una cuota de poder de presión cada vez más depurada; b) permitía institucionalizar el conflicto social en un doble sentido: lo sometía a un orden más o menos universalista en lo formal y lo politizaba cada vez que era necesario, haciéndolo objeto del juego aparentemente global de negociaciones; c) estaba diseñada para hacer indispensable la negociación, principio estructurador que se expresaba institucionalmente en una distribución contrabalanceada de atribuciones que parcelaba minuciosamente la capacidad de acción entre las diversas instancias del Estado. Por eso, y también por la vigencia de un sistema electoral proporcional, cuya función particular era generar el interés de los grupos por participar dentro del sistema pues cada uno podía en principio obtener una cuota de

Archivos Salvador Allende

representación, se hacía muy difícil la constitución de mayorías claras de una sola fuerza, lo que multiplicaba las presiones al compromiso; d) determinaba el carácter gradual del proceso de cambios, a causa no sólo de la dificultad de los procedimientos de elaboración legal, sino sobre todo a causa de la complejidad del campo de fuerzas (6).

Este tipo de sistema político, si bien orientado por la racionalidad de un sistema socioeconómico capitalista, expresaba adecuadamente la existencia de una estructura de clases bastante diversificada donde las capas medias tenían una gran importancia cuantitativa. También reflejaba la relativa diversidad de las representaciones políticas, una de cuyas manifestaciones era la autonomía organizacional de las capas medias.

Por otra parte, al ser la negociación el principio básico de un orden político con atribuciones contrabalanceadas y con un sistema electoral que buscaba la dispersión de las fuerzas más que la constitución de mayorías autónomas, el funcionamiento estable y eficiente de ese sistema requería de una condición política, el equilibrio céntrico, lo que favorecía el rol político crucial de las capas medias.

En este momento no nos interesa dilucidar si primero se produjeron los cambios de la estructura de clases, o si fueron las modificaciones del aparato institucional las que originaron, en primera instancia, esa significación política. Lo que constatamos es que tanto la diversificación de la estructura de clases como los principios constitutivos del sistema político crearon el espacio para que las capas medias y su expresión política, el Centro, jugaran ese rol.

(6) Ver Francisco Cumplido «Proyecto» legislativos e institucionalidad jurídica 1964-1973" (FLACSO, documento de Trabajo, 1976), y «Proyectos de cambio, multipartidismo y representación proporcional. Chile (1964-1973)» (FLACSO, Documento de Trabajo, 1977).

Desde el punto de vista de las fuerzas políticas, la estabilidad del sistema se basaba, entonces, en una gran medida, en el rol pendular jugado por el Centro político hasta 1964, en el que el Partido Radical es desplazado por un nuevo centro, la Democracia Cristiana. Ese papel pendular permitió la estabilidad, aun cuando la Izquierda, que era una fuerza ideológicamente anti-sistema, fuera consolidando su importancia política y constituyera la unidad entre socialistas y comunistas.

El hecho que el centro apareciera para la Izquierda como una fuerza en disponibilidad, con la cual era posible integrar alianzas, constituía uno de los factores de incorporación de ésta al sistema, porque la hacía viable como alternativa de poder. Por otra parte, el rol pendular del Centro hacía soportable para la Derecha la participación política de la Izquierda, incluso hacia tolerables las alianzas de ésta con el Centro, porque estaba comprobado que la naturaleza ideológica y política de este último le otorgaban a esas alianzas un carácter transitorio. De hecho, eso había sucedido tanto en 1938, como en 1942, como en 1946.

Sin embargo, la Democracia Cristiana modifica, al asumir el Gobierno, en 1964, los papeles tradicionales del centro político. Mientras el Partido Radical era, por lo menos desde 1938 hacia adelante, una organización pragmática, que no pretendía fundar un nuevo orden social, la Democracia Cristiana estaba imbuida del sentido de misión histórica, se sentía la portadora de una verdadera revolución. Sin desarrollar todavía los aspectos que se refieren al carácter de este actor político, debemos decir que esas convicciones generaron una profunda inadecuación de la Democracia Cristiana a las funciones de centro político.

Empujada por sus pretensiones mesiánicas al aislamiento político, después del fracaso de sus pretensiones de absorber la

base de la Derecha, tratando de aprovechar su pánico a la Izquierda para movilizarla en una nueva dirección ideológica, y de absorber la base política de la Izquierda, mediante una política redistributiva y de reformas sociales, la Democracia Cristiana afrontó en 1967 el impasse de su proyecto de revolución en libertad. Debido al desgaste electoral expresado en los resultados de los comicios municipales de ese año y los problemas surgidos en la política económica, a causa de un desfase entre los niveles previstos y los niveles reales de alza de las remuneraciones y de inversión privada, el Gobierno DC vio estrecharse aún más su margen de maniobra y negociación política. Impedido de buscar una base orgánica de compromiso con la Izquierda, por la dinámica electoral presidencial que ya se insinuaba y por sus compromisos cada vez mayores con el sistema capitalista, e imposibilitado de buscar la alianza con la Derecha, morigerando su política agraria, por no exacerbar sus contradicciones internas o por mantenerse como alternativa autónoma, el Gobierno DC opta por sacrificar los aspectos innovadores o reformistas de su programa.

De ese modo recorre la misma trayectoria de todos los Gobiernos que habían tenido un proyecto de cambio relativamente global o ambicioso: después de la euforia de los primeros años, el peso de la legalidad política, diseñada para asegurar el carácter negociado, gradual y parcial del cambio, terminaba por hacerse sentir. El respeto de este juego institucionalizado producía evidentemente retardos y discontinuidades en los procesos de cambio, tanto en los referidos a los aspectos arcaicos de la sociedad chilena, como en los referidos no ya a una democratización de la estructura, sino incluso a la modernización capitalista.

Esta realidad institucional expresaba el tipo de consenso en que descansaba el sistema político. Una fórmula contrabalanceada tiene la capacidad de absorber dentro del sistema una cierta variedad de grupos, haciendo que ellos -aun aquellos que niegan ideológicamente la legitimidad- se sientan partici-

pando de una competencia política real, donde las minorías pueden tener algunos roles políticos significativos. En una sociedad fuertemente estatizada, y por ello superficialmente muy politizada, esta posibilidad de acceso a la participación política o al poder era considerada muy importante.

Este análisis sobre los principios de la legalidad política, nos servirá más adelante para precisar el significado del proyecto de la UP, en el proceso de polarización política del periodo 1970-1973.

3. Volvamos ahora a la situación en 1970.

Es evidente que la sociedad chilena experimentaba entonces una crisis, de la que el proyecto sociopolítico de la Unidad Popular es un intento de superación. Había una crisis del tipo de capitalismo dependiente, que se estaba demostrando cada vez más incapaz de asegurar la base económica para un creciente proceso de democratización social que incluía en sus últimas etapas al campesinado, y también había una crisis del Estado, tanto de hegemonía como de dirección política táctica, puesto que el centro político había perdido la capacidad de representar en su conjunto los intereses capitalistas, y puesto que éstos se aferraban a un ilusorio retorno a la Derecha, limitada por una larga táctica de política defensiva, e incapaz de un proyecto nacional. Por otra parte, el Centro quedaba aislado de una izquierda con proyecto político propio de transformación global de la sociedad.

El problema de fondo es que la compatibilidad entre capitalismo atrasado y democracia parecía llegar a su fin: el ritmo de crecimiento económico no seguía el ritmo de las demandas y de la movilización. Ya entonces se alzaban voces en la Derecha que llamaban a sacrificar la democracia en aras del desarrollo, desprestigiando a la primera con el nombre de demagogia.

La crisis del desarrollo capitalista dependiente y del Estado de compromiso en Chile parecía ofrecer sólo dos alternativas

viabiles. Por un lado, la reversión de los procesos de democratización y el impulso a la dinámica de acumulación capitalista sin las interferencias de los elementos democráticos participacionistas o redistributivistas. De alguna manera, este era el intento de la alternativa de Derecha, que no puede imponerse en ese momento, debido a la legitimidad del régimen político, y es también el intento del régimen autoritario militar, a partir de septiembre de 1973, una vez culminada la crisis de legitimidad. Por otro lado, la reversión del esquema de desarrollo capitalista, alterando los contenidos de clase del sistema de dominación, pero manteniendo vigente y desarrollando el proceso de democratización en su doble aspecto de tendencias igualitarias y régimen político. En esto consiste el proyecto sociopolítico de democratización no capitalista, intentado por las fuerzas de la Izquierda agrupadas en la Unidad Popular (UP) y conceptualizado como transición al socialismo o vía chilena al socialismo (7). El guarda, frente al sistema social, un doble aspecto de continuidad y ruptura. Continuidad respecto a un proceso de democratización reforzando tanto los aspectos redistributivos o igualitarios, como los relativos al régimen político democrático. Ruptura en relación al esquema de desarrollo capitalista dependiente. El contenido del proyecto social de la UP recogía sin duda las amplias aspiraciones desarrolladas durante largos decenios por el movimiento popular y otros sectores de la sociedad y aparecía como solución históricamente posible a la crisis social. Este carácter

(7) *Sobre el concepto de democratización no capitalista, ver M.A. Garretón «El proceso político chileno (op. cit.). Sobre la Vía al Socialismo, ver el apéndice de este libro. Recordaremos que los elementos centrales del Programa eran la expropiación de los grandes monopolios privados nacionales y extranjeros y su incorporación a un Área Social de la Economía que permitiera asegurar la reorientación de la economía hacia los intereses de las grandes masas populares y un conjunto de medidas destinadas a elevar el nivel de vida y de participación social y política de éstas. Para una evaluación, ver las obras citadas en la Introducción.*

universalista del proyecto -no siempre comprendido y expresado por las organizaciones políticas en el período- quedará definitivamente comprobado cuando el régimen que se instala a partir de septiembre de 1973, deba implantarse sobre la base de desarticular no sólo a la UP, sino a toda expresión o reivindicación orgánica o política de los sectores populares y sobre la destrucción del sistema democrático.

Es evidente también que este contenido mismo del proyecto político social de la UP entraba en contradicción con los intereses de determinados sectores capitalistas nacionales y extranjeros. Desde el inicio, esta contradicción existe y los hechos que preceden al ascenso de Allende al Gobierno así lo demuestran (8). El carácter de la lucha política entre estos dos bloques está dado entonces por el enfrentamiento entre los intentos de realización del programa, por parte del Gobierno, y los de su anulación o eliminación, por parte de la Derecha.

Pero estos dos polos constitutivos de la lucha política se inscriben en un marco de legitimidad inicial del régimen político democrático. Y es esta legitimidad la que impide la totalización de la crisis en 1970. Hablamos de crisis parcial de la sociedad, por cuanto el régimen político no está en crisis y mantiene su legitimidad. El era considerado por las fuerzas y clases en pugna como un ámbito que permitía la competencia por el poder para la realización de sus intereses, que aseguraba a las diferentes fuerzas participación política y que poseía desde el punto de vista de las fuerzas opositoras un sistema de regulaciones y contrabalances que obstaculizaría la imposición de un proyecto global.

La eliminación o anulación del Gobierno, para imponer un proyecto alternativo al planteado por los sectores populares,

(8) *Recuérdese el asesinato del general Schneider, Comandante en Jefe del Ejército. Véase sobre estos aspectos: «El caso Schneider» (Documentos Especiales Quimantú, Santiago, 1972) y «Documentos Secretos de la ITT» (Ed. Quimantú, Santiago, 1972)* [Archivos Salvador Allende

choca inicialmente con la legitimidad del régimen democrático y con la racionalidad de negociación o neutralización del bloque del centro, sin el cual ninguna estrategia de derrocamiento podía prevalecer. Y es en torno a esta problemática que se planteará la lucha política del período.

III. UNA NOTA METODOLOGICA.

El análisis de la dinámica de la lucha política en el período 1970-1973, objeto de este trabajo, se hace a través del estudio de diversas coyunturas políticas.

Muchas veces el uso del concepto coyuntura política fluctúa entre dos tentaciones opuestas. La primera es la confusión entre coyuntura y momento concreto, donde la historia es una suma de acontecimientos acumulados, algo así como una cronología comentada. La segunda consiste en pensar a la coyuntura como momento crucial o como crisis, es decir, como un tiempo de acontecimientos excepcionales o simplemente espectaculares.

A nuestro juicio la utilidad potencial del análisis coyuntural, desaprovechada en las dos versiones citadas, consiste en la posibilidad de introducir un principio de inteligibilidad en la acción política.

El uso del concepto de coyuntura no sólo permite recuperar un sentido, donde lo disperso o distinto de los acontecimientos puede adquirir una unidad de significado; además permite proceder a un corte analítico del tiempo continuo. Ese sentido que se descubre permite tratar como unidad, o totalidad, un tiempo —acumulación y sucesión de hechos— que de otro modo nos aplasta, porque aparece atomizado, como acontecimientos desligados entre sí, o aparece serializado, como conjunto de eventos cuyo encadenamiento sería una mera sucesión, un orden puramente cronológico.

Los cortes analíticos del tiempo continuo se establecen por un cambio o una modificación que afecta al espacio político y

no por las necesidades o caprichos del observador. El análisis coyuntural permite captar la estructuras de la acción y por eso permite detectar los cambios. Estos cambios son modificaciones de las prácticas políticas de las diferentes fuerzas que han estado implicadas en los acontecimientos o que los han observado hasta entonces pasivamente: son cambios que significan la aparición de nuevas fuerzas o la rearticulación de las antiguas o también la redefinición del estilo, de los métodos, de los objetivos de las fuerzas importantes, o la modificación de las relaciones de poder o de capacidad de acción entre ellas.

Se trata en general de cambios significativos que afectan el espacio político. En realidad, ese espacio no existe materialmente como si fuera un escenario o un ruedo o la arena de un circo. La analogía indica el carácter delimitado de las acciones o procesos, sea del surgimiento de nuevas fuerzas, sea de la transformación de una fuerza secundaria en principal.

El término significativo como cualidad de los cambios no debe entenderse en el sentido de decisivo, con lo cual estaríamos asimilando por otra vía la coyuntura con la crisis política.

El adjetivo en cuestión designa las modificaciones de la dinámica de la acción política como objeto de la coyuntura, sin pretender afirmar simultáneamente que esos cambios sólo pueden ser realizados por las fuerzas principales. También las otras, aunque no tengan gran capacidad de movilización o recursos institucionales, pueden ejecutar acciones que redefinen o polaricen o activen el campo.

Esta concepción de la coyuntura como principio de inteligibilidad de la acción política subsume al acontecimiento dentro de una nueva totalidad. Pero para no confundirse con esta afirmación, llegando a identificar entonces el análisis coyuntural con una visión general y abstracta que pasa arriba de lo concreto, es necesario distinguir dos puntos de vista analíticos.

En realidad, desde el primero de ellos -el descriptivo- estudiar una coyuntura significa sumergirse en el acontecimiento, por ende analizar cuidadosamente sus componentes moleculares. Pero desde otro punto de vista -el comprensivo- el análisis fundamental es el de las fuerzas sociales y sus relaciones. Esto implica abandonar el acontecimiento, después de describirlo, para dirigir la atención al campo de interacciones que se constituyen.

El análisis de un campo de fuerzas sociales exige separarse metodológicamente de los actores individuales. Un análisis adecuado del campo de fuerzas, lo cual constituye lo específico de un análisis de coyuntura, implica observar las interacciones no desde el punto de vista de un actor, sino desde el punto de vista de la totalidad. Por otra parte, esta consideración objetiva del campo de fuerzas -la comprensión de la batalla y no sólo del combatiente- es indispensable también para quien busca asumir luego el punto de vista de un actor particular en el plano político.

El análisis coyuntural no es evidentemente un análisis genérico de las temáticas de la acción política, haciendo abstracción de la tiempo realidad. Una praxis existe con sus determinaciones, no es una entelequia intemporal y abstracta. Así el análisis coyuntural investiga el sentido de una lucha política concreta, enmarcada dentro de un tiempo histórico preciso.

Sabemos que el análisis coyuntural necesita descifrar el tiempo corto, porque de otro modo renunciaría a ser un análisis de la ficción histórica para limitarse a ser un análisis de la historia.

Pero, al mismo tiempo, sabemos que el significado de un tiempo corto no sólo es difícil de descifrar, inmersos en la actualidad, sino también que el significado del proceso global no se despliega más que parcialmente en el tiempo corto.

Archivos Salvador Allende

Por ello cada análisis coyuntural representa una hipótesis a verificar. Esto significa que el análisis de la corta duración debe complementarse con el de la larga duración.

Ya hemos indicado nuestras principales hipótesis sobre el carácter de la lucha política del período y sus efectos en la totalización de la crisis societal. Esta crisis debe ser analizada en su movimiento, esto es en su proceso de constitución, porque ella no representa la simple maduración irreversible de gérmenes presentes desde el principio.

El análisis del proceso de constitución requiere establecer cortes o quiebres dentro del tiempo lineal o continuo, cuya opacidad consiste en que los acontecimientos, en su manifestación o sucesión, ocultan sus conexiones internas, impidiendo aproximarse a ellos en forma de totalidades. Esos quiebres permiten introducir en el orden aparente de lo cronológico, una ordenación lógica. Allí entra a jugar un papel el concepto de coyuntura y el análisis coyuntural a que hemos hecho referencia.

Siempre el primer momento del análisis coyuntural es la periodización. Esto ocurre aún cuando el análisis coyuntural se aplica al tiempo presente. Entonces, es imposible conocer el término de una coyuntura, pero para intentar un análisis coyuntural se requiere por lo menos conocer el comienzo, el momento donde se establece una modificación considerada significativa del espacio político. Con más razón aún, el análisis coyuntural del tiempo pasado requiere, como primera operación, establecer los límites temporales de cada coyuntura.

¿Cuál es el criterio de periodización usado para establecer los cortes?. De acuerdo a las ideas señaladas anteriormente, no hemos establecido cortes ad hoc, recurriendo a una determinada variable, factor o dimensión con el cual designar las unidades de significación que constituyen los períodos, por considerar que en tal caso el significado estaría puesto desde el

exterior y la periodización no surgiría del estudio de la dinámica misma de la lucha política. Ello nos ha llevado a establecer los cortes en el tiempo, ahí donde se constituyen cambios significativos en el espacio político, es decir en las relaciones entre fuerzas, aún cuando tales cambios obedezcan en cada caso a diferentes dimensiones o criterios. Como se verá, además, no siempre los cortes coinciden con un acontecimiento preciso o determinados. Más bien, el hecho que el inicio o término de una fase o coyuntura aparezca coincidiendo con un determinado acontecimiento, no implica privilegiar éste en sí, sino la constelación de significaciones que se producen en torno a él y afectan al campo político de fuerzas.

IV. LAS FASES FUNDAMENTALES DE LA LUCHA POLITICA

Hemos dicho que el escenario de la lucha política se constituye con la inserción de un proyecto de democratización no capitalista, en respuesta a una crisis parcial de la sociedad, dirigido por los partidos populares y semantizado y vivido como socialismo. En la medida que se atacan directamente los intereses predominantes de los sectores capitalistas, éste es el núcleo de la lucha política. Pero hemos señalado que ella se da inicialmente en el marco de la legalidad democrática y en condiciones de división inicial de lo que constituirá el bloque opositor. Para prevalecer por sobre la estrategia de neutralización o negociación intentada por el Centro político, la Democracia Cristiana-, la estrategia de derrocamiento deberá reconstituir la unidad política del bloque opositor y, asimismo, hacerse hegemónica en los sectores medios, rompiendo su lealtad con el sistema político con el que se identificaban y plegando de esta manera a la Democracia Cristiana.

Esta hipótesis general nos permite distinguir tres grandes etapas de la lucha política en el período.

La primera, abarca la coyuntura que va desde la elección de Allende, en septiembre de 1970, a noviembre de ese mismo año, en que fracasa, por prematura, la estrategia de derrocamiento, en este caso expresada como intento por impedir el ascenso de la Unidad Popular al Gobierno.

La segunda, abarca desde noviembre de 1970 hasta el desencadenamiento de la crisis de octubre de 1972 y está definida por el relativo predominio de la estrategia de neutralización por sobre la de derrocamiento.

Entre la segunda y la tercera etapa debe ubicarse, como momento de transición con rasgos que lo identifican como una fase diferente, la crisis y el paro de octubre de 1972. La participación militar es la expresión de una situación que anuncia una solución de nuevo tipo al conflicto político.

La tercera etapa va desde la resolución de la crisis de octubre de 1972 hasta el momento del golpe militar de septiembre de 1973 y se define por el despliegue de la estrategia de derrocamiento.

En cada una de estas fases pueden distinguirse diversas coyunturas que serán analizadas a través de las páginas que siguen.

Vale la pena indicar dos limitaciones en el análisis de estas etapas y coyunturas. En primer lugar, la insuficiencia de términos como Derecha, UP, Gobierno, DC, FF.AA. para dar cuenta del comportamiento de actores que no siempre aparecen de modo tan monolítico en el desarrollo de sus acciones. En análisis globales como éste, se trata de una limitación casi insuperable. En segundo lugar, el material con que se ha trabajado es documental y relativamente accesible, de ahí que muchos acontecimientos que pertenecen a lo que puede llamarse historia secreta u oculto del período, permanecen aquí en la opacidad.

CAPITULO SEGUNDO EL DESARROLLO DE LA LUCHA POLITICA

**PRIMERA FASE:
DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
AL ACCESO DE SALVADOR ALLENDE
AL GOBIERNO.
(Septiembre a Noviembre de 1970).**

La primera coyuntura, que abarca desde el momento del triunfo electoral de la Unidad Popular hasta el acceso al Gobierno, presenta una diferencia significativa respecto a las siguientes. Desde el punto de vista político, ese tiempo está centrado en torno a una problemática, la elección por el Congreso Pleno. Esta marca los temas, los estilos y métodos de la acción política. No es normal que una coyuntura presente esa unidad de problemática, que da la apariencia de una conexión interna de los acontecimientos casi directa.

Para facilitar la descripción de los movimientos internos, trataremos de identificar en la coyuntura ciertas unidades moleculares que la componen, a las cuales denominaremos momentos. La finalidad de esta identificación de cortes internos, es permitir una adecuada descripción de la coyuntura como proceso.

Recordemos que los resultados de las elecciones presidenciales fueron: Allende, 1.075.616 (36.3 %); Alessandri, 1.036.278 (34.9 %); y Tomic, 824.849 (27.8 %).

El primer momento de esta coyuntura abarca los días inmediatamente posteriores al triunfo electoral de Allende, hasta el momento en que se cumple una doble condición: se configura una reacción ya estructurada por parte de la Derecha y también se precisa la estrategia alternativa de la Democracia Cristiana

respecto a esas posiciones. Desde el primer instante, el grueso de la Derecha, representada a través del Movimiento alessandrista, -que agrupaba a las principales personalidades, de partido e independientes, que habían promovido y apoyado la candidatura de Jorge Alessandri-, eligió la estrategia de impedir por la vía constitucional y legal el acceso de Allende al Gobierno. Evidentemente que esa estrategia requería el apoyo político de la DC, poniendo en sus manos las armas principales para la resolución del problema.

Sin embargo, en la madrugada del 5 de septiembre, a las pocas horas del triunfo, el candidato presidencial derrotado de la DC, Tomic, reconoció la victoria de Allende y el PDC indicó que los acuerdos que tomaría a su debido tiempo tendrían en vista la voluntad mayoritaria del pueblo chileno emitida en un proceso limpio y válido.

La Derecha conocía, cuando emitió su propia declaración el 6 de septiembre, tanto estos antecedentes como las proximidades programáticas entre Tomic y Allende. También conocía el carácter organizacional de la DC. Sin embargo, confió en su capacidad para conseguir que la resolución del problema político se hiciera en torno a su línea. Esta línea tenía dos aspectos, negaba la significación de las negociaciones con la Izquierda, pero evitaba plantear la solución extralegal.

La Izquierda desarrolla desde el primer momento de la coyuntura una línea de movilización de masas para la defensa del resultado electoral.

Tal es el sentido de la Declaración de la Central Unica de Trabajadores (CUT) el 5 de septiembre, indicando la voluntad de lucha y sugiriendo los efectos que podría provocar el desconocimiento del resultado electoral. El mismo sentido tuvo la declaración del PS, donde se insinuaba el carácter sedicioso de la proposición alessandrista.

En este primer momento la Derecha sólo anuncia las grandes líneas generales de su estrategia, la cual todavía permanece imprecisa en sus mecanismos concretos. En sus primeras declaraciones el alessandrista fue impreciso, señaló el carácter inconcluso del proceso electoral e hizo un llamado a la DC en términos de la opción entre marxismo o democracia, pero sin pretender involucrar los intereses políticos de la DC.

El segundo momento de la coyuntura se caracteriza por dos acontecimientos centrales. En primer lugar, la Derecha precisó su estrategia, superando la consigna genérica marxismo o democracia. Definió, como se verá, un mecanismo constitucional concreto que tomaba en cuenta los intereses del Centro, la fuerza parlamentista más significativa de un eventual bloque contrario a la UP. En segundo lugar, la DC llevó cada vez más al terreno de la negociación la resolución del problema planteado, recibiendo, por parte de Allende, una respuesta positiva en principio.

Este segundo momento es entonces el del enfrentamiento agudo entre la tesis de la Derecha respecto al carácter inconcluso del proceso electoral y la tesis de la negociación, destinada a obtener de la UP garantías democráticas.

El 10 de septiembre, la DC señaló a través de una Declaración de su Presidente, que estaba dispuesta a apoyar un proceso de cambios revolucionarios, pero democráticos, siempre que Allende otorgara garantías formales de preservación de la democracia.

La respuesta de la UP al mismo tiempo que abrió posibilidades de negociación, trataba de trasladar el problema de nivel. En ella se insistió en el programa como eje conductor de las acciones futuras y en las garantías explícitas que otorgaban tanto este documento como el carácter pluriclasista de la coalición.

Durante toda la duración de este momento coyuntural la estrategia de la Izquierda se dirigió a dos objetivos: neutralizar las presiones de la Derecha sobre la DC e impedir que aquellas se desencadenaran en movilizaciones masivas anti-marxistas. Para conseguir esto, la UP insistió en la doble temática del pluralismo interno y del carácter no marxista del futuro Gobierno. Fue significativo en ese terreno la intervención del Presidente del PR, la cual mostraba que las garantías estaban dadas por la propia composición y estructuras internas de la UP.

Esta temática tenía dos sentidos, mostrar voluntad de negociar pero indicar las reticencias que existían para adquirir compromisos que ataran las manos del Gobierno, y le impidieran ejecutar el programa. Sin embargo, la redefinición del planteamiento de la Derecha obliga a la UP a poner en sordina esas reticencias iniciales.

Esta redefinición se expresó en una declaración pública del candidato derechista, quien ofreció renunciar si era elegido por el Congreso Pleno, con el objeto de facilitar una segunda elección con un candidato DC. El abandono de la anterior fórmula genérica de las elecciones permitía conectar los intereses de los políticos de la Derecha con los intereses políticos inmediatos de la DC. Sin embargo, pese a las aparentes ventajas de este ofrecimiento y a la campaña de prensa desencadenada, cuyo objetivo central era sembrar dudas sobre la factibilidad o la eficiencia de la negociación emprendida, la DC no abandona esa línea.

El tercer momento está marcado por la derrota de la proposición derechista y por el avance de la discusión sobre las garantías. Esta doble característica estuvo acentuada además por la declaración de neutralidad de las FF.AA., contenida en el discurso del General Schneider con motivo de las Fiestas Patrias:

Todos estos factores produjeron el espacio para el surgimiento orgánico de la extrema Derecha, que criticaba el sometimiento de los partidos de la Derecha o del Centro y su empantanamiento dentro de las fórmulas constitucionales y legales. El 10 de septiembre se había creado el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad dirigido por el abogado Pablo Rodríguez Grez y que, como veremos más adelante, tendrá un papel importante en las actividades de aceleración de la caída de Allende y en el levantamiento militar del 29 de junio de 1973.

El acontecimiento central de este momento fue la aprobación por parte de la DC del documento que contenía las garantías y condiciones para el apoyo de la DC. El eje ideológico del documento es el rechazo de la polarización marxismo-democracia y su sustitución por la polarización fuerzas progresistas-fuerzas conservadoras. La DC reivindica su carácter revolucionario e insiste que al pedir garantías no busca la defensa de intereses de grupos o de personas.

Los cinco puntos centrales planteados por la DC fueron: a) **mantención y preservación** de los elementos fundamentales de la institucionalidad política y de las garantías constitucionales respecto a la libertad de asociación, de prensa y de opinión; b) **mantención del sistema de tres poderes** del Estado y de la división de atribuciones entre ellos; c) **mantención del carácter profesional y de la neutralidad política** de las FF.AA.; **compromiso de impedir la creación de organizaciones armadas** paralelas; d) **libertad de educación a todos los niveles**, discusión democrática de las **reformas educacionales** que se pretenda emprender y **autonomía académica** y financiera de las Universidades; e) **libertad sindical** y también para las organizaciones comunitarias, **con reconocimiento** de los derechos de petición y huelga. El carácter de estas reivindicaciones muestra el papel que la DC se otorga en el liderazgo de los sectores de capas medias del país.

El cuarto momento de esta coyuntura es la consagración a nivel constitucional de los puntos concertados. La respuesta de Allende a la DC es calificada por ésta como no completa e insatisfactoria. En vista de eso, exige la consagración constitucional de los principios aprobados.

El desarrollo de los acontecimientos obligó a la Directiva de la DC a convocar una Junta Nacional que decidiera la línea a seguir. En ella se enfrentaron dos tendencias polares respecto a la conducta que debía observarse en el Congreso Pleno. La posición de rechazo a Allende había sido públicamente defendida por el Departamento Sindical, mientras la posición favorable a la ratificación había contado con el aval político de la juventud.

Dentro de ese clima, la respuesta favorable de la UP y de Allende a la petición de consagrar como garantías constitucionales los puntos negociados, permitió obtener una solución unitaria y favorable para Allende.

Justamente cuando las negociaciones políticas en torno al problema de las garantías llegaban a un punto de tensión y de eventual impasse, un grupo de pobladores liderados por el MIR ocuparon la Casa Central de la Universidad de Chile y realizaron actos considerados vejatorios en la estatua del General Baquedano.

Las FF.AA. reaccionaron públicamente en un documento emitido por los comandantes en Jefe, donde se rechazaban los presuntos actos vejatorios y donde se indicaba que la historia y las tradiciones que conforman el alma de una nación no tienen banderas ni siquiera orientaciones ideológicas. Esa referencia, a través de la cual se afirmaba un radical apoliticismo, expresaba la substancia de la posición de las FF.AA. durante esta fase.

Los partidos de la UP, especialmente el PC, condenaron

estos actos como provocaciones que ponían en peligro la resolución legal de los problemas políticos, cuando ésta ya llegaba a un punto culminante.

El 20 de octubre la prensa publicaba una declaración de Alessandri donde éste pedía que no votaran por él en el Congreso Pleno y en la cual definía a Allende como un hombre de probadas convicciones democráticas. Casi al mismo tiempo era aprobado por el Senado, con la asistencia del futuro Presidente, el Estatuto de Garantías elaborado por una comisión mixta de la UP y la DC.

El último momento de esta coyuntura, previo al ascenso de la UP al Gobierno, estuvo marcado por el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General Schneider, en manos de militantes de extrema derecha que intentaban una extraña conspiración.

A los dos días, el Congreso Pleno elige por amplia mayoría como Presidente de la República al candidato de la Izquierda. La DC, comentando la significación del acto, indicó que sólo su actitud impidió que los elementos fanatizados hubiesen llevado al país a la zozobra.

Esta descripción de la coyuntura, en la cual hemos tratado de poner de relieve los principales acontecimientos, permite plantear algunos interrogantes, cuya respuesta exige una perspectiva analítica.

Tres hechos llaman la atención poderosamente. Ellos son: el aislamiento político de la Derecha durante la coyuntura, la renuncia por parte de la DC a una solución que convenía a sus intereses políticos inmediatos y el comportamiento de las FF.AA. Desgraciadamente, todavía hoy no es posible dar respuesta satisfactoria a algunas de las preguntas que estos hechos plantean, porque se carece de antecedentes históricos fide-

dignos. Por ello, muchas de nuestras afirmaciones son provisionales.

Creemos que la clave interpretativa de esta coyuntura está en la existencia de una doble legitimidad, la cual determinó los parámetros o cotas, dentro de los cuales, las diferentes fuerzas se movieron. Esa doble legitimidad consistía, primero en la adhesión instrumental -por cuanto el sistema permitía articulación y representación de intereses variados—e ideología -sobre la base de valores y concepciones éticas aparentemente arraigadas- a la democracia como principio de organización política y, segundo, en la generalización de la idea que la sociedad chilena requería cambios profundos. Esas dos concepciones que estaban universalizadas en forma de sentido común, como resultado de una larga y reiterada acción comunicativa, se afirmaban la una a la otra. La democracia permitía el cambio social, al mismo tiempo que éste reforzaba a la democracia.

Esta doble legitimidad del régimen político y de la necesidad de cambios, impidió que tomaran cuerpo una solución extra legal, o las soluciones que podían crear el clima de enfrentamientos armados o de guerra civil. Tal es el caso de los intentos de los grupos de extrema derecha y de los esfuerzos de sectores norteamericanos por impedir el acceso de Allende al Gobierno (9). También esta doble legitimidad impidió que en esta fase tomaran cuerpo soluciones conservadoras.

Esta legitimidad operaba como selector de las alternativas viables al nivel de las organizaciones políticas y de sus elites dirigentes. De hecho la unidad política de la DC no resistía ninguna otra solución que aquella que finalmente se impuso. En este sentido, sin embargo, es indispensable no sobreestimar

(9) Véase al respecto, «Documentos Secretos de la ITT» (Ed. Quimantú Santiago, 1972) y «El caso de Schneider» (Quimantú, Santiago, 1972).
Archivos Salvador Allende

la fuerza que tuvieron en la coyuntura las tendencias internas a negar el apoyo a Allende. Ellas por de pronto, radicaron sobre todo en personalidades ligadas a los grandes intereses económicos capitalistas o en aquellos grupos internos cuya práctica los había llevado a virulentos enfrentamientos con la Izquierda, por ejemplo, la elite sindical. El discurso del Ministro de Hacienda de Frei, a fines de septiembre, creando alarma por la situación económica **como consecuencia de los resultados de las elecciones, cualquiera sea su origen interno dentro de la DC, es una expresión confusa de estas reticencias.**

De hecho, la unidad interna de la DC para apoyar a Allende sobre la base de garantías constitucionales para la preservación de lo fundamental del régimen político, se realiza sobre la base de un cálculo de intereses de largo plazo. La solución propuesta por la Derecha, en la medida que iba en dirección inversa de la sensibilización intensificada de los sectores populares que la DC había agrupado, sensibles a las posibilidades que abriría un vasto programa de cambios, era vista como una tentación conservadora. El peligro que ello involucraba para la DC era claro, **la hubiera obligado a cerrar una alianza política con la Derecha, como el único modo de salvar los obstáculos de un gobierno marcado por el sello de su origen.** La mutación conservadora de la DC era visualizada como el desenlace virtual en un Gobierno que **hubiese vivido en permanente conflicto con una Izquierda, en un clima de permanente convulsión, donde las posibilidades de institucionalización de los conflictos hubiese sido siempre precaria.** La DC ve ante sí el panorama de un **bloque conservador** dirigido por ella, que hubiese debido gobernar **en un contexto represivo.**

Así, renunciar a los intereses políticos de corto plazo le permite mantener su **identidad** política y organizacional, como partido transclase **con fuerte arraigo popular.** La solución que la Derecha ofrece es vista como una trampa política para la DC y como una quiebra virtual del modelo de articulación de

intereses en que se sostenía el sistema político. Hubiese significado otorgarle legitimidad a las tendencias insurreccionales en la Izquierda en un momento en que importantes sectores populares concebían esperanzas en el programa de la UP y donde hubiese sido fácil generalizar la idea de una falsa democracia liberal burguesa.

Estamos, entonces como lo estaremos permanentemente durante el periodo, frente a la problemática del carácter organizacional de este centrismo, el cual no era la forma típica o, más bien, tradicional de centrismo. Su anticipidad tiene su origen en la fuerte dimensión popular de ese centrismo, tanto desde el punto de vista de su composición organizacional, de su arraigo electoral y de representación como desde el punto de vista de los componentes ideológicos que lo identificaban. Es importante darse cuenta que el problema de la legitimidad no se planteaba a causa de la legalidad de la solución puesta por la Derecha. La elección del candidato presidencial que había obtenido el segundo lugar en las elecciones, por parte del Congreso Pleno, hubiese sido solución perfectamente constitucional.

La Derecha en esta coyuntura no puede asumir el rechazo a una solución legal porque iría en el sentido contrario de la legitimidad indicada. Pero el problema para ella es que la mantención dentro del cuadro constitucional pone la solución de la situación en manos de la DC. La búsqueda de cualquier otra solución por parte de la Derecha está impedida porque esa legitimidad acotaba la definición de las Fuerzas Armadas.

El comportamiento de este último sector, decisivo desde el punto de vista del balance de poder, estaba determinado, fuera de él, por la fuerza entre grandes sectores de la sociedad de la legitimidad democrática y de la necesidad de cambios y, dentro de él, por el impacto que provocaba esa doble legitimidad.

El putchismo que pudo tentar a algunos no llegó a genera-

Archivos Salvador Allende

lizarse. Aparecieron formas de resolución del problema político planteado que eran mucho más compatibles con el fenómeno de la legitimación y, sobre todo, con la ausencia de un proyecto alternativo de consenso dentro de las FF.AA. Hay que recordar que éstas habían permanecido largo tiempo al margen de la discusión política, cultivando una doctrina de apoliticismo y de acción profesional, sin la cual los desajustes de la relación entre economía y política hubieran provocado mucho antes el desplazamiento del mando civil. La existencia interna de estos tipos de formación y socialización tienen como resultado, en la coyuntura, que el consenso para la intervención requería determinadas condiciones de crisis social y política que no aparecían en 1970. Todo lo contrario, la convicción generalizada era que una solución de fuerza o incluso una solución que frustrara la expectativa popular provocarían ellas una crisis de la convivencia política. Como aparecieron posibilidades de solución negociada de consenso entre la elite política, las FF.AA. permanecieron al margen.

SEGUNDA FASE: DEL ACCESO AL GOBIERNO A LA CRISIS DE OCTUBRE. (Noviembre 1970 a Septiembre 1972).

1. DEL ACCESO AL GOBIERNO A LAS ELECCIONES MUNICIPALES. (Noviembre de 1970 a abril de 1971).

La coyuntura que comienza con el acceso de Allende al Gobierno y que termina con las elecciones de regidores, en abril de 1971, es la primera coyuntura del periodo de Gobierno. Ella plantea problemas metodológicos de carácter descriptivo y analítico que no presentaba la coyuntura anterior.

Esa coyuntura previa se caracterizaba, como se ha dicho, porque había una unidad de problemática que aparece directamente.

Las otras coyunturas presentan, al contrario, una diversidad de problemáticas. Esto nos obliga a utilizar una operatoria descriptiva distinta. En vez de tomar como unidad de descripción una unidad tiempo, el momento de la coyuntura, deberemos tomar los acontecimientos donde se expresaban determinadas problemáticas. La utilización de cortes temporales intracoyunturales, no nos servirá como recurso descriptivo, sino como recurso analítico.

El relato de los acontecimientos estará necesariamente disminuido. Nuestro intento será exclusivamente captar la significación de ellos, desde la perspectiva de una lectura sobre el significado de la coyuntura.

Archivos Salvador Allende

Los acontecimientos políticos más significativos de esta coyuntura son: 1) la agitación agraria; 2) la puesta en marcha de una determinada estrategia para el cambio de las estructuras económicas y los problemas políticos que ello suscitó respecto a la compra de acciones bancarias y respecto a las requisiciones y expropiaciones de industrias; 3) los conflictos que se suscitaron a propósito de problemas judiciales; 4) el comienzo de la discusión respecto a la nacionalización del cobre; 5) la temática de la sedición, planteada a propósito de la negativa de desafuero a un senador opositor por la Corte Suprema y a propósito del llamado affaire del cobre, y 6) la preparación y realización de las elecciones municipales de abril.

La agitación agraria en las provincias del Sur y en particular en Cautín, es uno de los principales problemas políticos del período, no tanto por la importancia cuantitativa que tiene, sino por las problemáticas que en torno a ella se plantean. El análisis de ese acontecimiento permite visualizar la estrategia de las diferentes fuerzas opositoras respecto al Gobierno y el modo como éste ha resuelto enfrentar determinados problemas.

Cada una de las fuerzas hace una lectura diferente de la ola de tomas y de los enfrentamientos entre campesinos, mapuches y propietarios, que se escalonan desde diciembre de 1970 hasta marzo de 1971.

Una de las lecturas proviene de las organizaciones patronales. Ellas se esfuerzan por definir el problema desde un punto de vista estrictamente gremial, evitando ser arrastrados a un juicio político global respecto al Gobierno. La intención de su acción es evitar una radicalización de la política agraria del Gobierno. Luchan por obtener, sobre la base de la negociación, un espacio para la agricultura privada dentro de una sociedad que vive un proceso de profundas transformaciones. Esta posición de las organizaciones patronales implica una profunda ruptura con los comportamientos desarrollados durante el gobierno de Frei. Esta ruptura es tematizada, al principio de la

coyuntura como si el cambio de Gobierno significara el paso de una Reforma Agraria demagógica e impulsada por motivos políticos a una Reforma Agraria técnica y planificada.

Para realizar esta modificación de sus comportamientos y análisis previos, las organizaciones patronales agrícolas deben transformar sustancialmente el discurso y la práctica corporativa frente a la Reforma Agraria, asumiéndola como un cambio necesario.

Su énfasis se traslada de la reivindicación del derecho de propiedad, de la movilización contra las expropiaciones consideradas en sí como expropiatorias, a la defensa de la aplicación legal y planificada de la Reforma Agraria. La temática de la fijación rápida de las reglas del juego donde se indique el espacio de la agricultura privada dentro de un sistema agrícola con predominio del sector socializado, no se formula a nombre de la justicia o de derechos naturales que deberían ser inalienables, sino desde el punto de vista de la eficacia del sistema agrícola.

Esa línea de conducta, mantenida en un momento en que recrudecen las tomas de predios, reproduce la escisión entre las organizaciones patronales y la DC, aún cuando ésta aparece en este momento como la principal fuerza política de la Oposición. El intento por parte de los gremios patronales de defender los intereses corporativos más esenciales -como son la supervivencia en cuanto clase de productores agrícolas- desterrando la perspectiva conservadora y asumiendo una perspectiva nacional, entra en contradicción con los intereses políticos de la DC.

Para esta organización, más aún que para la Izquierda, por la posición gobernante de ésta, todos los acontecimientos de la coyuntura tienen una determinación de corto plazo que se inscribe en una de largo plazo. En el caso de la DC el objeto de largo plazo es convertirse en la única alternativa de oposición al Gobierno de Allende. Para el logro de esta meta mediata

requiere consolidarse durante las elecciones de abril como la principal fuerza política, no sólo de la Oposición, sino del país.

Así, el problema de la agitación agraria está inserto para la DC dentro de la problemática política global. No le interesa desde la perspectiva de los patronos amenazados, como un problema corporativo o gremial. La línea de la DC respecto al problema agrario tiene dos aspectos simultáneos. Primero, agita ese problema para aglutinar en torno a sí las fuerzas opositoras. Segundo, busca presionar al Gobierno para mantenerlo dentro de límites legales. La estrategia de la DC durante esa coyuntura, y también durante la mayor parte del periodo, es tratar de acotar la acción del Gobierno, puesto que la radicalización de su acción permite la recuperación política de los sectores más conservadores. La posibilidad para la DC de ser ella la alternativa de Oposición requiere que el Gobierno mantenga su acción dentro de los límites negociados en el Estatuto de Garantías. Esa negociación simboliza para la DC su capacidad para resolver democráticamente los conflictos planteados por el triunfo electoral de la Izquierda.

Pero al mismo tiempo, la DC debe enfrentar el problema agrario desde otro punto de vista, la mantención de su base social campesina en una situación en que se intensifican las demandas y las movilizaciones espontáneas por la tierra.

Para la UP y para el Gobierno el recrudecimiento de las tomas de predios, que en realidad habían comenzado el último año del Gobierno de Frei, implican una serie de problemas políticos que están en relación con sus propios intereses como coalición gobernante y con las temáticas que la Oposición plantea a propósito del proceso.

El principal problema se expresa en el conflicto entre la necesidad de mantención del orden que toda fuerza gobernante enfrenta, exigido por la Oposición política y por las organizaciones patronales, y la necesidad de respetar la racionalidad

de lo popular. Esta última lógica se expresa en varias dimensiones: el reconocimiento del carácter justo de muchas de las tomas o de las acciones campesinas ilegales, una cierta sacralización de la acción de las masas puesto que ellas expresan tendencias revolucionarias, y por último, el rechazo a utilizar la represión contra los asalariados. En esa problemática está presente una de las tendencias más características del Gobierno, el sentirse representante de las clases hasta entonces explotadas, encargado de restaurar en sus actos viejas injusticias y desigualdades.

Ante esto, la Oposición desarrolla la temática del desorden y de la autoridad sobrepasada y trata de obligar al Gobierno a acciones más enérgicas. Este responde en un doble plano.

Primero, indicando que la política de persuasión es la única que puede permitir resolver el problema. La represión minaría la confianza en la acción gubernativa de esos sectores movilizados y radicalizados, multiplicando la posibilidad de explosiones espontáneas. Segundo, indicando que en gran parte del comportamiento de los campesinos estaba determinado por la violencia y la injusticia de los patrones.

En el curso del conflicto, las fuerzas identificaron de diferentes modos a los responsables. Sin embargo, creemos que la importancia que adquirieron las tomas de fundos durante la coyuntura, y durante la mayor parte del periodo, es la resultante de un doble hecho. Por una parte, revelaba la influencia que podía adquirir, en este caso entre los sectores campesinos, una estrategia que actuaba para desarrollar un poder de masas que impusiera al Gobierno el ritmo de la Reforma Agraria. Por otra parte, esta sucesión de tomas, reiteradamente condenada por el Gobierno porque lo ponía en un impasse político durante un período electoral, revelaba la existencia de poderosos fermentos de movilización disponibles. Algunas de las tomas fueron evidentemente organizadas por sectores que respondían a una estrategia de extrema Izquierda, a la cual se sumaban sectores

de la UP. Pero otras fueron generadas respondiendo a necesidades percibidas autónomamente. Es evidente que tras esos comportamientos existía la conciencia de realizar un derecho.

El Gobierno estaba sometido a una triple presión, la presión de la DC a través de la tesis de la autoridad sobrepasada, la de los gremios patronales que buscaban un espacio para la iniciativa privada en la agricultura y la de los campesinos movilizados tras la tierra.

Enfrentado a estas exigencias contradictorias en pleno período electoral, el Gobierno actúa de un modo que será prototípico: Transforma las tomas en un medio de aceleración de la Reforma Agraria, utiliza la persuasión frente a los campesinos sin tierras y emplea la legislación de represión de los delitos políticos frente a la violencia de los latifundistas. Su respuesta global fue la masificación de la Reforma Agraria en las provincias convulsionadas y la definición de reglas del juego donde se le asignaba un rol mínimo y precario a los agricultores privados.

De ese modo fracasan tanto la táctica de la DC consistente en transformar el problema agrario en un elemento movilizador para obligar al Gobierno a situarse en un ámbito donde debía negociar con la única fuerza política disponible, como la táctica de los gremios patronales consistente en buscar la moderación de las transformaciones basándose en la idea que el Gobierno deseaba ampliar el consenso.

Enfrentado en pleno período electoral, momento donde podía haberse sentido empujado a buscar un apoyo ampliado, a las primeras alternativas importantes, el Gobierno eligió una política definida como de clase, lo que también implicaba una estrategia electoral.

El segundo conflicto político importante de esta fase se suscita por las compras de acciones bancarias, con el propósito

de estatizar la banca privada, y a consecuencia de las intervenciones y requisiciones de empresas.

En ese terreno, el camino elegido por el Gobierno es el de adecuarse a posibilidades abiertas por una legislación heterogénea y confusa para realizar su vasta política de transformaciones económicas, cuyo elemento central era la destrucción de la estructura monopólica privada y la construcción de lo que denominó Área de Propiedad Social (APS). Así, comenzó a utilizar viejas cláusulas legales que le otorgaban insospechados poderes. Este recurso, que la Oposición tematiza como legalidad sobrepasada, ya desde esta coyuntura, era evidentemente legal en su forma. Pero también era evidente que su uso generalizado alteraba el equilibrio entre los poderes del Estado, privilegiando los del Ejecutivo y cuestionando así el principio que permitía la articulación de los intereses dominantes dentro del sistema político. De nuevo esta coyuntura tiene un carácter prototípico pues en ella se viven, al principio bajo la forma de la sorpresa, los conflictos típicos del periodo.

La primera requisición del Gobierno, la fábrica textil Bellavista Tomé, es acogida con beneplácito por todos los sectores, cuando Allende la anuncia en una visita a Concepción. Los motivos que justificaban la medida eran la paralización y abandono de la industria por parte de los empresarios. Es evidente que en ese momento no se piensa que la cláusula invocada servirá como fórmula general.

Sin embargo, la aceptación de estas medidas expropiatorias por parte, por ejemplo, del principal diario ligado a los grandes intereses económicos, El Mercurio, son reveladoras del estado ideológico de las clases amenazadas en sus intereses económicos y de sus representantes políticos tradicionales, en los primeros momentos del Gobierno de Allende.

En esa aceptación resignada, y apenas reticente, se pone en evidencia el mismo tipo de táctica de los gremios agrarios. El

análisis que hacen sobre la expropiación de Bellavista Tomé distingue entre el empresario que se atiene a la ley, que hace funcionar la industria y que colabora con la tarea nacional de producir, de aquél que, acicateado por el pánico, deja todo abandonado. En ese razonamiento hay una lógica común con el de los agrarios. El objetivo aparente es defender la iniciativa privada y no a los capitalistas o latifundistas individuales.

La reacción es, sin embargo, muy distinta frente al procedimiento para la compra estatal de las acciones bancarias. Mientras que las expropiaciones o requisiciones de algunas industrias, aduciendo decretos no derogados de 1932, podrían ser vistas como recurso de excepción que se justificaba por motivos nacionales, el procedimiento de estatización bancaria revela una estrategia general.

En este terreno se produce una escisión entre los intentos de la DC de generar una movilización en contra del procedimiento extraparlamentario usado para la estatización bancaria y el comportamiento de los grandes accionistas, que, empujados por las ventajas de la proposición gubernamental y temerosos de un endurecimiento posterior, empiezan a vender sus acciones en grandes cantidades.

En todo caso, durante la coyuntura estudiada, el problema de la estrategia de transformación económica se plantea todavía en forma preliminar.

El tercer problema político importante de la coyuntura es el comienzo del proceso de nacionalización de la gran minería del cobre (10). La importancia de este acontecimiento, que finalmente derivará en una fórmula de consenso, es que las primeras

(10) El proyecto de Reforma Constitucional sobre la nacionalización del cobre fue presentado por el Ejecutivo el 19 de Enero de 1971. Tuvo un tiempo

proposiciones gubernamentales son recibidas con extraordinaria reticencia por la DC.

Para esta organización política el proyecto enviado a la discusión parlamentaria revelaba un estilo, puesto que hacia tabla rasa de la política de chilenización emprendida por el Gobierno de Frei. La DC ve en esta actitud un comportamiento sectario y dogmático y una negación de la política del consenso. Ella otorga a su oposición al proyecto enviado un cariz populista. No sólo lo critica desde el punto de vista de la defensa histórica del Gobierno de Frei, sino también invocando el nombre de las organizaciones gremiales cupríferas, cuyos derechos adquiridos serían amenazados por las ambigüedades del proyecto. Es ese otro intento de generarle contradicciones al Gobierno en el campo de lo popular. Esa misma línea es usada entre los campesinos, denunciando presuntos planes de estatización de la tierra, y entre los bancarios proponiendo la propiedad de los trabajadores como alternativa de la estatización. Sin embargo, en esa coyuntura, esos intentos se muestran prematuros.

Otro de los conflictos políticos del periodo, que también tiene un carácter premonitorio, son los enfrentamientos entre el Gobierno y la UP y el Poder Judicial. En el curso de esta coyuntura, esos enfrentamientos se desencadenan a propósito de tres acontecimientos.

de tramitación de seis meses. Las principales modificaciones introducidas en la discusión parlamentaria tuvieron relación con la validez de los contratos leyes, negociados por la Administración Frei para realizar su política de chilenización con la composición del Tribunal Especial del cobre, encargado de fijar el monto de las indemnizaciones y con los derechos de los conccionarios de las mismas. Para conocer la trayectoria parlamentaria de los más importantes proyectos de ley o reformas constitucionales durante el periodo: Francisco Cumplido, «Proyectos legislativos e institucionalidad jurídica 1964-1973» (op. cit.).

Uno de ellos es el rechazo, por parte de la Corte Suprema, de la inhabilitación de un senador derechista que el Fiscal Militar suponía implicado en el asesinato del General Schneider. Ese suceso desencadenó una violenta campaña de la UP contra el carácter clasista del Poder Judicial. El segundo punto de fricción es el Proyecto de Tribunales Vecinales, enviado por el Gobierno al Parlamento, cuyo objeto era crear tribunales elegidos por sufragio universal que conocerían causas de menor cuantía. Este Proyecto fue retirado posteriormente de la discusión parlamentaria, a causa de la oposición política y del Poder Judicial. El tercer acontecimiento es el discurso del Presidente de la Corte Suprema, al inaugurar el Año Judicial 1971, donde defendía a la justicia de las críticas recibidas, negaba su carácter clasista y trataba de demostrar su apertura a una política de cambios; pero el centro político del discurso fue el cuestionamiento del Proyecto de Tribunales Vecinales.

Evidentemente que esa intervención política del Poder Judicial habría merecido, en condiciones normales, una crítica unánime. Sin embargo, la intensidad de la lucha política de la coyuntura hace que el discurso fuera recuperado por la Oposición en general y en particular por la DC. Esta analiza el discurso como un acto de legítima defensa, insinuando sólo de pasada los inconvenientes de un pronunciamiento político del Poder Judicial.

Este hecho es revelador del clima político de la coyuntura. La intensidad que cobran los enfrentamientos, evidentemente determinada por la expectativa electoral, produce una polarización artificial, que no corresponde a una polarización real, -la Oposición estaba profundamente dividida-, pero que impide cualquier entendimiento racional en tomo a los proyectos del Gobierno. En ese clima se desarrolla, por ejemplo el análisis de los Tribunales Vecinales. La fuerte politización de la coyuntura le impide a la DC descubrir en ese proyecto una continuación de su política respecto a la marginalidad. Lo

analiza, más bien, en una hipótesis paranoica como si allí se presagiara una institución de la dictadura del proletariado.

El tema de la sedición es también demostrativo de este clima. Ella se convierte en una temática del Gobierno y de la UP desde el principio del periodo. Quizás justamente por ello perdió fuerza posteriormente como consigna de movilización. Durante esta coyuntura este tema empieza a constituirse a propósito de tres hechos. En primer lugar las declaraciones del Senador Morales Adriazola, el cual había estado sujeto al proceso de inhabilitación mencionado. Esas declaraciones son un llamado a la unidad nacional contra el Gobierno y no un llamado a la acción extra-legal, aunque evidentemente el carácter del personaje permitió la lectura segunda que la UP realizó. En segundo lugar, los entendimientos todavía puntuales entre la DC y la Derecha en la discusión de la ley de presupuesto y del proyecto de reajustes. En tercer lugar, el llamado affaire del Cobre, suscitado a propósito de una denuncia del Gobierno respecto a una maniobra internacional destinada a bajar artificialmente el precio del cobre.

Parece evidente que el tema de la sedición no corresponde a la naturaleza de la coyuntura. Todo lo contrario, el conjunto de las fuerzas se movía en una perspectiva electoral. Ese hecho proporciona la clave interpretativa de la coyuntura.

Desde el punto de vista de la estructuración del campo de fuerzas, esta coyuntura se caracteriza por un enfrentamiento agudo entre la DC y la UP y por la relativa apatía política de la Derecha. Este último rasgo representa un fenómeno de continuidad, después de la derrota de la línea del Partido Nacional durante la fase de negociaciones entre septiembre y noviembre de 1970 y, luego, al conocerse las filiaciones de los autores de la muerte del General Schneider. Además durante los primeros meses de esta coyuntura, la Derecha política se ve anulada por la táctica gremial de las organizaciones patronales. De hecho,

esta táctica negaba la representación de los sectores capitalistas tanto a la DC como el Partido Nacional.

Por otra parte ¿por qué se agudiza el enfrentamiento entre dos fuerzas que, de algún modo, estaban unidas por las similitudes del programa y por las negociaciones del período precedente? Nos parece que este hecho, y por lo tanto la dinámica de la coyuntura, está determinado por la lucha electoral que se avecinaba. Se produce una contradicción entre el diseño electoral de la UP y el de la DC, en los cuales se manifiestan -sin duda- concepciones de fondo que trascienden el evento inmediato.

El Gobierno de la UP enfrentó muchas veces la disyuntiva entre buscar una ampliación de su base de apoyo por la vía de los compromisos políticos o buscarla en el marco de una política popular, que renucleara en torno a la UP a los sectores de trabajadores atraídos por la DC. Sin embargo, esa disyuntiva no puede plantearse así durante esta coyuntura. Ella no aparece entonces como una opción que tendría consecuencias decisivas para el futuro sino como un dato determinado. La dinámica electoral anula la posibilidad de plantearse el problema.

La UP enfrenta el desafío de ampliar su precaria base inicial de sustentación. Para ello cree no tener otra opción que una agresiva política que la muestre dispuesta a cumplir con el programa ofrecido. Tratar de conseguir un compromiso con la DC la obligaría a redefinir su programa, frustrando las expectativas de cambio de su propia base popular y perdiendo la oportunidad de atraer a otros sectores.

A su vez, la DC, en la cual coexisten aún diferentes y contradictorios análisis sobre el fenómeno de la UP, se lanza a conquistar el liderazgo opositor, tanto porque ve allí el ámbito de su crecimiento potencial como porque es condición de cualquier política. Necesita su poder electoral tanto si desea

mantener en el futuro esa línea de oposición como si desea articular un bloque con la Izquierda. En el mes de octubre de 1970, uno de sus principales representantes, Jaime Castillo, había dicho que el dilema político del país era el de saber si la mayoría del 36% puede gobernar dentro de la estricta plataforma con la cual se presentó a las elecciones, o si es posible orientarse a la construcción de un Gobierno, que representa a todos aquellos que apoyaron los programas de Allende y Tomic. Lo que unificaba el análisis de Castillo con los análisis opuestos internamente, era la común necesidad de superar el test electoral. Uno y otro requerían la misma condición, que la DC mantuviera intacto o desarrollara aún más su poderío de masas.

De ese modo los intereses políticos de la DC y de la UP se presentan, desde esta coyuntura inicial, como contradictorios. Para la UP la posibilidad de crecer requiere una estrategia que le permita ampliar su autonomía, aprovechando al máximo las atribuciones del Ejecutivo, para depender lo menos posible de la negociación parlamentaria.

El objetivo de la DC, en cambio, es neutralizar y amarrar lo más posible al Gobierno con el objeto de impedirle ampliar su influencia de masas. Este trata de evadir esas presiones con una estrategia legal extra parlamentaria en la que se recurre a disposiciones atípicas, no compatibles en general con la matriz burguesa del derecho civil, pero que efectivamente existían como disposiciones formalmente legales; este tipo de acción, aunque justificable desde el punto de vista de la legalidad y provocado por la misma rigidez del sistema de decisiones, es rechazado por las instancias judiciales o de interpretación de la ley. Es evidente que las querellas interpretativas a este respecto se dan durante el periodo en el marco de una lucha política desencadenada, donde los criterios jurídicos no son el elemento principal de la definición.

Sea como sea, este tipo de estrategia legal extraparlamentaria que la UP aplica desde el principio de su Gobierno también está

determinada en esta coyuntura por la dinámica electoral. De hecho, la agitación agraria no fue un tipo de movilización planificada por la UP. Pero el desencadenamiento de ella la pone frente a un problema con graves repercusiones electorales. Necesita reinscribir esta movilización dentro del marco legal, pero sin convertirse en adversario de los campesinos movilizados. Para ello no le queda otro camino que intensificar la Reforma Agraria.

Desde el principio la UP se ve amenazada por una neutralización de su acción gubernativa, para insertarla globalmente en el marco de una legalidad que impone la negociación y el ritmo gradual, y que impide así, también por razones de índole económica, el cumplimiento cabal del programa. Sin embargo, las condiciones de la coyuntura le obligan a rechazar cualquier posibilidad de compromiso, porque de ese modo pierde recursos para ampliar su base social, aprovechando expectativas de cambio. Por otro lado, también la DC necesita obtener un perfil propio frente al Gobierno en vista a las elecciones de abril.

La temprana aparición de la estrategia legal del Gobierno, que altera el principio del contrabalance de poderes en favor del Ejecutivo, constituye desde el principio la temática de la ilegalidad en el discurso de la Oposición, la que se convertirá más adelante en un elemento reiterativo. Pero todavía en este momento, esta imputación es cautelosa o parcial. En el lenguaje de El Mercurio, se trata apenas de la insinuación de una tendencia que era necesario precaver. En el lenguaje de la DC, donde esta temática está más constituida, la ilegalidad es una tendencia ligada a los grupos más extremos, que se neutralizaría o eliminaría mediante la restauración de la autoridad presidencial por encima de los partidos.

De hecho el tratamiento del problema de legalidad permite la expansión de tendencias a la desinstitucionalización ya presentes en el periodo de Gobierno anterior. En realidad,

siempre había habido una cierta flexibilidad respecto al cumplimiento de normas políticas. Por ejemplo, en un tiempo la práctica del cohecho o de la presión electoral sobre los campesinos era amparada por las autoridades locales; así como las autoridades debían consentir la acción sindical y las huelgas de los empleados fiscales. Sin embargo, en la última etapa del Gobierno de Frei empieza a adquirir importancia el fenómeno de las tomas de fundos o de sitios urbanos. Las acciones rurales son consentidas por las autoridades estatales y fomentadas por activistas de la DC. A su vez, las tomas de sitios urbanos pasan a ser consideradas como un recurso permitido que tiene su propia legalidad, por ejemplo, el lanzamiento de banderas como expresión de una toma consumada.

Desde el principio del Gobierno de Allende aparecieron renovadas tendencias a la desinstitucionalización de la lucha política. Ellas toman las siguientes formas principales: acción directa de las masas por resolver sus problemas, aparición de los temas del terrorismo y de la violencia de extrema derecha, disputa en torno a la legalidad de las medidas del Gobierno. En la fase entre noviembre 1970 y abril 1971, el tema de la violencia se plantea también a propósito de la agitación agraria y de la presunta constitución de grupos izquierdistas armados en sectores cordilleranos limítrofes. Pero desde el punto de vista de la desinstitucionalización, la tendencia de mayores consecuencias futuras, por la oposición que generaría, es la estrategia legal aplicada por la UP para sus reformas económicas, vista como único camino para impulsarlas aceleradamente.

Ya en esta coyuntura ese problema hace su primera aparición, revelando los fermentos de agitación, movilización y conflicto que contiene. Los grupos y fuerzas sociales entonces marginados del control del Ejecutivo veían en el sistema de poderes contrabalanceados un buen planificado sistema de trincheras donde los atacantes caían varias veces hasta que se convencían de la necesidad de los compromisos, las negocia-

ciones y la paciencia: Por eso la decisión de estatizar la banca mediante la compra de acciones o el recurso de usar un viejo y olvidado decreto ley para requisar y expropiar es visto como una grave amenaza y sobre todo como una estratagema inesperada, como la ofensiva por las Ardenes entre los huecos de la línea Maginot.

El estudio de esta primera coyuntura de Gobierno UP demuestra que la lucha política del período no puede graficarse sólo como una espiral. El movimiento no es exclusivamente de una lenta y progresiva agudización y exacerbación sino también un complejo proceso donde se suceden coyunturas calientes y frías, momentos de lucha aguda y fases de interludio.

En esta coyuntura lo que más sorprende es la intensidad del debate verbal, la violencia de las imputaciones y ataques que se cruzan entre el Gobierno y la DC. Pero el crescendo se rompe después de las elecciones de abril.

2. DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES AL ASESINATO DE EDMUNDO PEREZ. (Abril - Junio 1971).

La coyuntura siguiente abarcó el periodo comprendido entre el 5 de abril de 1971 y el asesinato de Edmundo Pérez, el 9 de junio del mismo año.

Esta coyuntura está centrada en torno a cinco ejes principales: las repercusiones políticas de los comicios de abril, el debate interno en la DC, el discurso presidencial del 21 de mayo, las requisiciones del área textil y el asesinato de Pérez Zujovic.

Los resultados de las elecciones municipales de abril sig-

al 50.86% si se agregan los votos obtenidos por la Unión Socialista Popular (organización escindida del Partido Socialista (PS) que no estaba integrada a la UP).

Esta primera cifra representa un crecimiento de 5% en el electorado nacional respecto a las elecciones de regidores del 67, pero representa un crecimiento del 13.58% respecto a las elecciones presidenciales y de más de un 37% respecto de su propia base electoral previa. Entre los partidos de la UP la repartición de votos fué la siguiente el PS obtuvo 22.89% el Partido Comunista (PC) 17.36%; el Partido Radical (PR) el 8.18% y el Partido Social Demócrata el 1.38%.

A su vez la DC obtuvo la primera mayoría partidaria nacional con un 26.21% mientras el Partido Nacional conquistaba el 18.53% (dos organizaciones menores sumaron el 4.40%).

El análisis de las cifras hace resaltar los siguientes hechos, a) el crecimiento de la UP respecto a la base de apoyo obtenida en las elecciones presidenciales; b) la estabilidad política demostrada por la DC pero también por el PN, el cual sólo disminuyó ligeramente, pese al marco político desfavorable, su votación de 1969; c) el profundo debilitamiento político experimentado por el PR. La suma de la votación del PR y de la fracción de derecha separada (Democracia Radical) alcanzó el 12.09%, inferior al 13.03% de 1969, donde había llegado a su punto más bajo el descenso sostenido de la votación radical desde 1965; d) la capitalización por parte del PS del fenómeno de la UP y el relativo estancamiento del PC. Los primeros habían obtenido el 69 el 12.23% de los votos, mientras los comunistas habían llegado al 15.51%. Así ambas fuerzas suben su participación en el electorado en un 10.66% y un 1.45%, respectivamente.

Las temáticas predominantes en el análisis electoral son, por parte de la UP, la asignación a los resultados de un carácter plebiscitario o, por lo menos, la imputación de que ellos

otorgaban una ratificación popular del camino seguido. Por parte de la Oposición, la afirmación de que se verificaba un empate político. La DC se ve obligada a aceptar el análisis de bloques (Oposición-Gobierno), porque de otro modo afirmaríala imagen de triunfo que la UP quería crear.

Desde el punto de vista de los efectos políticos, los resultados electorales producen dos procesos de reajuste y de rearticulación. Uno de ellos tiene lugar dentro del PR, el otro, dentro de la DC.

Dentro del PR, el proceso todavía queda a medio camino en el transcurso de esta coyuntura. Es evidente que el retroceso electoral es el catalizador de una crisis de identidad. Esa situación permite que rebrote interna y externamente la temática del sometimiento a las organizaciones marxistas y de la ausencia de un rol autónomo. Sin embargo, la crisis desencadenada tiene un carácter apenas incidental, cuyos momentos claves son la renuncia simbólica a sus cargos de todos los personeros de confianza del Presidente, y más tarde el comportamiento disidente de algunos senadores en la votación sobre el desafuero de un Intendente. La crisis aparentemente se estanca, sólo para continuar desarrollándose de un modo subterráneo y opaco.

En la DC los resultados electorales de abril generan un intenso proceso de discusión estratégica. El primer síntoma de esta dinámica se manifiesta a propósito de la Junta de la JDC. En ella, los jóvenes se definen claramente por una línea de diálogo, acercamiento y colaboración, pese a que critican el sectarismo de la UP. Este análisis coincide, en grueso, con los primeros que hace la Dirección Nacional frente a las elecciones. Ahí las fuerzas de la DC se agrupan en el bloque de los partidarios de los cambios, mostrando un triunfo de las tendencias progresistas en contra de los partidarios del inmovilismo y de la defensa de privilegios económicos.

Más adelante, con ocasión del discurso presidencial auto-

crítico del 1º de Mayo y con ocasión del Mensaje de Allende al Congreso Pleno, el 21 de Mayo, se revela en las interpretaciones que la DC hace de esos acontecimientos un cambio de lenguaje y de los énfasis analíticos. Ambos discursos estaban destinados a generar condiciones para una ampliación del consenso. El primero de ellos contiene un análisis auto-crítico de la gestión del Gobierno que rescata muchas de las temáticas de la DC, mientras que el Mensaje al Congreso Pleno intenta elaborar la teoría de la llamada vía chilena poniendo énfasis en el carácter democrático y pluralista del proceso de transición al socialismo en Chile. Ese análisis intenta rescatar la particularidad del caso chileno y mostrar cómo el paso al socialismo se inscribe dentro de un doble proceso de continuidad y ruptura. Es uno de los documentos más importantes del periodo y la débil acogida a él por parte de la Izquierda revela problemas que se harán evidentes más adelante,

Ambos discursos definen en gran parte el clima político de la coyuntura. El discurso del 1º de Mayo tuvo además influencia en el desarrollo de la discusión interna de la DC. De hecho, el voto aprobado en su Consejo Ampliado una semana después, consolida cambios semánticos. Hay en él una reafirmación de las temáticas revolucionarias de la DC. Incluso se habla en él de socialismo comunitario en vez de comunitarismo. Esto es muy significativo pues ese cambio en un matiz del lenguaje encerraba una larga y ardorosa polémica interna respecto a la caracterización de la sociedad futura. El voto habla de la legitimidad del Gobierno y reconoce la existencia de profundas coincidencias.

Es evidente que ese proceso de rearticulación que se produce después de las elecciones no logra madurar en ese momento. Las resoluciones del Consejo Ampliado de la DC son expresivas de esa inmadurez, aunque ese carácter de interludio, de tanteos e incertidumbre modifica el clima de la coyuntura respecto a la anterior. La declaración no define una línea de colaboración y compromiso sino más bien inaugura lo que la prensa comunista

compromiso sino más bien inaugura lo que la prensa comunista llamó acertadamente una tercera fase en las relaciones entre la DC y el Gobierno, que no era ni la colaboración del momento de la negociación sobre el Estatuto de Garantías ni la oposición violenta y encarnizada de la coyuntura anterior.

Sin embargo, **El Mercurio** define también adecuadamente el carácter de la declaración cuando indica que ella no impedía los acuerdos ni con el Gobierno ni con la Derecha. En realidad para la DC no había acuerdo posible con la UP sino sobre la base que ésta reinscribiera toda su acción en el plano que la DC consideraba legal, renunciando incluso a las movilizaciones de masas como instrumento de presión al Parlamento o el Poder Judicial y por cierto renunciando a la estrategia legal que la UP estaba usando para implementar las reformas económicas. Para la DC se trata de llevar a la UP al juego político tradicional, haciendo que la institucionalidad recupere su papel de freno y regulador de las aspiraciones reformistas.

Sin embargo, las tendencias a la desinstitucionalización de la lucha política detectadas en la coyuntura anterior permanecen vigentes. En el campo disminuyó la frecuencia de las tomas pero también aumentó la violencia de las situaciones. De hecho la muerte en un enfrentamiento de un pequeño agricultor afiliado a la Derecha y más tarde el fallecimiento accidental de un gran propietario agrícola en el momento de la toma de posesión por la CORA producen intensas movilizaciones patronales. Asimismo aparecieron brotes de guerrillas rurales en un sector cercano a Santiago, las cuales fueron perseguidas por el Gobierno, produciéndose a propósito de estas situaciones una fuerte polémica entre el MIR y el Gobierno. A mediados de mayo entra en escena un movimiento de extrema-izquierda llamado VOP que ejecuta una serie de asaltos sin ningún motivo político aparente.

Además de estas tendencias a la acción directa, destinadas algunas de ellas a resolver por encima del Estado los problemas

confusa clasificación que proliferan en el periodo **previo al** asesinato de Edmundo Pérez, actúan las **tendencias** desinstitucionalizadoras que se originaban a causa de la **estrategia** de Gobierno. Las primeras tendencias escapan al **control** político de la UP, mientras que las segundas todavía **son** manejadas por ella, pues crean situaciones que permitían **aplicar** las disposiciones legales de excepción. Así se procede **durante** esta coyuntura a la expropiación del sector textil. El **detonante** de ese proceso es una huelga desencadenada en una de las empresas. Como ella es requisada por razones de utilidad pública, la Federación Textil hace un llamado a la ocupación de las diferentes plantas con el objeto de generalizar **la situación** a toda el área. Esa forma de **operación era interesante en un** doble sentido. En primer lugar, **ella conecta al movimiento** obrero a la política de expropiaciones, **otorgándole un rol** decisivo y, sobretudo, una sensación de poder. **Sin embargo la** preservación del carácter planificado del proceso **requería un** fuerte control organizacional de la movilización. Todavía **en** estas primeras etapas las movilizaciones son decididas de acuerdo a criterios generales y respondiendo a una política planificada desde arriba. Más adelante este mecanismo de operación empieza a presentar sus lados negativos, permitiendo que se generen dentro de las empresas divisiones **en el campo** obrero o entre obreros y empleados y desencadenando una ola de ocupaciones espontáneas, que respondían a necesidades populares pero que creaban situaciones incontrolables. Pero además del aspecto participativo, esta operatoria **era interesante** en otro sentido: revelaba una cierta flexibilidad **del sistema** legal. Sin embargo este segundo aspecto **solo fue real** mientras el frente opositor permanecía **desarticulado o confuso** respecto a la línea a seguir, lo que todavía ocurre **en esta** coyuntura.

Tanto la continuación de la política de **requisiciones** usando los procedimientos legales extraparlamentarios, **como la** continuación de la agitación en el campo o la **aparición de** brotes terroristas son sin embargo, tematizados de un **modo diferente**. De hecho, la DC abandona la temática de la **ilegalidad**. Empie-

za a decir que se estaba dentro de la legalidad pero bordeándola y que el Presidente debía evitar los excesos. Así, estaba en **marcha, empujada** por algunos sectores de la DC, una estrategia que **abría caminos a** eventuales compromisos, para lo cual ésta necesitaba **distinguir, con el** objeto de separar los sectores más moderados **de los más** extremistas.

De hecho, **la ofensiva ideológica** se centra en el tema de la **libertad de información, lo que demuestra** el carácter de la coyuntura, **a propósito de un discurso de** Allende a la Asamblea de Periodistas que podía ser **interpretado como** desvalorización de la libertad de información, o de las **conclusiones de** la misma Asamblea o de los enfrentamientos verbales **en dos** espacios políticos televisivos de gran audiencia y los presuntos intentos para modificarlos o suspenderlos. Esta temática es eminentemente preventiva, de creación de imágenes y condiciones ideológicas a largo plazo. En este terreno, era visible para todo el mundo que no existían restricciones actuales ni siquiera amenazas fuertes. La constitución en una problemática significativa de los pequeños incidentes que ocurren en la coyuntura es **bastante revelador** del sentido de tanteo que ésta tiene.

Para la Derecha las **elecciones** hicieron evidente la necesidad de romper el esquema **tripartito, empujando** hacia la polarización. En esta coyuntura **de** recestudio y redefinición de las situaciones los intentos **derechistas** tampoco tiene éxito. El Partido Nacional lanza **la consigna** de un Frente de Ideas, lo que es expresivo del bajo **nivel de** articulación entre las fuerzas políticas de la Oposición.

Durante toda esta **coyuntura las** relaciones entre la DC y el Gobierno **oscilan entre el** enfrentamiento y la aproximación sin que se defina **con claridad** una pauta estable. Hacia el final de la fase se **quiebra el** esquema tripartito con ocasión de las elecciones **de Rector** de la Universidad de Chile. En ellas triunfó la Oposición unificada en la elección de autoridades unipersonales y la Izquierda en los órganos colegiados. Pero

como contrapunto, algunos dirigentes políticos de la DC reconocen que se realizan conversaciones con la UP para empujar en común los proyectos coincidentes y la JDC propone, con el mismo objeto, la creación de una Comisión Interparlamentaria.

Estas fluctuaciones de la DC son el resultado de su carácter organizacional, de la presencia de capas populares junto con sectores burgueses y de la combinación de discursos revolucionarios con discursos modernizantes. El aspecto popular, que es indisociable de la DC como organización, opera como mecanismo sensibilizador respecto de lo que la UP representa como fenómeno político. En estas primeras coyunturas, la UP actúa en el marco de una Oposición desintegrada. Tiene, por lo tanto, un mayor espacio para la implementación de sus medidas redistributivas, de igualitarismo social o contenido anticapitalista, como la nacionalización de los bancos y de algunos monopolios, que además eran expresivos de esa imagen de rapacidad y de explotación que constituía un elemento del sentido común popular

El carácter de la UP, que en estas primeras coyunturas no está todavía contaminado por las imágenes que se fueron generando por la agudización de la lucha política y por el desarrollo de una crisis de funcionamiento de la sociedad (desabastecimiento, huelgas), representa un fuerte atractivo para aquellos sectores de la DC más sensibles a lo popular, que ven en esta nueva experiencia la realización sin conciliaciones de sus propias esperanzas revolucionarias.

Por otra parte, la DC en su conjunto se ve enfrentada a la modificación de sus hábitos aislacionistas tradicionales. Esta necesidad política, que se va haciendo más patente en la medida que se agudizan los conflictos, es en esta coyuntura una conclusión lógica del análisis post-electoral. La esperanza por parte de la DC de encarnar una Oposición democrática, autónoma frente a la Derecha, se ve después de abril obstaculizada por la vigencia política de ésta última, que una vez más de-

muestra una gran capacidad de recuperación política. Las esperanzas de la DC respecto a un desastre electoral de las fuerzas más conservadoras, que le permitiera nuclear sus bases sociales en una estrategia moderada, se enfrentan—ya en esta coyuntura de interludio- a un impasse.

La Derecha no sólo sobrevive al test electoral sino también trata de tomar la vanguardia de la lucha contra la UP. En esta misma coyuntura, mientras la DC tantea las posibilidades de compromisos, ella constituye en temáticas políticas significativas algunos problemas, impulsando, por ejemplo, la acusación constitucional contra un Intendente, a propósito de la toma de posesión de un fundo por parte de la CORA arrastrando en ello a la DC tras sus posiciones.

Esa táctica de radicalización está favorecida por la actitud que empiezan a asumir algunas organizaciones patronales, sobre todo las agrarias. Estas organizaciones abandonan a fines de la coyuntura pasada la línea de búsqueda de un compromiso defensivo para empezar a aglutinar cierto tipo de movimientos sociales. Estos cobran alguna fuerza a propósito de la muerte accidental de un latifundista, en ocasión de la toma de posesión mencionada. A este incidente se le confiere un carácter simbólico, permitiendo la realización de una serie de actos expresivos (exequias solemnes, paro patronal, declaraciones), que demuestran un fermento de movilización entre los patrones agrícolas.

En este contexto se produce el asesinato de Edmundo Pérez Z., ex ministro del Gobierno de Frei, -a quien la oposición de entonces responsabilizó de acciones represivas contra pobladores durante el Gobierno anterior -, en manos de un grupúsculo de extrema izquierda, la VOP, que había comenzado a actuar después del acceso de Allende al Gobierno. Ese tipo de grupo era muy permeable a la infiltración, puesto que -a diferencia de otras organizaciones de extrema izquierda- carecía de consistencia ideológico-política. El asesinato del dirigente

consistencia ideológico-política. El asesinato del dirigente demócrata-cristiano, vinculado a Frei por viejas y estrechas solidaridades, no estaba asociado a ningún plan político contra la DC. Fue un acto de terrorismo puro, realizado por un grupo que reclutaba elementos del lumpen político (11).

No es posible saber si ese acto inesperado e incontrolable cambió la dirección de la historia en el periodo. Para afirmar ese carácter crucial se necesitaría evaluar las reales posibilidades de acuerdo entre la DC y la UP y detectar las modificaciones de la situación y del clima político que son imputables a este asesinato. Nos parece que esas posibilidades siempre fueron casi nulas para la constitución de un bloque de Gobierno con el Centro, por los efectos que una decisión de ese tipo hubiese tenido, tanto para la unidad de la DC como para la unidad de la Izquierda. Sin embargo, en esta coyuntura de interludio había grandes posibilidades de constituir acuerdos parlamentarios para aprobar proyectos decisivos de reforma económica.

Más tarde esos acuerdos fueron intentados varias veces sin éxito.

El asesinato de Edmundo Pérez reflota la temática de la incapacidad del Gobierno para encauzar el orden público y permite pintar la situación caótica de una sociedad hundida en el desquiciamiento moral.

Por primera vez la UP y el Gobierno quedan a la defensiva desde el punto de vista político, intentando demostrar alguna conexión entre los autores materiales del crimen y los esfuerzos de desestabilizar al Gobierno.

(11) El Gobierno sostuvo después del asesinato de Pérez, que existían evidencias de intervención extranjera en él. Esas denuncias fueron públicamente desestimadas por la Oposición, en particular por la DC. Sin embargo, las investigaciones del Senado norteamericano respecto a la intervención de la CIA, en Chile las convierten en verosímiles.

3. DEL ASESINATO DE PEREZ ZUJOVIC A SEPTIEMBRE DE 1971

(Junio 1971 a Septiembre 1971)

El asesinato de Edmundo Pérez significa el término de esa coyuntura de interludio, de tanteos y de medición de fuerzas, para dar comienzo a una nueva coyuntura que continúa esas modalidades bajo otra forma.

Esta coyuntura abarca desde el asesinato del ex-ministro, con su prolongación, en el periodo inmediato, en la captura de los hechos y en las primeras reacciones políticas, hasta los primeros días de septiembre de 1971. Esta fase también tiene un sentido de interludio, pero de una forma diferente del primero.

Tres son los ejes principales de esta coyuntura: la elección complementaria de un diputado en la provincia de Valparaíso, la división de la DC y del MAPU que dieron lugar a la constitución de la Izquierda Cristiana y la división del Partido Radical. En la fase anterior habían aparecido algunos signos de polarización, confundidos entre los numerosos elementos de incertidumbre que caracterizaban la coyuntura. No expresaban una tendencia, sino uno de los desarrollos posibles, cuyo predominio no parecía asentado. El principal de esos signos era la candidatura unificada para las elecciones en la Universidad de Chile.

Esta nueva coyuntura de interludio está marcada por el asesinato de Pérez Zujovic y por la multiplicación de los signos de polarización. La fase anterior había sido fría desde el punto de vista de la intensidad de los conflictos políticos. Esta nueva coyuntura es caliente y tensa.

Las acusaciones y contra-acusaciones a propósito del asesinato, producen un quiebre radical entre la DC y el Gobierno. Mientras éste acusa al fascismo y a la sedición, la DC encabeza

una ofensiva ideológica y política contra las **bandas armadas**, toleradas por el Gobierno. El diario demócrata cristiano llega a afirmar que desde el ascenso de Allende un **ambiente de criminalidad** se ha desarrollado en el país.

Este clima favorece los contactos entre la DC y el **PN** a propósito de la elección complementaria por Valparaíso. **Muy** rápidamente ambas organizaciones se ponen de acuerdo en un candidato único, un ex-radical de derecha afiliado a la DC.

Esta organización aprovecha el desconcierto del Gobierno y la necesidad de la Derecha de conseguir su apoyo para transformarse en la fuerza predominante. La Izquierda a su vez define el bloque de oposición como un **hecho consumado**, sin darse cuenta que la complejidad del **cuadro político** llevará a la DC pronto a nuevas políticas pendulares. Efectivamente, en pleno periodo pre electoral se producen violentos roces entre dirigentes de la DC y personalidades de la Derecha.

La estrecha derrota electoral de la Izquierda en Valparaíso tiene lugar en un momento en que empiezan a perfilarse algunas discrepancias en el seno del PS. Ellas estallan a propósito de un documento de la Comisión Nacional Agraria en que se cuestiona la posibilidad de un tránsito institucional al socialismo. La Comisión política rechaza esos planteamientos y como respuesta replantea la tesis de un enfrentamiento **decisivo** en el marco institucional (plebiscito), que permitiera **abrir espacio** a las indispensables reformas políticas.

La derrota de Valparaíso constituye el **primer momento** de esta coyuntura, la cual se redéfinen **a partir de ese momento**. Inmediatamente después del triunfo, la DC insiste en dos ideas: la ausencia de un pacto con la Derecha, la cual **habría** apoyado a su candidato, porque carecía de alternativa, y la **necesidad** de producir dentro de la UP una decantación entre **los sectores** de democráticos y los violentistas. Incluso se afirma **que** no se le

pide al Presidente una alteración de su programa, sino la ruptura con el aventurismo extremista.

Esos **énfasis están** determinados por el desarrollo de un grave **conflicto interno** en el interior de la DC. Ese conflicto estalla **durante una larga reunión** del Consejo Nacional de la organización, **en la cual la línea** de Izquierdo Cristiana plantea el rechazo **a cualquier entendimiento** con la Derecha. La mayoría estuvo **por ratificar los planteamientos** del anterior Consejo Nacional Ampliado **en donde se insistía** en la votación revolucionada y popular de la DC, **y se abría** un espacio de colaboración puntual tanto con la Izquierda como con la Derecha, a través del cual se pretendía constituir una alternativa propia y autónoma de oposición constructiva.

Los sectores disidentes se retiran del Partido. Su renuncia coincide con la separación del MAPU de sectores que reivindicaban un espacio político para opciones doctrinarias específicamente cristianas y que habían sido desplazados de la dirección real de este partido. Ambos procesos de separación tenían raíces profundas que superaban el marco coyuntural.

El grupo disidente de la DC correspondía en gran medida a lo que durante el Gobierno de Frei se llamó la tendencia tercerista. Una de las especificidades de ese grupo era su exigencia de concretar efectivamente la política práctica del Partido con la línea programática de largo plazo: vocación revolucionaria de contenido anticapitalista, afirmación del socialismo comunitario como alternativa de sociedad. El otro rasgo específico era la afirmación de la raíz y de la tradición cristiana de su búsqueda ideológica. En el pasado ése había sido un gran hito demarcatorio en la DC entre el grupo tercerista y los rebeldes, que fundaron el MAPU. Estos últimos buscaban una incorporación plena al movimiento popular, lo que los lleva a asimilarse a la tradición marxista que en él imperaba. Ellos no buscaban ser una alternativa de Izquierda respecto a la

DC, sino una alternativa respecto a los partidos populares. Siguiendo esa línea buscaron inicialmente su identidad en una crítica a la Izquierda como "establishment" político para intentar transformarse más tarde en un partido obrero de línea marxista que representaba a "nuevas capas". Situado el MAPU por su elite dirigente en esta perspectiva de construcción partidaria era evidente que no había en su interior espacio ideológico y político para los dirigentes parlamentarios y sus seguidores que habían salido de la DC en 1969 y fundado, junto a sectores juveniles, el MAPU. Tampoco había en esta organización espacio para absorber el nuevo contingente escindido ahora de la DC y que funda la Izquierda Cristiana. Así pues, esta confluencia entre la crisis interna de la DC que se desencadena después del triunfo electoral de Valparaíso y la contradicción en el MAPU entre los sectores señalados permite la constitución de una nueva organización política, la Izquierda Cristiana.

Casi simultáneamente se inicia la XXV Convención del Partido Radical. Allí también estalla un conflicto entre los sectores que buscan -más de acuerdo a la tradición- definir al partido como una organización social demócrata y los sectores cuyo interés central es una incorporación plena del PR a la UP, los cuales están dispuestos a pagar el precio ideológico de una marxistización. En realidad, detrás de ese conflicto ideológico, hay un conflicto político que -dada la naturaleza de la organización- constituye su contradicción central. Escondidas bajo la forma de un enfrentamiento doctrinario, luchan dos concepciones diferentes de la UP y del papel del PR dentro de ella. La tendencia que en el momento de la escisión se organiza como PIR define el papel del partido como un factor moderador, como bisagra entre el Gobierno y la Oposición; el grupo que permanece en el PR cree que esa táctica los marginaliza dentro de la UP y debilita así su influencia política.

El incidente que hace estallar el conflicto fue el carácter marxista que se le atribuyó al voto político aprobado por la

Convención. El propio Allende lamentó este giro del Partido Radical e hizo valer toda su influencia política para obtener la reunificación, aceptando las reivindicaciones de los disidentes respecto al carácter del radicalismo.

Este segundo momento de la coyuntura modifica el clima político del principio, caldeado por el asesinato político y por la campaña electoral de Valparaíso. El conjunto de reordenamientos que estaban en curso producen un estancamiento de la agitación política y de la violencia verbal entre la UP y la DC.

La ruptura interna de esta última, le permite visualizar los efectos organizacionales de una alianza estable con la Derecha, lo que la lleva a una reafirmación de los contenidos revolucionarios y populares de su posición.

De hecho, el proceso de reordenamiento amplía la base política de la UP y debilita a la DC, no tanto por los efectos cuantitativos de la escisión como porque ella demostró su vulnerabilidad organizacional.

En la UP este proceso tiene un doble aspecto. La creación de la Izquierda Cristiana permite fundar un cauce orgánico para sectores cristianos que ven en el socialismo y en el programa de la UP una alternativa política de largo plazo. Ese papel no había sido asumido por el MAPU, puesto que esta organización se había alineado en posiciones marxistas. La aparición de la Izquierda Cristiana no sólo es importante en relación a la organización de la cual proviene, sino sobre todo en función de la diversificación de la UP que produjo. El otro aspecto dice relación con la escisión radical. La reacción del PIR significa la fundación de una fuerza socialdemócrata que reivindica para sí un rol crítico dentro de la UP y cuya lealtad al bloque gobernante dependía de que éste modificara algunas de sus formas de acción, en especial, su estrategia de reformas económicas.

Por lo tanto, la ampliación de la base política de la UP es una expansión condicionada. Su debilidad se apreciará en la próxima coyuntura cuando el PIR se realice junto a la DC.

Este proceso de reajuste político define el sentido de la coyuntura otorgándole el carácter de segundo interludio. El primero fue el resultado del éxito electoral de la UP, el cual junto con las tendencias populares en el interior de la DC empujaron a esta colectividad a un viraje político hacia la Izquierda. Es la época de la ofensiva interna de la juventud DC (JDC) y de la definición de una línea de oposición constructiva y democrática. Sin embargo, el asesinato de E. Pérez revirtió esa tendencia que empezaba a insinuarse, creándose un bloque electoral de oposición unificado. Pero inmediatamente después del triunfo de Valparaíso, la escisión de la DC cambia el sentido de la coyuntura. Esta adquiere el tiempo característico de los momentos de medición de fuerzas y de reevaluación de las circunstancias políticas.

Además de estos ejes de sentido que ordenan lógicamente los diferentes acontecimientos, esta coyuntura presenta algunos otros procesos significativos.

En primer término, se intensifica la lucha por la constitución del área de la propiedad social. Esta lucha toma entonces dos formas: una institucional y la otra social. La primera se desencadena a causa del rechazo por la Contraloría del decreto de expropiación de una de las grandes empresas textiles (Yarur). Enfrentado a ese problema, de graves repercusiones porque las organizaciones de trabajadores anunciaron su rechazo a la devolución de la empresa, el Gobierno sale del paso por la vía institucional puesto que la Contraloría acepta los nuevos antecedentes enviados.

Sin embargo, en el mes de agosto este tipo de conflictos vuelve a brotar a propósito de la requisición de las empresas pesqueras. Allí por primera vez, el Gobierno enfrenta una

fuerza interna movilizada en contra de las expropiaciones: los empleados de las empresas.

Esta movilización de los empleados es, desde el punto de vista del análisis, un episodio muy significativo. Inaugura, aunque todavía en forma precaria y sin dimensión nacional, una estrategia, la de oponer a la movilización de los obreros la movilización de los empleados de los estratos intermedios de las industrias o servicios. Hay que recordar que en Chile la CUT afiliaba tanto a unos como a otros, por lo tanto la movilización opositora de los empleados podía escindir la unidad del movimiento sindical. De hecho, este episodio de las empresas pesqueras le plantea a la Izquierda la necesidad de construir la unidad de acción entre obreros y empleados para crear las condiciones de la expropiación.

Otra problemática que comienza a desarrollarse en esta coyuntura es el tema del desabastecimiento. Alrededor del 20 de julio aparecen por primera vez en los diarios alusiones a este problema, que será central en el desarrollo de la crisis política. La UP responde desde el principio tratando de aplicar una línea de masas. El Ministro de Economía, Vuskovic, se reúne con sectores femeninos para explicar los problemas de la política económica y llama a la participación popular en la lucha contra la carestía y la escasez de algunos productos. El tema desaparece de la prensa para volver a reaparecer con más fuerza a fines de agosto. En ese momento se plantea en la UP la consigna de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), organismos de base a través de las cuales se intenta canalizar la participación popular en la lucha por el abastecimiento.

Como vemos, la coyuntura tiene, pese a su doble ritmo interno -unificación y triunfo de la Oposición al principio, más tarde reajuste del campo político-, un sentido global de detente y reevaluación.

4 DE SEPTIEMBRE 1971 A LA APROBACION DEL PROYECTO DE SOBRE AREAS DE LA ECONOMIA (FEBRERO 1972)

La quinta coyuntura del periodo abarca desde septiembre de 1971 hasta febrero de 1972. Esta fase tiene tres diferentes momentos internos: el primero se desarrolla en el mes de septiembre, el segundo desde octubre hasta diciembre, durante el cual la intensidad de los conflictos alcanza su peak. El tercero desde diciembre hasta febrero de 1972, mes en que los conflictos -pese a mantenerse en un alto nivel- disminuyen en intensidad relativa.

El primer momento de esta coyuntura está caracterizado por la contra-ofensiva opositora dirigida por el Partido Nacional. Esta fuerza política, representativa de los sectores burgueses y latifundarios buscó desde el principio el desarrollo de una oposición frontal, pues requería de otro ritmo en la resolución de las contradicciones y conflictos. Ligada directamente a los intereses económicos afectados, no estaba sacudida, como la DC, por la atracción del significado popular de la UP. Sin embargo esa dualidad de la DC determinaba toda la línea política del PN. Hasta ahora en general se había subordinado pues sabía que la DC representaba la fuerza crucial del equilibrio político. Pero, como consecuencia de la escisión de los sectores izquierdistas y de los efectos de reflujo que ese proceso causa dentro de la DC, el PN decide desencadenar una ofensiva que obligue a plegarse a los factores centristas, sobre la base del fuerte apoyo gremial que podría desencadenar.

La UP responde poniendo en el tapete el tema de la sedición e iniciando una gran ofensiva ideológica en ese terreno que culmina con la entrega oficial de antecedentes a la Directiva de la DC. Aunque esta última los consideró públicamente como insuficientes, el hecho fue que empieza a buscar un camino diferente de aquel planteado por el PN: las conversaciones con

Allende, que culminan en el compromiso de éste último de enviar un proyecto de ley respecto a la formación del área de propiedad social y respecto a la estructuración jurídica general de la propiedad industrial y comercial.

El segundo momento de esta coyuntura empieza a desplegarse en el mes de octubre. Allí la DC, aduciendo tardanza por parte del Gobierno para el envío del proyecto sobre las áreas de la economía pactada en septiembre, presenta un proyecto propio de Reforma Constitucional. En ese proyecto se derogaban las disposiciones que habían permitido la formación del área social por la vía administrativa y se determinaba que en lo sucesivo las expropiaciones debían ser objeto de sanción legal en cada caso. El Gobierno envía rápidamente un proyecto alternativo en el cual se le otorga al Ejecutivo un margen amplio de iniciativa para expropiar las grandes empresas, al mismo tiempo que se garantiza la situación de los empresarios pequeños y medianos. De esta forma, a menos de un año del comienzo del Gobierno se plantea el gran conflicto institucional del período.

El envío de este proyecto coincide con el comienzo de una ofensiva de masas de la Oposición cuyos elementos catalizadores son los conflictos desencadenados en el mes de noviembre a propósito de la situación en la Universidad de Chile y de los intentos del Gobierno de comprar acciones de la Compañía Papelera, productora monopólica del papel para la confección de los diarios y revistas y una de las más grandes empresas del país. De hecho, el mes de noviembre es también una fase de conflictos parciales pero de gran intensidad política. Sin embargo, las movilizaciones y los enfrentamientos no desembocan durante ese mes en una crisis de violencia.

El conflicto de la Universidad de Chile comienza por la decisión del Consejo Normativo Superior de aprobar una determinada estructuración de la Universidad en Santiago. La mayoría de la Izquierda en ese organismo colegiado había aproba-

do una reestructuración donde el punto conflictivo era la ubicación de la Escuela de Derecho. Ya en el mes de octubre la decisión de aprobar la nueva organización había desencadenado la toma de locales por parte de la Oposición. En noviembre esta situación inicial se transforma en una crisis general del gobierno de la Universidad: empiezan a funcionar organismos colegiados paralelos, cada uno de los cuales negaba la legitimidad al otro; se producen enfrentamientos violentos en la Escuela de Derecho y en la Escuela de Ingeniería, donde la Izquierda intenta retomar los locales ocupados.

El conflicto de la Universidad de Chile es revelador desde dos puntos de vista. En primer lugar, revela el grado de expansión y penetración de los conflictos políticos, capaces de sacudir casi todas las instituciones y de movilizar a personas que hasta entonces habían estado al margen de ese tipo de preocupaciones. Desde 1967, las universidades chilenas vivían procesos de reforma que las habían sacudido y habían dividido en torno a ellos a los universitarios; sin embargo, tales contradicciones expresaban mediatizadamente, y a través de un complejo proceso de refracción, las de la sociedad. Ya desde inicios de 1971 los conflictos universitarios, en cambio, serán simple reflejo de lo que ocurre en la sociedad política. En segundo lugar, revela cambios importantes en las formas y estilos de acción de la Oposición. Toda ella y ya no sólo los sectores extremistas, deciden oponerse a la Izquierda en el terreno de la movilización de masas, acudiendo para ello a las acciones extra legales.

El mismo sentido general tiene el conflicto a propósito de la constitución de un poder comprador, por parte del Gobierno, de acciones de la Papelera. La Oposición centra el problema en la defensa de la libertad de prensa y expresión, cludiendo totalmente la temática de la acción antimonopólica que el Gobierno esgrimía. Lo importante es que la Oposición logra generar una importante movilización de dirigentes de gremios profesiona-

les, de personalidades políticas y económicas y de sectores de empleados y obreros de la misma empresa.

Todos estos conflictos se agudizan en el mes de diciembre, funcionándose además con otros nuevos. Ese mes comienza con una gran concentración de mujeres citada por un conjunto de organizaciones gremiales patronales para protestar por el desabastecimiento. Es interesante anotar el sentido de la temática movilizadora: ella apuntaba a un problema nacional y no a un interés de clase. Con eso se busca atraer a la mayor cantidad de personas posibles y al mismo tiempo atraer a la DC.

Esa concentración termina en una serie de enfrentamientos entre contramanifestantes y comandos masculinos encargados de la protección de la marcha. Se produjeron ataques a sedes políticas de la UP, a vehículos, a personalidades de la Izquierda. Durante la noche los manifestantes opositores al Gobierno continuaron formando barricadas, atacando a vehículos de la locomoción colectiva. La consigna era producir el máximo de agitación posible pues los incidentes se prolongaron artificialmente durante una semana. Tanto el tipo de organización como las secuencias posteriores a la concentración reflejan la intervención en ella de elementos externos.

Esta concentración fué, pese a la participación de todos los sectores, una iniciativa que desbordó, tanto en su origen como en su conducción, a la DC. Los incidentes revelan la presencia militarmente organizada de sectores de extrema derecha que aseguraron el control del orden interno, que enfrentaron a los contramanifestantes y que dirigieron las asonadas nocturnas.

La DC visualiza por primera vez el peligro de estar siendo desbordada por masas a quienes la acción de la UP radicalizaba. Por ello cita a sus militantes a una concentración en el Estadio Nacional y lanza acusación constitucional contra el Ministro del Interior Tohá. De ese modo, intenta reafirmar su propio

arraigo de masas, al mismo tiempo que demostrar su firme voluntad opositora y su intención de circunscribirla, en lo fundamental, dentro del campo institucional. Para la DC, que no buscaba entonces la caída del Gobierno, la suma y fusión de enfrentamientos tal como había sido intentada por la Derecha y Patria y Libertad durante los primeros días de diciembre, sólo conduce a un caos político que favorecería a los sectores extremistas de la UP. Para ella el conflicto central debía ser el enfrentamiento Político en el ámbito parlamentario e institucional.

De hecho, la acusación constitucional al Ministro Tohá consigue desplazar el foco del conflicto, al mismo tiempo que permite la recuperación política de la UP. Esta realiza una serie de movilizaciones parciales que culminan en un gran acto en el Estadio Nacional.

A mediados de diciembre los problemas electorales acaparan nuevamente el interés político. La DC y el PN vuelven a crear un frente político unificado, con un candidato común, para las elecciones complementarias de un Senador por O'Higgins y Colchagua y de un diputado por Linares. Sin embargo, a diferencia de la situación en las elecciones de rector en la Universidad de Chile o en las complementarias por un Senador en el extremo sur o de un diputado por Valparaíso, el pacto es ahora compensado (un candidato del PN y otro de la DC para cada elección), lo que demuestra un cierto cambio en las relaciones políticas entre la DC y el PN.

Enero es un mes en que se resuelven algunos importantes conflictos o que llegan al término de su discusión legal iniciativas que se venían arrastrando desde septiembre u octubre de 1971. Así el Congreso acepta la acusación constitucional contra el Ministro Tohá, pese a que la Izquierda moviliza en alto grado su presión de masas; la Cámara de Diputados aprueba la Reforma Constitucional respecto a las áreas de la economía, quedando solo pendiente su discusión por el Congreso

Pleno en sesenta días, mientras que, se encuentra una solución política negociada al conflicto de la Universidad de Chile.

La lucha política durante el mes de enero se desarrolla enmarcada por la nueva derrota electoral experimentada por la Izquierda en las elecciones complementarias mencionadas y por las divisiones internas que esa derrota expandió. De hecho la campaña electoral de Linares se había dado por parte de la UP en torno a una temática izquierdizante y con una fuerte participación del MIR. Las fuerzas políticas de la UP de la provincia junto con el MIR y el Consejo Comunal Campesino, organismo que agrupaba las organizaciones campesinas de base, elaboraron una declaración política como plataforma de la campaña, en la cual se desbordaba el programa de la UP. En pleno período electoral el PC y el PR reclaman, alineando en contra suya a las demás fuerzas de la UP, especialmente a la IC, y también al MIR. El resultado electoral hace recrudescer las críticas comunistas a la conducción de la campaña.

La oposición, dirigida en ese terreno por la DC, comienza después de las elecciones una intensa campaña llamando al Gobierno a la rectificación. Este responde mediante la reorganización de un nuevo Gabinete con la presencia del PIR. Al mismo tiempo, el Presidente envía un proyecto de ley donde fija las 91 empresas que serían expropiadas.

De ese modo esta coyuntura, la más intensa de todas desde el punto de vista de los conflictos, termina con un signo diferente.

Esta coyuntura es, desde todo punto de vista, una fase que marca un quiebre respecto a las anteriores. En primer lugar, la DC se ve obligada a sumarse a la ofensiva opositora, a riesgo de ser desbordada por las iniciativas políticas de la Derecha o, como en el caso de la concentración de los primeros días de diciembre, a riesgo de ser desbordada por iniciativas de movi-

mientos gremiales o de organizaciones de agitación que empezaban a aparecer en el escenario (frente de mujeres).

Esas movilizaciones ya revelan una cierta radicalización de masas. Dos son los factores que permiten una expansión del descontento contra el Gobierno entre sectores de capas medias, principalmente profesionales, sectores de pequeña burguesía y de burguesía pequeña y mediana. Uno de ellos es la aparición de brotes relativamente importantes de desabastecimientos, el otro es la decisión de la Unidad Popular en continuar adelante su estrategia de cambio económico.

Sin embargo, la forma asumida por la manifestación de los primeros días de diciembre lleva a la DC a un nuevo movimiento de retroceso, dándose cuenta que la multiplicación de los enfrentamientos directos caotiza la situación política, creando las condiciones favorables para las soluciones extremistas de uno y otro lado.

Pero, como consecuencia del clima político de la coyuntura, ese movimiento de retroceso se realiza mediante una amplificación de la intensidad del conflicto institucional. Ese es el significado de la acusación constitucional al Ministro Tohá. Ella tiene sentido dentro de una cierta lógica: la disputa por la dirección política de la Oposición es percibida por la DC como la lucha por atraer masas en proceso de radicalización, a cuyas condiciones ideológicas ella en gran medida debe subordinarse. Esta hipótesis se basa en un lecho: que la dirección de la DC estaba en manos de su centro político y no en manos de la derecha interna. Para esa dirección centrista el objetivo no es la liquidación del Gobierno sino la institucionalización de su acción política (12).

(12) Hasta el 28 de mayo de 1973 el PDC es presidido por *personeros* del centro, los cuales incluso habían estado conectados con el grupo que constituyó la IC. En diciembre de 1970 Narciso Irureta reemplazó como presidente a Benjamín Prado, que había estado a cargo de las negociaciones con la UP

En esta coyuntura la DC obtiene formalmente ese objetivo a través de la aprobación de la Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía. Ese proceso queda finiquitado en primera instancia en el mes de febrero de 1972, a través de la aprobación por el Congreso Pleno del proyecto presentado por la Oposición.

Sin embargo, junto con la aprobación de este proyecto considerado crucial, la DC puede percibir las debilidades y las fallas de su táctica, puesto que el problema de los vetos del Ejecutivo al Proyecto plantearían un problema cuya salida legal era difícil, compleja y controvertida y puesto que la UP sigue su propia lógica política.

El sentido de la acción de la UP es, por una parte, racional: continuar adelante con las expropiaciones por la vía administrativa para afrontar desde posiciones de mayor fuerza una negociación posible y quizás necesaria. Pero el efecto de esas acciones es que ellas fomentan la radicalización y la polarización de masas y dan margen a la desconfianza en las reglas del juego de una eventual negociación.

A fines de esta coyuntura la DC se encuentra frente a un círculo vicioso cuyos elementos son los siguientes: a) la reforma constitucional aprobada en el Parlamento, en vez de producir una institucionalización de la lucha política y de la acción de la UP, puede provocar un enfrentamiento; b) una negociación aparece como necesaria pero -al mismo tiempo- existen fuertes dificultades ideológicas y políticas para llevarla a cabo con éxito.

A su vez la Derecha aprende sus propias lecciones de esta coyuntura. En la fase anterior, que llamamos de segundo interludio, captó la

por la aprobación del Estatuto de Garantías. En noviembre de 1971 Irureta fue reemplazado por una directiva presidida por Renán Fuentealba, la cual era aún más representativa que la anterior de los grupos progresistas. El desplazamiento de la dirección a los sectores más de derecha partidaria sólo se consumó al final del periodo. Sin embargo esos grupos tenían desde antes una gran influencia en los órganos colegiados de dirección política.

vulnerabilidad organizacional de la DC, la cual era el resultado del carácter constitutivo y no accidental de su populismo. Este le permitía ser el tipo de centrismo que era. En esta coyuntura de ofensiva opositora se hace visible otro aspecto vulnerable: la posibilidad de una fisura entre los representantes políticos y parte de la masa representada por la DC. Ese es el sentido de agitación permanente, de la búsqueda de incidentes movilizadores: producir entre la masa hasta entonces liderada por la DC un cierto estado ideológico y emocional, una sensación de amenaza, de angustia y de tensión.

Por otra parte esta coyuntura revela la existencia de líneas divergentes en la Unidad Popular. Es indudable que esa situación no era coyuntural, puesto que existían diversidades históricas que se remontaban a los orígenes y que habían adquirido una modalidad especial después de la Revolución Cubana y de la divulgación de la línea foquista, experiencias exaltantes donde parecía estar la respuesta a la historia frustrante de las alianzas fracasadas con el reformismo y de las repetidas y sucesivas derrotas electorales. Sin embargo, el éxito - para muchos inesperado- de la candidatura de Allende había moderado las disidencias dentro de la UP frente al carácter gradual e institucional del proceso. Pero ello sólo mientras el Gobierno mantiene la iniciativa política, lo que significa que estas disidencias empiezan a aparecer con más fuerza en esta coyuntura.

Es evidente que la línea izquierdista dentro de la UP no puede considerarse sociológicamente como un error. Ella es la manifestación de un clima ideológico que se había expandido en la Izquierda desde la década de los sesenta: la puesta en cuestión del modelo estratégico soviético respecto a la revolución en los países subdesarrollados; la fe en el socialismo y la creencia—fuertemente desarrollada por los intelectuales- del fracaso del capitalismo.

También manifestaba esa convicción acrítica de que la fuerza hace la política, lo cual constituía una especie de extracto de sentido común respecto a lo que era el leninismo. Asimismo manifestaba una profunda esperanza en el cambio total y el deseo semi-espontáneo de las masas por ejercer efectivamente su poder, lo que la construcción

del APS limitaba sólo a ciertos sectores de la clase obrera.

Por ello no es raro que estas tendencias afloren en este momento de reflujo de la iniciativa política, cuando la UP, por primera vez desde que asumió el Gobierno, enfrenta la sensación de un impasse político.

En la última fase de esta coyuntura, la UP realiza la llamada Reunión del Arrayán que constituye el primer debate autocrítico del período. El énfasis estuvo puesto en la crítica a las tendencias burocráticas que -se decía- habían impedido plantear de un modo adecuado la lucha ideológica con la Oposición, de modo que el fondo del debate político era opaco para las masas, y que también habían impedido la participación y la movilización en torno a los objetivos políticos de la UP. La Oposición ve en esa reunión la constitución de dos bloques internos, uno dirigido por el PC y el otro por el PS. Sin embargo, esos problemas de oposición interna no habían aflorado con toda su fuerza. Ellos se desarrollan a partir de la siguiente coyuntura.

5. DE LA APROBACION DEL PROYECTO DC DE LAS AREAS DE LA ECONOMIA AL FRACASO DE LAS CONVERSACIONES GOBIERNO-DC.

(Febrero - Junio 1972).

La coyuntura anterior representa un auge de la ofensiva opositora. Esta tuvo su punto culminante, desde el punto de vista de movilización y enfrentamiento de masas, en la marcha femenina del 1º de diciembre y en los incidentes posteriores. A partir de entonces la coyuntura se centró en la discusión legislativa del proyecto de reforma constitucional que afectaba las atribuciones del Ejecutivo para ejecutar las reformas económicas por vía administrativa.

Esta nueva coyuntura, que abarca desde la aprobación por el Congreso Pleno del proyecto enviado por la DC hasta el fracaso de las

conversaciones entre ésta y el Gobierno, tiene tres ejes principales. El primero de esos ejes es el intento de llegar a acuerdos respecto a las reformas económicas que el Gobierno estaba decidido a impulsar, el otro eje es la ofensiva de la UP por terminar la Reforma Agraria y por avanzar en la constitución del APS; el tercero es la aparición pública de una estrategia de derrocamiento, tanto por parte de la Derecha como de Patria y Libertad. A fines de esta coyuntura tienen lugar dos hechos de significativa importancia: la segunda reunión autocrítica de la Unidad Popular, en Lo Curro, donde se redefinen los lineamientos de la política económica, con importantes repercusiones internas en la UP, y las elecciones de directiva de la CUT, en que por primera vez en su historia se hace con participación directa de todos los trabajadores afiliados.

Las conversaciones entre la DC y el Gobierno son el resultado de un doble impasse político. Por una parte, Allende y la mayoría de la UP se dan cuenta que la aprobación del proyecto opositor bloqueaba definitivamente la acción gubernativa; a su vez la DC percibe que la ausencia de una clara mecánica legal o de un consenso de interpretación para resolver los problemas jurídicos implicados y la resistencia por parte de la UP a someterlos a un plebiscito, convierte su intento de conseguir rectificaciones por parte del Gobierno en una ilusión. Incluso la situación que se provocaba permitiría a algunos sectores encontrar justificaciones para preparar el enfrentamiento.

Por ello la DC intenta encontrar una fórmula de consenso que hiciera fructífera su táctica permanente de cercar al Gobierno dentro del marco legal. Ella percibe entonces que al no producirse ese acuerdo se prolongaría el conflicto jurídico, favoreciendo las tendencias al derrocamiento que, para la directiva centrista de la DC, representaba el fracaso de su política.

Estas conversaciones se desarrollan con interrupciones momentáneas, entre marzo y junio. El ritmo de esas conversaciones puede describirse así: en el mes de marzo las partes en conflicto fijan posiciones mediante un Manifiesto de la Oposición y una respuesta redactada por el Comité Político de la UP. El primero plantea que la

aprobación o rechazo de los vetos debería hacerse por simple mayoría de los parlamentarios en ejercicio, que el Tribunal Constitucional no es competente y que la única salida al conflicto de poderes es el plebiscito. A su vez la Izquierda reivindica la competencia del Tribunal Constitucional y acusa a la Oposición de cercenar las prerrogativas y atribuciones gubernamentales. Las conversaciones comienzan sobre la base de esos planteamientos iniciales entre la DC y los representantes del Gobierno. Sin embargo al poco tiempo son suspendidas por iniciativa de la DC como consecuencia de la continuación de las requisiciones. Son reanudadas más adelante para caer en un nuevo impasse, ahora porque el negociador del Gobierno no tenía atribuciones para llegar a acuerdos sin consulta previa al Presidente y al Comité Político de la UP.

Como no se produce consenso sobre la mecánica ni en definitiva sobre del contenido, el Presidente clausura el período extraordinario de sesiones del Parlamento, con el objeto de impedir la votación inmediata y de ganar tiempo.

En el mes de abril las conversaciones entre la UP y la DC provocan su primer impacto político importante. Este consiste en el retiro del PIR del Gobierno a causa del rechazo por parte de la mayoría de la UP de los acuerdos negociados entre el Ministro de Justicia, afiliado a ese partido, y la DC. Los acuerdos obtenidos son considerados por la mayoría de la UP como lesivos respecto al Programa de la UP. La situación producida refleja la complejidad del cuadro interno de la Izquierda respecto a las conversaciones y al nivel de las transacciones aceptables. El abanico comprendía desde el PIR, que rechaza la estrategia de reformas económicas adoptada, hasta el PS que no veía con buenos ojos las conversaciones entabladas.

En el mes de mayo las conversaciones reemprendidas con nuevos negociadores llegan a un nuevo punto de impasse. La DC insiste que el proyecto aprobado por el Parlamento constituye la matriz a partir de la cual se debe elaborar la nueva ley. Además ella transforma en punto intransable el papel que debían jugar las empresas de trabajadores en la constitución del nuevo orden económico. Es evidente la

función ideológica de esa reivindicación, como afirmación de identidad política y punto de ruptura simultáneo con las concepciones estatizantes y liberales. Dentro de la UP no se pudo generar un consenso para aceptar las proposiciones de la DC.

Más aún durante ese mes se fortalecen las oposiciones en principio a la negociación. Su manifestación culminante es la declaración del Pleno del PS en que se propone el envío de un nuevo proyecto constitucional donde se nacionalizan todas las empresas cuyo capital y reservas al 31 de diciembre de 1971 sobrepasan a los catorce millones de escudos y se permite la expropiación de todos los predios de más de cuarenta hectáreas de riego básico. El PC rechaza explícitamente esta posición por considerarla en contradicción con el Programa de la UP, y reafirma el valor y contenido de éste.

En el mes de junio las conversaciones fracasan definitivamente. Al no llegarse a acuerdo entre los negociadores en la fecha en que comenzaba la discusión parlamentaria, el Presidente busca el entendimiento directo con la directiva de la DC. Esas conversaciones ocupan quince días durante los cuales se paraliza la discusión en el Senado. El punto central de desacuerdo es de nuevo el problema de las empresas de trabajadores. La DC pide que un conjunto de empresas, entre las cuales estaban algunos bancos importantes, no se incorporen al área estatal, sino que formen un sistema de empresas autogestionadas.

Sin embargo, no hay que pensar que estas conversaciones que constituyen el principal eje de la coyuntura se realizan en un clima de pacificación política. El hecho que ello no haya ocurrido demuestra que esas conversaciones resultan de la percepción de un enfrentamiento posible. De hecho los discursos y los temas predominantes en esta fase están colmados de ese tipo de premoniciones. En primer lugar, en esta coyuntura —con mucho más intensidad que en ninguna otra— las fuerzas opuestas se niegan unas a otras la legitimidad legal. De hecho, una gran marcha opositora en el mes de abril tiene como tema la ilegalidad del gobierno. Si se recuerda que la concentración de diciembre de 1971 fue convocada en torno al tema del desabastecimiento se puede apreciar la significación de la variación.

Por otra parte, a partir de la aprobación por el Congreso del proyecto de reforma constitucional, la Derecha —quizás habiendo perdido ya la cautela provocada por las tendencias pendulares de la DC— empieza a constituir el tema del derrocamiento, a través de la consigna de la desobediencia civil, que circula en el mes de abril o, un poco más tarde, a través de llamados al derrocamiento constitucional. El grupo extremista Patria y Libertad empieza a hablar de un Gobierno militar de corte nacionalista, como la única salida de la crisis política. Al mismo tiempo, se hacen algunos intentos de mezclar a las FF AA. en el debate político. Así, El Mercurio denuncia tentativas de infiltración comunista que se realizarían a través de activistas juveniles.

La DC toma distancia frente a lo que llama la oposición por la oposición y señala que no está dispuesta a dejarse mezclar en ninguna aventura golpista. Indica que la búsqueda del consenso negociado es la única forma de encontrar una salida pacífica a la crisis política en desarrollo.

Para el Gobierno y para la UP la apertura de conversaciones con la DC debía realizarse en el marco de una ofensiva destinada a llevar adelante el Programa. En eso no hay sólo una táctica de negociación, sino también una respuesta a los sectores internos reticentes que ven en cualquier compromiso una transacción inaceptable. Por otra parte la presión de base para intensificar la Reforma Agraria o para ampliar el área de propiedad social surgía espontáneamente, ya sin necesidad de una manipulación desde arriba. La incorporación al sector estatizado era vivida como una necesidad ineludible, como un momento de liberación por muchos trabajadores, y la participación activa en crear condiciones que la hicieran posible es vista como el ejercicio efectivo del poder obrero. Esto no ocurría siempre como resultado del activismo Izquierdista, sino que era la expresión de una conciencia espontánea, de un deseo de sentir pasar cerca la revolución dentro de la cual se creía vivir, al mismo tiempo que era la expansión de las dificultades objetivas que afectaban a los sectores obreros de las empresas pequeñas y medianas cuya expropiación no contemplaba el Programa de la UP.

En todo caso el Gobierno realiza, en estos meses de negociaciones, una **ofensiva de realizaciones**. Intensifica la Reforma Agraria y continúa adelante con la constitución del APS, tratando de incorporar al máximo de empresas incluidas en la lista de las 91 susceptibles de estatización. Al mismo tiempo estimula la creación de las JAP, pese a las protestas de la Oposición que ve en ello una táctica para controlar políticamente la alimentación o el primer paso hacia un sistema de racionamiento.

Es evidente que estas medidas dificultan las condiciones de un acuerdo con la DC, porque todas ellas producen un clima de polarización de masas. Además, esta ofensiva de la UP se desarrolla en un momento en que la crisis económica había estallado. Los sectores medios enfrentan dificultades de abastecimiento, la SOFOFA anuncia una inflación galopante y Allende reconoce elementos de crisis económica y anuncia medidas de superación de la situación. Todo ello desencadena una ola de huelgas cuyo punto de mayor intensidad fue el mes de mayo. Allí se suceden huelgas en las empresas de la gran minería nacionalizada y huelgas en una serie de organismos estatales, algunos de ellos de utilidad pública. La reivindicación central de todos esos movimientos es de carácter económico.

La UP, palpando ese clima de deterioro buscaba hacer coincidir su unidad interna, la necesidad de satisfacer prioritariamente a su base obrera y popular, sensible frente a las medidas que afectan sus condiciones de trabajo, y la necesidad de llegar a compromisos con la DC. Pero aún los sectores más partidarios de la negociación estaban cercados y acotados por los requisitos de la unidad interna que, por primera vez en el período, se ve puesta a prueba seriamente. A su vez la DC, que ve en el fracaso de las conversaciones una fuente potencial de polarización y de enfrentamientos, estaba también acotada por un movimiento de radicalización que ve surgir entre sus propias bases de apoyo.

Por ello esta negociación, tan importante para las partes implicadas, se realiza en un clima ideológico y político que la hacía difícil. Por cierto que muchos de los enfrentamientos parciales ocurridos en la fase no son planificados. Aparte de la ola de tomas en la provincia

de Ñuble, dirigidas por el MIR, se producen dos importantes incidentes sufridos casi espontáneamente o, por lo menos, sin que la intención de sus patrocinadores fuera llegar a los puntos de tensión en que se derivó. Uno de esos ocurre en Melipilla como resultado del encarcelamiento, considerado injustificado por los campesinos, de cinco dirigentes. El origen fue una orden de desalojo de un fundo ocupado, a partir de la cual el juez local ordena la aprehensión de los dirigentes. La crisis del conflicto se produce cuando un grupo numeroso de campesinos ocupa por fuerza el local del juzgado, haciendo necesaria la participación de autoridades de gobierno. Este acontecimiento permite un nuevo enjuiciamiento respecto a la legitimidad legal del Gobierno, con la activa participación del gremio de abogados.

Otro hecho grave ocurre en Concepción. Ahí la situación fue mucho más grave. Durante dos días, a propósito de la autorización para marchas políticas simultáneas, las fuerzas de la UP -menos el PC y el PR- y de la Oposición se enfrentan directamente mientras los policías tratan de imponer el orden y de neutralizar a los bandos combatientes. Los llamados del Presidente para que se abandonara la violencia, dirigidos especialmente al MIR, fueron desoídos.

Los sucesos de Melipilla y Concepción, que evidentemente favorecen a los sectores que rechazaban las conversaciones, constituyeron crisis que escapaban al control institucional, no sólo en el sentido que se trataba de conflictos que no eran normados por la ley, sino en el sentido que escapaban a la planificación y al control de las fuerzas que los originaban. Concepción es un caso claro de violencia que se autoalimenta y donde los sucesos tienen el erratismo de la espontaneidad y de la falta de dirección, se trata de explosiones donde la violencia tiene mucho de combate expresivo: no se trata tanto de morir o matar como de demostrar que se es tan fuerte como el adversario.

La crisis de octubre se presagiaba pero todavía había un camino por recorrer. Al final de la fase, en el mes de junio, se produce un paro de los comerciantes detallistas. El incidente que lo desencadenó fue, también bastante trivial. Con motivo de un aniversario los comerciantes convocan a una concentración con suspensión de actividades al

mediodía. **El Gobierno autoriza el acto pero prohíbe el cierre de los locales. Al no acatarse la decisión algunos inspectores multaron a los comerciantes infractores.** Este acto administrativo desencadena un **paro del comercio** y una vasta ofensiva cuya temática central era la **persecución por parte del Gobierno contra el comercio privado, con el objeto de reemplazarlo por las JAP.**

Es evidente que éstas no fueron nunca las intenciones del Gobierno, que sólo intentaba enfrentar el acaparamiento y regular el abastecimiento en los sectores populares a través de sus organizaciones. Además, era fácil darse cuenta que la temática no correspondía a la realidad porque el grado de dispersión y de atomización de las empresas comerciales hacía muy difícil su estatización. Sin embargo, lo revelador es que esta temática haya podido extenderse. Ello demuestra que existían en las capas medias fermentos de movilización disponibles. Este fenómeno revela el fracaso de la alianza de clases en que la UP pretendía sostenerse.

En el mes de junio tiene lugar la segunda reunión de autocritica de la Unidad Popular, llamada el Cónclave de Lo Curro, en que se manifiestan discrepancias internas que fueron expresadas en el dilema consolidar o avanzar. La repercusión más importante de estas reuniones es el cambio de la política económica del Gobierno, que acoge las críticas planteadas principalmente por el PC a la política encarnada por el Ministro Vuskovic y que resulta en un reemplazo del mismo. El representante principal del PC en el debate crítico que precede al Cónclave, Orlando Millas, asume el rol preponderante en la conducción económica. Los efectos principales de este viraje económico serán analizados más adelante. Por el momento basta señalar que, pese a los acuerdos formales logrados, la discusión sobre el sentido de la política económica expresa diferencias importantes que resurgirán a lo largo del periodo.

El último hecho significativo de esta coyuntura está constituido por las elecciones de directiva de la CUT por parte de todos los trabajadores afiliados a este organismo. Su significación radica, por un lado, en la corroboración de la fuerza política de la Izquierda en la

masa trabajadora, pero también en la importancia de la votación de la DC, lo que le permite a ésta reafirmar su carácter popular y mostrarse ante la Derecha con una base de sustentación de la que ella carece en absoluto.

6. DEL FRACASO DE LAS CONVERSACIONES GOBIERNO-DC HASTA EL DESENCADENAMIENTO DE LA CRISIS DE OCTUBRE (JUNIO - SEPTIEMBRE 1972)

La nueva coyuntura abarca entre junio y septiembre de 1972, momento este último en que se inician los conflictos que paralizaron el país durante el mes de octubre. Ella representa la culminación y al mismo tiempo el cierre o el final de una etapa en la lucha política. Los meses anteriores constituyen la preparación progresiva de las condiciones inmediatas de la crisis de octubre.

El fracaso de las conversaciones entre la DC y el Gobierno a fines de junio define el carácter del conflicto político en el mes siguiente. Este es, de algún modo, la prolongación del debate y de sus conflictos que habían tenido lugar en junio. Las conversaciones destinadas a encontrar una solución negociada y su posterior fracaso, le dan a julio el carácter de mes bisagra, una fase aislada de interludio. Este mes tiene dos ejes principales: el rechazo por parte del Senado de los vetos presidenciales y el resquebrajamiento de la unidad de los dos bloques en conflicto.

El primer eje está revelando el predominio político de la DC dentro de la posición. Los conflictos continúan planteados en un nivel institucional que es el terreno donde esta fuerza desea llevarlos. Sin embargo, la culminación del proceso de discusión parlamentaria del proyecto sobre las áreas de la economía significa, simultáneamente, el impasse de esta táctica. El Gobierno sostiene la tesis jurídica que los vetos deben ser rechazados por los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio. Como esta mayoría no es alcanzada, recurre al Tribunal Constitucional, sosteniendo que si éste se declara incompe-

tente promulgará aquellas partes de la ley en que se ha alcanzado un acuerdo en las negociaciones precedentes. A su vez la Oposición niega la legalidad de esta fórmula, insistiendo en la necesidad del plebiscito como única salida del impasse.

El carácter del mes está definido por la incapacidad de la Derecha de arrastrar a la DC en una línea de enfrentamiento directo. De hecho, en julio se consolida formalmente la unidad política de la Oposición a través de la constitución de un frente electoral (CODE) en vista a los comicios de marzo de 1973, para elegir senadores y diputados. Sin embargo detrás de esta fachada existen conflictos de línea que estallan durante este mes. Las manifestaciones inmediatas de esta situación son el conflicto para la constitución de una lista unitaria para las elecciones de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) y, en menor grado el debate de carácter ideológico que opuso al Presidente del PN y a uno de los principales publicistas democratas-cristianos. El énfasis del discurso de estos últimos era señalar la especificidad de su perspectiva, haciendo actuar siempre un doble principio de oposición, respecto al Gobierno y respecto a sus aliados.

Detrás de esta crisis de la unidad tan esforzadamente trabajada hasta entonces, existían problemas de fondo que se habían expresado de diferentes maneras a través de cada coyuntura. Para el PN las conversaciones sostenidas entre la DC y el Gobierno desde marzo a junio son la prolongación de lo sucedido entre septiembre y noviembre de 1970, y revelan el mismo tipo de conducta política. Por ello, para la Derecha cualquier avance cualitativo de la lucha contra la UP requería resolver el problema planteado por la dualidad de la DC.

Desde el punto de vista de la UP y del Gobierno este primer momento de la coyuntura tiene un doble rostro. Por una parte, la Izquierda logra dos importantes triunfos electorales. Uno de ellos en la elección complementaria de un diputado en la provincia de Coquimbo, donde la Oposición unida fue representada por un candidato del PIR, y el otro en las elecciones de la FECH donde la DC y el PN fueron en listas separadas. Evidentemente que estos triunfos permiten crear la sensación de que se revierte la tendencia al deterioro,

manifestada en las confrontaciones electorales después de abril de 1971.

Pero, por otra parte, estas tendencias son anuladas por la aparición de serias contradicciones internas en la UP. En ese terreno el estallido culminante fue la llamada Asamblea del Pueblo de Concepción. Todas las fuerzas de la UP al nivel provincial, con excepción del PC, y con la inclusión del MIR, se reunieron para realizar una severa crítica a la conducción política del proceso y proponer una línea alternativa. Allí se propone la disolución del Congreso y su reemplazo por una Asamblea del Pueblo. Esa iniciativa política revela por primera vez la presencia de un concepto que más tarde tenía mucha importancia en el debate teórico. De hecho en la reunión Concepción se mezclan la proposición de una serie de medidas de reforma política con la metodología de construcción de un nuevo poder. Para los actores implicados, Concepción era el similitud de Petrogrado en tiempos de la revolución bolchevique y la Asamblea provincial era el equivalente del Comité Ejecutivo de los Soviets. En realidad, lo que ellos pretendían era mucho más que proponer un plan de reformas del sistema político, las cuales ya habían sido descartadas por el rechazo parlamentario del proyecto sobre la Cámara Unica (13). Lo que tienen en vista es proponer una estrategia de construcción socialista sobre la base de desarrollar progresivamente la dualidad de poderes, que permita gestar y manifestar la caducidad del viejo aparato estatal.

(13) Este proyecto tuvo una corta experiencia parlamentaria. Fue presentado el 16 de noviembre de 1971 y rechazado en la comisión el 21 de diciembre del mismo año. Esto hizo al Ejecutivo desistir de la tramitación posterior. Las principales modificaciones que pretendía ese proyecto eran: reemplazar las dos Cámaras por una Cámara Unica cuya elección coincidiría con la del Presidente, permitir la disolución de la Cámara por una sola vez, eliminar el carácter vitalicio de los Ministros de la Corte suprema. Con esto se pretendía aumentar la capacidad de acción del Ejecutivo y permitir una mayor agilidad de los trámites parlamentarios.

Estos planteamientos son rechazados explícitamente por el PC y el Presidente Allende, los cuales tratan de situar el debate en el terreno de los problemas concretos que entonces se enfrentaban.

Pero además de estas manifestaciones explosivas, las discrepancias internas de la UP tienen otras formas de aparición. Algunas de ellas son el Informe Central al Pleno del PS, donde se trata de legitimar la búsqueda de nuevos caminos estratégicos como una respuesta a la situación de crisis que se vivía; el descubrimiento de grupos de ultraizquierda, escindidos del PS, que estaban implicados en actos delictuales, pero según la Oposición, en un complot contra el Gobierno las tomas de industrias en el sector Cerrillos, pese a los llamados presidenciales para terminar con ese tipo de actos.

El mes de agosto constituye una rara mezcla entre las características del pasado reciente y del futuro próximo. Cuatro son los ejes de ese momento coyuntural: a) la expansión de los problemas en la UP; b) los efectos del cambio de política económica; c) la agitación gremial y la mayor unificación de la Oposición; d) la violencia política en desarrollo.

Este momento coyuntural está fuertemente marcado por la agudización de los problemas internos de la UP. El debate a propósito de la Asamblea del Pueblo realizada en Concepción en julio, azota a la UP con gran fuerza durante todo este mes. La situación se hilvanó del siguiente modo: a fines de julio Allende se reúne con los jefes de los partidos y les hace entrega de una carta. En ella se intentaba una ardorosa defensa de lo que Allende había definido como las características centrales del proceso chileno: desde el punto de vista estratégico, necesidad de defender la institucionalidad y reivindicar para la Izquierda la defensa de la democracia; desde el punto de vista táctico, importancia decisiva de la batalla electoral parlamentaria de marzo de 1973 y de la superación de la crisis económica. Para todo ello era indispensable -según Allende—fortalecer la unidad de dirección y la disciplina interna. En el curso del mes, los diferentes partidos fueron respondiendo al Presidente en lo que este llama un bello abanico de opiniones. El PS responde de modo indirecto mediante un llamado a

acusar constitucionalmente a la Corte Suprema. Aunque de ese modo el PS no se pronuncia sobre el fondo del problema, la elección de la problemática muestra una discrepancia —por lo menos— táctica. Mientras Allende llama a enfrentar con realismo las tareas económicas y electorales el PS parece estar interesado en la agudización del conflicto político.

Sin embargo, el acontecimiento más explosivo en las relaciones entre los partidos de la UP, es provocado por el enfrentamiento entre pobladores y policía civil en el Campamento Lo Hermida, a propósito del cual muere un poblador. Esta situación provoca la siguiente cadena de hechos: un virulento ataque del MIR al Gobierno, donde se pretende mostrar lo sucedido como una consecuencia de la política de conciliación centrista de la UP; la condenación por parte del PS a la actitud del Gobierno y principalmente del Ministro del Interior, que militaba en sus filas; al análisis del PC, que caracteriza lo ocurrido del modo exactamente contrario al del MIR, como una provocación extremista; la destitución por parte del Gobierno de los principales jefes de Investigaciones; la visita de Allende a Lo Hermida, donde es enfrentado por los pobladores.

Es evidente que para la UP la muerte de un poblador a causa de la represión policial constituye un serio quebranto político. Sin embargo, el impacto público del evento y la significación política que se le atribuyó dependieron, en primer lugar, de la agitación producida por la prensa opositora y, en segundo lugar, de la ofensiva en que esta empeñó el MIR. Si la reunión de Concepción era un intento de constituir un bloque de dirección alternativa del proceso, la tematización de los sucesos de Lo Hermida en la línea seguida por el MIR tiene el mismo sentido.

La verdad es que, al margen de los problemas de factibilidad política que pudiera haber tenido la aplicación de esa otra línea, por otra parte siempre estuvo sólo germinalmente esbozada—, la agudización de la crítica interna, era también el resultado lógico, quizás subjetivamente planteado, de los graves problemas que se enfrentaban. El mes de agosto es el momento del cambio de la política

económica y de la aplicación del modelo que se llamó de estabilización en otro nivel. La consecuencia de ese viraje fue que se sumó a los problemas de desabastecimiento una pequeña pérdida del poder adquisitivo en relación al año anterior, en que éste había crecido significativamente para los sectores populares. Pero, además de estos aspectos que afectaban a todos, incluida la base de apoyo popular del Gobierno, lo más grave es el significado ideológico y político del viraje: la presencia irrefutable y reconocida de una crisis y la convicción de que la política anterior había tenido una parte importante de la culpa en el desencadenamiento.

El llamado "plan Millas" (nombre del nuevo Ministro de Economía), con un énfasis mayor en la estabilización, opera entonces como un factor catalizador de un conjunto de descontentos latentes, tanto más graves cuanto se le asigna a ese plan económico el sentido de una estrategia política global. Evidentemente que ese conjunto de medidas técnicas forman parte de una línea, que era -en grueso---la de Allende y del PC, pero también ellas son independientes del plan político y constituyen un intento de respuesta a una crisis económica producida como consecuencia del impacto redistributivo, del aumento del gasto fiscal, del copiamiento de las capacidades instaladas ociosas, de la falta de nuevas inversiones, de la caída de la tasa de ahorro de los problemas del comercio exterior y, last but not least, de la desarticulación del sistema económico capitalista sin un reemplazo efectivo por una alternativa. El plan político existía y estaba conectado con el económico, pero ambos son separables: se buscaba el equilibrio político sobre la base de una estabilización de los niveles de conflicto. Sin embargo, pronto los hechos demostrarían que esa posibilidad estaba sobrepasada.

Lo verdaderamente expresivo de los movimientos del futuro que se venían gestando fue la intensa ola de agitación gremial que se vive en este momento de la coyuntura. Una vez más un pretexto irrelevante juega el papel de detonador. El escenario del incidente trivial que desencadena el conflicto es el extremo sur: en una rutinaria visita de inspección de inspectores del organismo fiscalizador de industria y comercio (DIRINCO) en un local de Punta Arenas fallece de ataque

al corazón el propietario del negocio donde se ejercía la acción de control. Al día siguiente se realiza un paro nacional del comercio en protesta contra la persecución del Gobierno. De, hecho, no era primera vez que este tipo de acción se realizaba con el mismo motivo: los propietarios agrícolas habían citado a una huelga nacional de protesta por la muerte de uno de ellos durante la toma de posesión de su fundo por la CORA. Sin embargo, la magnitud de la empresa intentada por los dirigentes del comercio es mucho mayor. En primer lugar, existía una gran diferenciación interna entre los comerciantes, y graves contradicciones de intereses entre los grandes propietarios de supermercados o de grandes tiendas, y el pequeño comerciante de barrio asfixiado por la competencia que copaba todos los puntos estratégicos urbanos. Quizás por eso mismo había existido una fuerte hostilidad entre las organizaciones gremiales que agrupaban a estos dos sectores.

Sin embargo, el hecho que un pretexto tan artificial como el elegido desencadenara, de un día para otro, un paro nacional está revelando dos cosas: la existencia de un potencial de movilización y la existencia de un alto nivel de organización.

Como ya dijimos esta -potencialidad de agitación y movilización que brota en esta coyuntura entre sectores sociales que nunca habían jugado un rol significativo como factores de poder político, demuestra que se sintieron amenazados por la UP en algunos puntos de especial vulnerabilidad. Eso permite que pequeños y grandes comerciantes actúen bajo una dirección única o, por lo menos, coordinada.

De todos modos, este es el caso típico de aquellos conflictos que se alimentan de los incidentes iniciales. En este caso el Gobierno respondió con extraordinaria dureza: ordena descerrarar negocios y aplica las leyes de represión política a los dirigentes gremiales y la ley de extranjería a los comerciantes foráneos implicados. Todas estas medidas sirvieron para cohesionar a los comerciantes y para ir radicalizando las posiciones, tanto en la cúpula como en la base. Finalmente se llega a un acuerdo por intervención de los presidentes de ambas ramas del Congreso. El otro signo de todo este momento

coyuntural es el fuerte recrudecimiento de la violencia. Es ilustrativo recorrer, aunque sea rápidamente, la secuencia de hechos: se produce un enfrentamiento por la requisición de la principal Compañía de Gas (GASCO), donde se enfrentan obreros y empleados partidarios y opositores de la medida; la lucha entre policía civil y pobladores deja como saldo un muerto y varios heridos en el Campamento Lo Hermida; muere accidentalmente un comerciante en Punta Arenas, lo que desencadena una reacción de violencia en la provincia; enfrentamiento con heridos en Concepción entre jóvenes de la DC y de la UP; tres campesinos son asesinados por ex-propietarios en la provincia de Valdivia: un campesino socialista muere en un choque callejero en la provincia de Bío-Bío; destrucción de locales comerciales, incendios y barricadas en Santiago; atentados de grupos paramilitares de Derecha contra los domicilios de dos Ministros; enfrentamientos en Concepción, donde es asesinado un cabo de carabineros.

Desde el principio del Gobierno de la UP, la violencia había jugando un cierto rol político. Sin embargo, se trataba de hechos aislados que sucumbían ante el peso de las presiones de institucionalización; las fuerzas principales trataban de mantener los conflictos en un marco donde la discrepancia con lo legal fuera tolerable o donde siempre hubiera una instancia de arreglo negociado. Pero a medida que la UP desarrolla su programa, intensificando la Reforma Agraria y creando el APS, a medida que aparecen signos de desarticulación inevitable cuando se intentan reformas estructurales de tal magnitud, a medida que se ensancha la polarización ideológica, se va debilitando también la base de legitimidad y consenso sobre la que siempre se sostiene una regulación institucional del conflicto.

El mes termina anunciando la temática central de septiembre: la existencia de un plan para derrocar al Gobierno. Durante el período y también en los últimos años del Gobierno de Frei, el mes de septiembre había puesto en el tapete el tema de las FF.AA., como si las Fiestas Patrias y la parada militar del 19 de septiembre las sacaran del relativo olvido público en que estaban durante el resto del año. Pero tanto en 1971 como en 1972 ese tema estuvo mezclado con rumores y

acusaciones públicas respecto a la preparación de un golpe. El llamado a retiro de un General de Ejército revela que existía cierta participación castrense en los intentos de empujar al derrocamiento de Allende, pero la posibilidad militar era todavía muy incipiente. Tan sintomático como ese incidente es el debate provocado por un planteamiento de El Mercurio respecto al papel de las FF.AA. como garantes y árbitros de la legalidad y constitucionalidad. El Ejército responde a través de su Comandante en Jefe, reiterando que las FF.AA. son obedientes al Gobierno constitucionalmente elegido.

Aunque la temática del mes está referida al golpe, bien para negarlo o para denunciarlo, el clima político es menos intenso que en agosto, pese a los violentos enfrentamientos entre estudiantes secundarios que durante dos días agitaron a la ciudad de Santiago. Se trata de un mes de expectativa y de medición de fuerzas o de sondeo respecto a las opiniones militares.

Hacia el final del mes se constituyen en algunas ciudades del Sur (Los Angeles y San Javier) comandos gremiales que decretan paros en sus respectivas provincias: esos movimientos parciales, ligados a problemas de la región, muchas veces tan triviales y arbitrarios como los anteriores, servían para ir creando el clima emocional que necesita un movimiento de larga duración y para ir ensayando formas de organización. La crisis de Octubre estaba ad portas.

LA CRISIS DE OCTUBRE DE 1972.

La importancia y significación de esta crisis obliga a su tratamiento como coyuntura aparte, aún cuando debe vérselo también como culminación de la fase anterior.

¿De qué tipo de crisis se trata? Digamos algunas cosas preliminares que nos permitan contestar algunas preguntas relacionadas con ésta. Como veremos al describir el ritmo interno del conflicto, esta crisis se desencadena y mantiene sobre la base de la organización y movilización de sectores de capas medias, sean ellos comerciantes, transportistas, profesionales y también estudiantes secundarios. ¿Cómo alcanzan esas capas los niveles de organización y el estado ideológico que se requiere para incorporarse activamente a un movimiento de tan largo aliento? Un triple proceso explica la situación producida.

En primer lugar, las capas medias son sumidas en un clima de enorme inseguridad como consecuencia de la estrategia de reformas económicas. Aunque el Gobierno no perdía ninguna oportunidad propicia para reiterar garantías a los pequeños y medianos empresarios, las tomas de pequeños predios o de pequeñas industrias -la mayor parte espontáneas, aunque a veces estimuladas por grupos de extrema izquierda—contradecían a menudo esas promesas. Pero, en este terreno, la fricción más importante fue creada por los problemas de abastecimiento y la necesidad del Gobierno de desarrollar formas de control popular que produjeron inevitables choques entre las organizaciones populares y los comerciantes. Por otra parte, la aparición de problemas de abastecimiento indujo a una cierta politización de las relaciones entre las agencias estatales de abastecimiento y los comerciantes. Las primeras requerían asegurarse contra

las tendencias especulativas y para ello favorecían a los comerciantes vinculados con las JAP.

Además, los sectores de las capas medias ligados a la economía capitalista, sea como rentistas o como propietarios, empiezan a ver -como consecuencia de la intensa campaña publicitaria y de la síntomas que advertían en la acción de Gobierno- una amenaza global contra la propiedad privada.

En segundo lugar, la significación social de las capas medias en Chile dependía de los roles políticos privilegiados que había asumido desde la década del 20. Los procedimientos políticos de la UP, en especial su tendencia a sobrepasar el esquema formal de poder contrabalanceado del cual surgían las necesidades de negociación y el gradualismo del cambio social, eran fácilmente interiorizados como una amenaza contra esa tradicional preeminencia o significación política. Esa estrategia impedía que las capas medias jugaran -a través de sus representantes políticos—esos roles pendulares que le otorgaban la posibilidad de múltiples combinaciones para realizar sus intereses.

Por último, el estilo político de la UP chocaba contra el universo cultural de las capas medias. El elemento obrerista del discurso UP, y reivindicación del pueblo como sujeto de la política no era compatible ni con el elitismo de las capas medias, con su respeto idolátrico por los educados y la educación; ni con su lucha permanente por defender las fronteras que debían separar a las capas medias de los obreros y del pueblo; ni con su ideología meritocrática y su convicción que la condición social de cada uno reflejaba su capacidad, su disciplina o su laboriosidad. El elemento revolucionario del discurso de la UP también chocaba con los rasgos autoritarios que se manifestaban a cada paso como un elemento ideológico importante entre las capas medias, su rechazo del desorden y de la agitación, tras lo cual actuaba una concepción naturalística de las desigualdades sociales.

Además, el cuadro de crisis y el clima emocional hacían creíble el razonamiento de que el gobierno no tenía otra salida autónoma -sin

negociación- que una radicalización política y del plan de reformas socializantes. Esto le permitió a la propaganda opositora expandir el tema del totalitarismo y de la quiebra democrática como un horizonte posible.

La crisis económica que empezó a desplegarse desde fines de 1971 y el clima de violencia y de agitación provocado la mayor parte de las veces por la propia Oposición, le daban la verosimilitud a todos estos temas. La quiebra de la normalidad cotidiana a causa de connotados huelguísticos, de asonadas estudiantiles de Oposición y -sobre todo- la desarticulación de los canales normales de abastecimiento alimenticio, también por acaparamiento y especulación de industriales y comerciantes, fueron generando una radicalización ideológica que iba siendo acompañada por una creciente radicalización política.

Sin embargo en este terreno el proceso era lento, desigual y discontinuo. Los sectores más impacientes por paralizar o derrocar al Gobierno se daban cuenta que la DC estaba siempre buscando compensar los pasos que daba hacia la unificación de la oposición y que las fluctuaciones de su línea se debían a su carácter organizacional. Estas constataciones, que los discursos políticos de la Derecha reflejaban a cada paso, se relacionaban estrechamente con el problema de las fuerzas motoras internas de la movilización de Octubre(14).

Allí lo característico es el papel asumido por las organizaciones gremiales de comerciantes (Cámara Central de Comercio, para los grandes y la Confederación del Comercio Detallista, para los pequeños), de transportistas, de empresarios agrícolas (SNA, CAS, Confederación de Empleados Agrícolas), de industriales (SFF), de los constructores (Cámara Chilena de la Construcción) y de técnicos y profesionales en sus Colegios respectivos, cuyas acciones eran coordinadas por la Confederación de la Producción y del Comercio y por

(14) *La intervención externa, en el Paro de Octubre, ha sido suficientemente estudiada y no será analizada aquí. Cfr. "Covert Action..." (op. cit..)*

el Frente Nacional de la Actividad Privada. El papel predominante de ese conjunto, habitualmente disperso y atomizado a causa de la diversidad o contradicción de sus intereses corporativos, revela, en primer lugar, la existencia de una fusión de intereses, producto de un trabajo político de articulación entre las reivindicaciones de cada gremio; revela una considerable ampliación de los niveles de organización de cada uno, de su capacidad de penetración al nivel nacional, especialmente notable en el caso del gremio de los comerciantes detallistas, revela, finalmente un trabajo de creación de formas de coordinación (Comandos multi-gremiales) y de acción agitativa (el uso de tácticas guerrilleras de hostigamiento constante, de parques de camiones de huelga que constituían focos de refuerzo emocional y de transmisión de directivas, etc.) que no tenía precedentes en la historia política de esos gremios.

Por otra parte, el rol predominante que ellos entran a jugar tenía un papel táctico de primera importancia y no sólo era la consecuencia de la radicalización y de la disposición a la acción de esos grupos. Su forma de operación demuestra la conexión entre los líderes de esas organizaciones y el PN. Transformar a los gremios en fuerza desencadenante permitía legitimar al movimiento frente a la DC, despojándolo aparentemente en las acciones iniciales de su conexión con un plan político de derrocamiento, o permitía generar las condiciones para que ésta se viera obligada a entrar en un movimiento que no podía paralizar desde fuera. En el diseño político global la DC era necesaria porque ella podía aportar movilización de campesinos y de obreros industriales que demostraban el deterioro de la base popular del Gobierno -su principio de legitimidad—y el carácter nacional de la oposición.

Veamos cuál es el ritmo interno de la crisis, tratando de precisar los principales momentos o subetapas dentro de ella.

El primer momento abarca entre el 1° y el 8 de octubre. Durante la subetapa se inicia el movimiento a través de planteamientos donde los gremios explicitan sus plataformas y su voluntad de acción pero todavía los paros y las huelgas tienen una amplitud regional. La

consecuencia de hechos es la siguiente: 1) los principales gremios se dirigieron al Presidente para anunciarle la realización de un paro nacional si el Gobierno no resolvía la situación financiera de la Papelera, perjudicada —según los requirentes— por una política de precios discriminatorios; 2) los gremios de comerciantes amenazaron con realizar una huelga nacional si se mantenía la idea de crear un estanco de línea blanca; 3) los dueños de camiones amenazaron con realizar un paro nacional si se creaba la empresa estatal de transportes en Aysén; 4) el gremio de transportistas de esta provincia austral se declara en huelga, siendo apoyado en los días siguientes por los camioneros de las provincias del Sur, desde O'Higgins hasta Malleco; 5) los estudiantes secundarios salieron a las calles provocando destrucciones materiales y un clima caótico.

El análisis de las reivindicaciones de los gremios en ese momento apunta aspectos interesantes: ellas tienen un carácter particular, cada organización agita —como si no existiera ninguna coordinación— sus propias consignas corporativas. El punto unificador tiene claro carácter parcial (mejores precios para la Papelera) y no pone en cuestión ni la legalidad ni la legitimidad del Gobierno.

Este último estaba sumergido en otra temática, tratando de crear conciencia nacional sobre las consecuencias de la agresión de la Kennecot. Esta empresa cuprífera había anunciado en el mes de septiembre su retiro del Tribunal Especial del Cobre que discutía los montos de las indemnizaciones y su voluntad de boicotear el comercio mundial del cobre chileno. Al principio, el Gobierno pareció darle poca importancia al movimiento que se gestaba, centrando sus argumentos en el carácter limitado de la iniciativa de Aysén.

El segundo momento abarca entre el 9 y el 12 de octubre. Corresponde a la fase en que el movimiento desborda el ámbito regional y se hace nacional. El día 9 la Confederación de Dueños de Camiones inicia un paro nacional de duración indefinida por la nula respuesta a sus reivindicaciones gremiales. Estas reivindicaciones se refieren a precios de carga, abastecimiento regular de repuestos que se había hecho dificultoso por la situación de comercio exterior,

renovación del material rodante y créditos para su adquisición y también el rechazo al intento de crear una empresa estatal de transportes en Aysén. A esas reivindicaciones que se limitan al ámbito corporativo se le agregan algunas reivindicaciones políticas: el problema de los precios de la Papelera y la exigencia que se levantara el orden de clausura de una radio de Los Angeles. Es decir, las reivindicaciones políticas que se superponen a las otras todavía se refieren exclusivamente al problema de la libertad de expresión. Además plantean el tema de un modo puntual.

Al trasladarse el paro de los dueños de camiones del ámbito regional al nacional se produce una intensificación inmediata de la realidad del conflicto: hay bloqueos de carreteras y agresiones por parte de los huelguistas a los camioneros que no dejan de trabajar.

El Gobierno, igual que en el caso del paro del comercio de agosto reacciona con gran dureza. Declara el estado de Zona de Emergencia en diez provincias, las cuales quedan desde ese momento bajo jurisdicción militar, requisita camiones, ordena detener a los dirigentes gremiales.

En ese marco la Oposición realiza un acto de masas que había sido suspendido en septiembre por orden gubernamental se visualizan nítidamente dos discursos. El énfasis de la DC y el PN estaba puesto en la contienda electoral de marzo de 1973 como oportunidad de un enfrentamiento decisivo, el énfasis del PN está en la crisis que se venía gestando. Según sus palabras había llegado la hora de la acción. Esos matices no son de detalle, detrás de hay dos estrategias, la de la DC que sigue creyendo en la necesidad de agotar todos los recursos institucionales, la del PN, que insiste en cambiar el espacio del enfrentamiento, usando la huelga general de la actividad privada como el desencadenante de un pronunciamiento militar.

El tercer momento abarca entre el 13 y el 16 de octubre. Esta subfase es la generalización del conflicto. La dureza de la reacción del Gobierno desencadena una ola de movimientos de solidaridad que comprendía a los colegios de profesionales y a las organizaciones

estudiantiles dirigidas por la oposición (estudiantes secundarios y de la Universidad Católica). La movilización de estos sectores juveniles multiplica los actos de violencia y los enfrentamientos directos con los jóvenes partidarios de la UP.

La DC se incorpora activamente en el movimiento, movilizando sus fuerzas disponibles, pero el sentido de la crisis corresponde al diseño de la Derecha. La generalización sólo cobra su plena lógica en la espera de un enfrentamiento decisivo, donde el caos de la paralización del país demuestre a los militares que son el único recurso de defensa de la institucionalidad. Pese a eso, la DC se ve obligada a incorporarse al movimiento para evitar aislarse de una masa a la cual la propia crisis radicalizaba. A través de su discurso trata de enfatizar los temas de la democracia y la libertad, para evitar un desbordamiento autoritario.

Sin embargo esta generalización es parcial y limitada. El movimiento no puede desbordar su base burguesa y de capas medias. Al mismo tiempo el Gobierno inicia en esta sub-fase la constitución de un aparato de emergencia, estructurado sobre la base de trabajo voluntario y de la movilización de profesionales, comerciantes y transportistas adictos que le permite mantener el sistema económico funcionando. Es decir, trata de evitar que se cumpla el objetivo de los sectores que buscaban activamente el derrocamiento.

La respuesta represivo legal que el Gobierno utiliza en la fase de desencadenamiento nacional es reemplazada por una movilización política, que no elimina las medidas de fuerza, pero que las subsume. La Izquierda vive estos momentos como una epopeya, sus masas son activadas, exigiéndose de ellas esfuerzos de iniciativa, **organización** y disciplina. La crisis supera las querellas, refuerza la unidad en la base y en la cúspide; se esfuma el desconcierto y el pesimismo en que muchos sectores estaban sumidos por la sensación de impasse y de crisis.

El cuarto momento abarca entre el 17 y el 24. Durante este tiempo el conflicto llega a su clímax, es la fase del endurecimiento. Esta etapa está marcada por el ingreso al paro de los médicos, por la negativa de

los Presidentes de ambas ramas del Congreso a dialogar con Allende. A este endurecimiento de la Oposición, el Gobierno responde cancelando la personería jurídica de la organización de empresarios industriales y de la Confederación de la Producción y del Comercio y desencadenando una nueva ola de requisiciones de empresa cuyos dueños habían paralizado sus actividades.

En vista de esto, los dirigentes del conflicto elaboran el llamado Pliego de Chile y lo transforman en la base de toda negociación para cualquiera de los gremios en particular ese documento significa el planteamiento del conflicto a otro nivel, puesto que la aceptación por parte del Gobierno de las exigencias que contiene, la mayor parte de ellas de naturaleza política, significaría aceptar su ilegitimidad. Es evidente que ese pliego no constituye una base posible de negociación. Sin embargo, es un recurso lógico en la perspectiva de la Derecha y además permite sujetar a los diferentes gremios. Algunos estaban fuertemente desgastados por quince días de huelga, y muestran disposición para negociar por separado.

Lo curioso es que el Pliego de Chile se hizo público en el momento en que la UP había llegado a la igualdad relativa de fuerza -porque se había demostrado capaz de impedir el caos, haciendo funcionar el país y evitando dejarse arrastrar a la violencia, y además estaba empezando a quebrar esa relativa igualdad consiguiendo el respaldo uniforme de las FF.AA. Los gremios en huelga habían agotado su poder de movilización y la DC no se había demostrado capaz de aportar sectores campesinos y obreros o—lo que producía los mismos efectos prácticos—se había mostrado reticente en ese empleo.

El quinto momento abarca entre el 25 y el 31 de octubre. Su carácter es la declinación del conflicto. La Oposición acusa a cuatro Ministros, los gremios vuelven a amenazar con un endurecimiento el PN presenta un proyecto de acuerdo que declaraba la ilegalidad del Gobierno, pero estos actos y esos discursos forman parte de los ritos de una negociación compleja.

La configuración de un equilibrio inestable permite a la DC

retomar con más fuerza la temática de una solución institucional. Personeros políticos importantes de ella, como Tomic, sugieren la formación de un Gabinete que de confianza a la Oposición y que permita la realización pacífica de las elecciones parlamentarias de Marzo de 1973. El impasse en que cae la táctica extremista del PN, por falta de apoyos militares orgánicos, le permite a la DC recuperar el predominio.

Al mismo tiempo el Gobierno, cuyas conversaciones con los gremios estaban suspendidas, abre el campo para nuevas negociaciones al aceptar sin tardanza un fallo de la Corte de apelaciones que pone fin a las cadenas radiales obligatorias.

Cada uno de los bloques en pugna se daba cuenta que no tenía fuerzas autónomas para inclinar la balanza a su favor. En este momento la DC empieza a mirar hacia la FF.AA., no como elemento de ruptura y quiebre, sino como elemento de regulación del conflicto desencadenando; también la Izquierda empieza a mirar en la misma dirección: la colaboración orgánica con las FF.AA. aparece a sus ojos como una fórmula viable para quebrar el movimiento y acumular fuerza para enfrentar la crisis venideras.

El sexto momento de la crisis abarca entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre. El 2 de noviembre asume un nuevo Ministerio integrado por militares y prominentes políticos de la UP, entre ellos el Presidente de la CUT. El 5 el comando Gremial da por terminado el paro, iniciándose las conversaciones de arreglo sólo después que los gremios retornan a sus labores. Esta fue una imposición del Gobierno, cuyo nuevo portavoz en las negociaciones era el comandante en Jefe del Ejército que oficiaba de Ministro del Interior.

Un nuevo actor se incorpora de esta forma al escenario del enfrentamiento de clases. ¿Cómo fue posible esta solución del conflicto, que comprometía a las FF.AA. con un Gobierno de Izquierda? Evidentemente fueron muy complejos los factores que determinaron esta conducta por parte de los militares. Entre los elementos que tuvieron influencia hay algunos que nos parece importante señalar.

Uno de ellos es la ideología constitucionalista. De hecho después del período de las intervenciones militares directas, entre 1924 y 1932, las FF.AA. vivieron reducidas a un rol profesional. La elite política se alzaba al unisono cada vez que aparecían síntomas o intentos sostenidos por parte de los militares—a veces dirigidos desde arriba, como durante el segundo periodo de Ibañez entre 1952 y 1958—de actuar en política. El sistema político, basado sobre una alianza de clases de relativa extensión, con legitimidad y consenso amplio, pues creaba espacios para la participación en la negociación a variados sectores, había dado pruebas sostenidas de fortaleza y resistencia. Había conseguido estabilizar pautas de arreglo político, pese a las presiones que la participación creciente generaba sobre una economía capitalista de lento crecimiento y sometida a los vaivenes del comercio internacional. El sistema aparecía capacitado para regular los conflictos, demostrando una gran capacidad de absorción de tensiones.

El predominio de la ideología constitucionalista era el efecto de la fortaleza que mostraba el Estado y del recuerdo del caos político provocado por las intervenciones militares en la década del veinte, las cuales tuvieron un corte populista que no las hacia atractivas para la Derecha. Este aislamiento de los militares en el espacio profesional, sus dependencias múltiples respecto a la política, produjeron cierto tipo y estilos de socialización.

Ese enclaustramiento en las tareas propiamente castrenses definía el ámbito de la formación, de las preocupaciones, el horizonte cultural y mental de los militares, el cual estaba limitado a la esfera profesional y corporativa. Esto dificultaba la constitución entre ellos de proyectos políticos de consenso, pues sobre esas materias no existían opciones elaboradas.

Por ello, pese al desarrollo visible de una crisis económica, pese a que el sistema político parecía estar fallando en su razón central, la capacidad de regular los conflictos de acuerdo a normas comúnmente aceptadas, los militares no se encontraban en condiciones de generar unidad política interna sobre bases nuevas. El principio de unifica-

ción, apoyo al Gobierno constitucionalmente elegido, era todavía un principio tradicional, que históricamente correspondía a fases anteriores—de carácter moderado—de la lucha de clases.

Por otra parte, el Gobierno de la UP había modificado de un modo importante el estilo de relación entre las FF.AA. y el Ejecutivo. En los períodos de Alessandri y de Frei las FF.AA. sufrieron un fuerte deterioro de las remuneraciones y también de los niveles de adquisición y renovación de material. No eran apreciados como sectores significativos, pensándose quizás que su lealtad al sistema estaba asegurada. Es evidente que el triunfo de Allende convierte a las FF.AA. en un actor político significativo, aún en aquellos momentos en que se mantuvo fuera del escenario: ellas asumen de hecho el papel implícito de árbitros en última instancia de la situación política.

La UP incorporó a los militares activamente en las tareas de Gobierno -participación en los directorios de los minerales estatizados, dirección de servicios de utilidad pública, etc., elevó los niveles de ingresos de los oficiales y de la tropa y les permitió modernizar sus instalaciones y equipos. En esta relación la UP enfatizó las temáticas nacionales de su discurso, presentando el programa como la única forma posible de obtener un desarrollo acelerado y estable, sin multiplicar al mismo tiempo las desigualdades sociales.

Este cambio sustancial de la situación social de las FF.AA.; este tránsito del relativo aislamiento a la significación, pero también la multiplicación de los llamamientos a los militares como fuerza de reemplazo en el marco de una situación de crisis visible; y algunos elementos de su socialización en los últimos años, como las doctrinas de seguridad nacional con énfasis en la lucha antisubversiva; fueron haciendo surgir entre ellos, no sólo la discusión sobre problemas políticos, sino también los gérmenes de un proyecto autónomo. Este proyecto se manifestaba en esta etapa, en una forma primaria, a través de la convicción de que constituían la fuerza más legítima, cuya acción era la única que podía pacificar la situación política. Los militares aceptan para sí ese rol que se les asignaba desde fuera,

porque esa definición como reserva moral de la nación, era la que ellos siempre habían tenido de si mismos.

En octubre las FF.AA. apoyaron un Gobierno constitucional amenazado, pero la aceptación de ese rol de sostén demostraba que en ellas estaba presente la idea de su significación política. Todavía no existía dentro de las FF AA. La suficiente unidad de criterio respecto al carácter y magnitud de la crisis, como para abandonar los principios tradicionales de apoyo al Gobierno constitucional.

El error de la Derecha en esta crisis es no haber percibido el carácter incipiente que tenía el proyecto militar autónomo. Su impaciencia e ignorancia respecto a la mentalidad militar, no le había permitido percibir todavía el papel de legitimidad jerárquica dentro de las FF.AA. Los efectos internos de la crisis social no habían deteriorado seriamente esa legitimidad, por lo menos en el Ejército. Por otra parte, los sectores que buscaban el derrocamiento militar del Gobierno todavía no captaban la importancia que los militares acordaban a su unidad, como condición de preservación institucional. En síntesis, durante la crisis de octubre el sentido que la Derecha quería darle al movimiento no fue compatible con el ritmo alcanzado por la crisis militar.

¿Cómo fue posible que la Izquierda, no sólo aceptara, sino también promoviera la participación de los militares en su Gobierno? La definición generalizada de la situación dentro de la UP era que octubre reflejaba el fracaso de toda negociación con la DC, el retroceso entre sectores medios y populares que parecía estar provocando la crisis económica y las medidas de estabilización, y el desarrollo de una ofensiva que cambiaba el sentido de la lucha política, poniendo al Gobierno ante una situación de pre-guerra civil. Esta definición del carácter de la coyuntura fue la que permitió que- después de arduas discusiones- primara la posición de incorporar a los militares. Si la situación era tal como se describía, el punto nodal de la coyuntura era la resolución del problema militar. Las FF.AA. constituían una fuerza inestable que era necesario ganar, incorporándolas a las responsabilidades de Gobierno.

Pero esa incorporación fue pensada con un diseño distinto a un compromiso o a una alianza, que implicaran modificar el estilo de la acción política de la UP y también adecuar algunos objetivos, sino, más bien, como acumulación de fuerzas. El diagnóstico sobre el deterioro y sobre la emergencia de condiciones de preguerra civil se diluye después de haber sido formulado. La incorporación de los militares fue pensada dentro de otro marco, como el aval de fuerzas necesario para continuar avanzando en la realización del Programa.

Esta mutación del análisis refleja el juego de contradicciones que se desencadenan dentro de la UP. Algunos sectores critican la medida porque expresa la búsqueda de una solución negociada a una crisis que tenía posibilidades revolucionarias, otros la critican porque conduce al Gobierno a la transacción. En ese campo de fuerzas, la unidad interna solo se produce si la incorporación de los militares al Gobierno representa la continuidad de la línea de la UP. La ingenuidad de las opciones revela que no se ha captado lo que está en juego. Los mismos que creen que la UP representa desde ya una revolución no se dan cuenta lo que una revolución significa en cuanto a las fuerzas que se ponen en tensión para destruirla.

TERCERA FASE: DE LA CRISIS DE OCTUBRE AL GOLPE MILITAR. (NOVIEMBRE 1972 A MARZO 1973).

1. DE LA RESOLUCION DE LA CRISIS A LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS (Noviembre 1972 a Marzo 1973).

Después de la solución de los conflictos alcanzada en los primeros días de noviembre, comienza una nueva coyuntura que se prolonga hasta las elecciones parlamentarias de marzo. Esta coyuntura, cuyo desarrollo está marcado por la proximidad de ese enfrentamiento político decisivo, tiene tres momentos diferentes.

La primera subetapa abarca desde el 6 de noviembre, cuando el término de la huelga generalizada produce una baja sustancial de la temperatura política, hasta el 15 de diciembre en que se recrudece el clima conflictual.

Ese primer momento coyuntural tiene un acontecimiento eje: la normalización de actividades. Inmediatamente después de la vuelta al trabajo, la Oposición acusa al Gobierno de violación de los acuerdos, porque algunos de los huelguistas eran sancionados por abandono de trabajo o por incitación al sabotaje durante el período de la huelga. De hecho esta temática de las represalias tiene repercusiones en algunos gremios provinciales. Estos, liderados por el Presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, intentaron replantear el paro. Se hacen algunas amenazas de huelga generalizada a las que el Gobierno responde con dureza a través del General Prats, Ministro del Interior y Comandante en Jefe del Ejército.

Es evidente que el tema de las represalias no tenía la repercusión suficiente como para desplazar el centro de gravedad. Después de la crisis de octubre, la DC ve reafirmada su convicción respecto al carácter fundamental del enfrentamiento de marzo y, en general respecto a la primacía del conflicto institucional. Para ella, las elecciones le proporcionaban la oportunidad de probar su atracción popular y de masas, ganando fuerzas para imponer su línea al conjunto de la Oposición.

A su vez, el PN había comprobado el carácter prematuro de sus esperanzas de octubre, volviendo también sus ojos hacia la meta más próxima, las elecciones.

En general, la participación de los militares en el Gabinete es percibida por la Oposición como una garantía democrática, como la fuerza de contención que impediría la consumación de los desbordes totalitarios que se le imputaban a la UP. Por ello, los intentos extremistas de algunos sectores decepcionados por los resultados del conflicto gremial, fueron rápidamente acallados. Se había conseguido el objetivo fundamental: hacer posible las elecciones de marzo y acotar o limitar la acción gubernativa a través de la participación militar.

La mayor parte de los acontecimientos son leídos desde esa perspectiva por la Oposición. Así, el cuestionamiento de la UP de los resultados de la elección realizada entre los estudiantes secundarios, aduciendo que el triunfo habría sido suyo, o la negativa a realizar elecciones estudiantiles en la Universidad de Chile, son leídas como palpables pruebas de ese totalitarismo. Sólo la presencia de los militares garantizaba que esos comportamientos incipientes no se hiciesen predominantes. Su participación generaba consenso, pese a que algunos aspectos parciales molestaban a la Oposición, sorprendida por una conducta en cierto modo inesperada.

Este clima se modifica a partir del 15 de diciembre donde se inicia un segundo momento de corta duración, que se extiende hasta principios de enero, cuyo centro son los ataques de la Oposición a los

militares. El clima consensual del primer momento se desvanece como por encanto y las críticas se estructuran en torno a dos ejes principales: se retoma la temática de las represalias para culminar a fines del mes con la aprobación de una acusación parlamentaria contra el Ministro de Hacienda como principal responsable de ellas; y más en general, se lanza una ofensiva política contra los militares por su ineficacia en limitar la acción de la UP dentro de los parámetros que la Oposición definía como legales.

Estas tentativas de desmistificar la acción de los militares, que al principio había sido definida como positiva, se intensifican como consecuencia de los violentos ataques del PS a Frei.

Esos ataques coinciden con una importante declaración del Gobierno, realizada por el General Prats, en que se aceptan una serie de reivindicaciones planteadas por la Oposición, entre ellas, aumentos de precios a los productos de la Papelera, reincorporación de profesionales despedidos de la Administración Pública.

La simultaneidad de ambos acontecimientos y la importancia que tiene desde el punto de vista político el comportamiento del PS, refleja el carácter contradictorio del momento y el carácter provisorio e inestable del arreglo político.

Es interesante anotar la diferencia de táctica entre la DC y el PN para tratar el problema de la participación de los militares en el Gabinete. Mientras la DC personaliza sus ataques a ellos, tratando de separarlos del resto de las FF.AA., el PN y los gremios insistieron sobre la ineficacia global de la gestión militar para alterar el carácter del Gobierno.

Esa diferencia táctica es reveladora, puesto que inicialmente la Oposición en su conjunto había alabado a los militares como garantía de elecciones democráticas. Olvidando esa definición inicial, el PN, como si deseara un inmediato desplazamiento del escenario del enfrentamiento, desde las arenas peligrosas de la lucha electoral hacia el campo del enfrentamiento directo, concentra sus ataques en los

Ministros militares. Hay que ver allí una táctica respecto a la resolución del problema militar: el PN quiere desligar a las FF.AA. de sus compromisos con el Gobierno, para que puedan asumir de nuevo su papel de alternativa de orden frente al conflicto generalizado y a la imposibilidad de obtener un consenso mínimo, incluso en vista al desarrollo de los comicios parlamentarios.

Esa línea refleja de nuevo la impaciencia de clase frente a lo que parece el avance irreversible de las estatizaciones. Sin embargo, ella no fue seguida, pues era prematura en una etapa cuyo sentido estaba dado por las elecciones en ciernes.

De hecho, desde comienzos de enero hasta la fecha prevista, la coyuntura se desenvuelve en torno a un eje principal: las elecciones. Para la Oposición los comicios de marzo tienen el carácter de un plebiscito. La DC espera que la demostración definitiva de su deterioro político obligue al Gobierno a rectificar. Su debilidad, en un momento de crisis del funcionamiento de la sociedad, de atomización interna, de desmovilización, permitía que Allende pudiese imponer una línea de compromisos. Para el PN la derrota electoral del Gobierno debía significar el término del mismo, lo que se espera lograr por medio de una acusación constitucional por parte de la mayoría del nuevo Congreso que se elija en marzo. Los sectores juveniles del PN y Patria y libertad son todavía más enfáticos en definir las elecciones como un poco más que un mero accidente. Cualquiera sea su resultado la lucha contra el marxismo debe continuar sin cuartel en otro estadio.

Dentro de la Izquierda se dan los mismos matices. Aunque nadie espere una mayoría para la UP, Allende y el PC ven en las elecciones de marzo un momento decisivo, cuyo resultado compromete el desarrollo futuro del proceso de cambios. Para el PS es sólo una batalla más.

La UP enfrenta las elecciones de marzo en condiciones de deterioro con tres campos principales: los problemas de abastecimiento, la situación interna del bloque y la apertura de un nuevo frente, con la reapertura de otro, en el conflicto institucional.

Respecto al problema de abastecimiento el debate se centra en dos puntos principales. El primero tiene relación con el agravamiento de la escasez, la cual es causada tanto por las disminuciones de producción provocadas por el paro de octubre, como por la desarticulación general del mercado. Esta última es la consecuencia de la especulación y el mercado negro y de las ineficiencias del recién creado aparato estatal de distribución. Evidentemente que la multiplicación de las colas debido a la escasez, generaba una desarticulación de la vida familiar, obligaba a enormes esfuerzos para asegurar el abastecimiento de lo indispensable y también multiplicaba la sensación de dependencia y de inseguridad. El Gobierno acentúa durante esta coyuntura los esfuerzos para arreglar esta situación, siempre utilizando a las JAP como el principal instrumento de control y participación popular. Sin embargo, la gravedad de la situación de ese momento decisivo impulsa al Gobierno a anunciar un plan integral de control del problema, el cual incluye medidas de racionamiento.

El llamado "plan Flores" (nombre del Ministro de Hacienda) constituyó el segundo aspecto relevante del debate en torno al problema de abastecimiento. Aunque en él no se anunciaban medidas de implementación, y aunque se sospechaba que no estaban previstas, la simple enunciación provoca un largo debate.

Finalmente éste se zanja coyunturalmente con la creación de la Secretaría Nacional de Abastecimiento a cargo de un equipo de Oficiales.

El segundo nivel de deterioro corresponde a la unidad interna del bloque gobernante. Aunque es sabido que la discusión de concepciones generales respecto al desarrollo de la revolución chilena venía desde lejos, remontándose quizás a los orígenes de los dos grandes partidos de la Izquierda, hemos señalado que el triunfo del 70 había fortalecido el consenso. Así, surgen desacuerdos parciales, por ejemplo a propósito de las conversaciones con la DC entre febrero y junio del 72, o de los sucesos de Lo Hermida en julio, pero sólo desde agosto de 1972 - como consecuencia del cambio de política económica detrás de la cual se percibe un cambio político global - esas discrepancias van

haciéndose sistemáticas, en el sentido de que se configura una concepción alternativa respecto a la dirección política de la UP. Entre julio y agosto del 72 esas diferencias globales salen a la luz a propósito de la llamada Asamblea de Concepción. El polo izquierdista, donde se agrupaba el MIR y parte del PS y del MAPU, se definió por primera vez en público a favor de otro modelo de transición al socialismo, en el cual la clásica estrategia bolchevique de la dualidad de poder debía jugar un papel central. Estas discrepancias sobre la conducción política del proceso y las alternativas estratégicas, se reflejan en el debate y la lucha por el poder interno en los partidos de la UP.

Ya más avanzada la disputa preelectoral se producen nuevas discrepancias. Una es el resultado incidental de la alianza electoral que habían aprobado el PS, la IC y el MIR. En una de las proclamaciones comunes de este frente se realiza una dura crítica de tono izquierdista a la UP, lo que produce un viva molestia entre los otros partidos y en Allende. Pero esa crítica revelaba una discrepancia respecto a los intentos de Allende de regularizar la situación del APS, donde incluso se contemplaba la devolución de algunas empresas consideradas casos especiales, además de la legalización de la situación global en esta materia. Tanto el PS como el MAPU se oponen tenazmente a esta iniciativa presidencial.

Estos intentos presidenciales de resolver el problema del APS mediante una legalización de lo actuado y aceptando para el futuro la imposición de un procedimiento institucional, tiene relación con la apertura de un flanco importante en la lucha por reivindicar la legitimidad legal. A partir de diciembre la Contraloría inicia una ofensiva legal contra las requisiciones ordenadas por el Gobierno. Así por ejemplo, falla en dos oportunidades contra la requisición de las empresas Fensa, Ferriloza, Cementos Bío-Bío. Ese fallo no significaba que el Gobierno debía volver atrás, puesto que podía acudir al procedimiento de insistencia con la firma de todos los Ministros. Sólo constituía un juicio en derecho, al cual habitualmente se le confería audiencia, sobre las atribuciones y la validez de los procedimientos empleados y de los preceptos jurídicos invocados. Pero era evidente que esta polémica con la Contraloría respecto a las requisiciones e

intervenciones podía generar una fuerte tensión en las relaciones con los Ministros Militares, puesto que los obligaba a avalar ciertas acciones discutidas del Gobierno, lo que renovarían la presión contra ellos de la DC y el PN. Esto era justamente lo que Allende quería evitar, tratando de mantener el equilibrio inestable del arreglo producido, por lo menos hasta las elecciones.

Al mismo tiempo se reabre durante esta coyuntura la polémica entre el Gobierno y el Poder Judicial. Los puntos de fricción son tres: 1) los fallos de algunos tribunales que limitan los poderes de gestión de los interventores nombrados por el Gobierno en algunas industrias y el fallo de la Corte Suprema respecto a la ilegalidad de requisición de una gran industria textil; 2) la polémica en torno al fallo de la Corte Marcial, donde, con el voto contrario de los jueces militares, se rebaja de 20 a 2 años la pena contra el ex-General Viaux por el atentado al Comandante en Jefe del Ejército en octubre de 1970; 3) la encargatoria de reo dictada por la Corte de Apelaciones contra un funcionario estatal encargado de la fiscalización al comercio y contra el Ministro Secretario General de Gobierno por haber dispuesto cadena obligatoria de radios durante la crisis de octubre.

El cerco institucional contra el Gobierno se estrechaba a cada momento un poco más. Al mismo tiempo, como al margen de la disputa electoral, perfectamente rutinada y reglamentada, se desarrolla otro enfrentamiento que parece estar aparte y desligado del anterior: el recrudecimiento de la violencia, no ya en la forma de violencia de masas, -la cual dentro de ciertos límites formaba parte de esa misma rutina electoral, sino en la forma de violencia terrorista por parte de grupos opositores. Enero y febrero estuvieron plagados de atentados a bomba, de sabotaje a instalaciones de electricidad, de asaltos e incendios contra camionetas fiscales.

Esos hechos, aparentemente irracionales, demuestran la existencia de un doble ritmo de la coyuntura. Uno que se orienta hacia marzo, otro que prepara las condiciones para después. Quizás los autores de estos atentados todavía esperaban que el Gobierno o sus partidarios decidieran lanzarse a responder la violencia con la violencia, cam-

biando el campo de enfrentamiento, lo que obligaría a actuar a las FF.AA.

Los resultados de la elección parlamentaria del 4 de marzo provocan un terremoto político. La Oposición, pese a sus diferentes matices, era unánime para asignarle a las elecciones un carácter plebicitario, partiendo de la base que ella reflejaría un enorme retroceso político del Gobierno. En la práctica los resultados electorales reproducen la situación de empate que habían mostrado los comicios municipales de 1971.

La UP disminuye su votación en aquella fecha, donde alcanzo el 49,8%. Sin embargo, después de tres años de Gobierno en que su intención de transformar revolucionariamente la sociedad chilena había hecho estallar una crisis, obtiene un 43,4%, disminuyendo sólo en 6,14% su presencia en el electorado. Si los resultados se comparan, no de acuerdo al total de votantes, sino de acuerdo al total de inscritos, lo que permite anular los efectos de las abstenciones diferenciales (25,2% en 1971 y 18,8% en 1973), la diferencia entre ambas elecciones es sólo de 1,1%. En todo caso, cualquier sea la base de cálculo elegida, los resultados no son políticamente significativos para la estrategia de la Oposición. Estos resultados no le permiten la mayoría necesaria para acusar constitucionalmente al Presidente y obtener su renuncia mediante un recurso constitucional, ni tampoco le sirven para obligar a la UP a la transacción imputándole un profundo debilitamiento de masas.

Dentro de ese marco, a la DC en particular tampoco le sirve haber aumentado su distancia frente al PN en un 0,4 puntos. Esto sucede, en parte, porque este último también crece -aunque menos que su aliado- respecto a las elecciones del 71 pero sobre todo porque la estrategia política de la DC estaba estructurada en base al resultado electoral. Al mantenerse el empate comienza el ocaso de esa línea política.

En el período pre-electoral la DC estructuró su discurso una vez más- en torno al doble principio de oposición: contra los intentos sediciosos y contra el totalitarismo del Gobierno. La función política

de la DC como organización sería evitar la polarización, porque un esquema de dos bloques enfrentados destruiría el equilibrio político.

Una vez más la DC intenta jugar en una situación de enfrentamiento político agudo, el papel de un centrismo que se desplaza desde la derecha hacia la izquierda, pero siempre con un movimiento pendular incompleto: esto es sin abandonar el campo de la Oposición. El alternativismo ideológico y la dirección del partido por parte de los sectores más permeables a la UP, mantienen a la DC en la incómoda postura de un centro que siente la nostalgia de haber perdido su posición céntrica y que está siempre dispuesto a compensar su alianza con la Derecha mediante algunos pasos hacia la Izquierda. Para la DC este ejercicio termina cuando ya era demasiado tarde.

2. DE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS AL ALZAMIENTO DEL 29 DE JUNIO (Marzo - Junio 1973)

Después de las elecciones comenzó la última coyuntura de medición de fuerzas o de reajustes. Este tipo de fases, que hemos llamado de interludio, siempre se producía después que un acontecimiento importante había modificado el campo político.

Los ejes de esta coyuntura son: 1) el conflicto por la Escuela Nacional Unificada; 2) el conflicto por la formación del APS y 3) el desarrollo de formas nuevas de organización popular.

Hasta fines de abril el problema de la ENU es el conflicto predominante. El conjunto de reformas sobre el sistema educacional que se contenían en el Informe sobre la Escuela Nacional Unificada pretendían, según los sectores de la UP que lo apoyaron con más fuerza, un conjunto de objetivos de mejoramiento técnico y de democratización de la enseñanza. Entre las primeras estaba la adopción del principio de la educación politécnica que permitiría -según sus

promotores—la ruptura de las barreras impuestas por la especialización estrecha, la combinación de enseñanza teórica y práctica, de estudio y trabajo productivo, mediante la cual se esperaba superar progresivamente la división entre trabajo intelectual y manual; la racionalización del sistema educativo— tanto en materia de recursos como respecto a la relación entre medio de vida y medio estudiantil— a través de la creación de complejos educacionales, articulados a la vida del barrio o de la población.

Entre los segundos estaba la creación de un sistema único de enseñanza, en el que se esperaba que todos tendrían oportunidades iguales y recibirían la misma educación, y la quiebra del elitismo universitario, pues también se podría acceder a la enseñanza superior desde el campo del trabajo. El lenguaje de la exposición del proyecto, a diferencia de su contenido mismo, era de tono altamente ideológico. Es de este aspecto que se servirá la Oposición para atacarlo.

Este proyecto, cuyos fundamentos centrales habían sido aceptados y aprobados por representantes de sectores educacionales y de organizaciones sociales de la Oposición en el Congreso Nacional de Educación de diciembre de 1971, despierta ahora una intensa campaña de agitación. Al principio las baterías de la Oposición estuvieron centradas en aspectos técnicos, más tarde en la presunta inconstitucionalidad del proyecto y de los procedimientos. Más adelante los fuegos se concentran en el contenido ideológico del proyecto, donde se expresarían, a juicio de la Oposición, las pretensiones totalitarias de la UP y el absoluto predominio ideológico marxista-leninista. El desenlace del conflicto era impreciso hasta que el pronunciamiento de algunos oficiales generales, principalmente de la Armada, y de la Iglesia lleva al Gobierno a retirar el proyecto.

El retiro del proyecto de la ENU genera fuertes críticas en los sectores del polo izquierdista. Estos, aunque reconocían la imposibilidad de imponerlo burocráticamente, sin una completa discusión, ven en el retiro, por imposición del bloque opositor y con la complicidad de las fuerzas más moderadas de la UP, un síntoma de retroceso político.

La importancia del conflicto de la ENU es lo que permite a la Oposición una ofensiva en el campo ideológico, tocando allí los puntos sensibles de dos actores claves a los que no había podido arrastrar hasta el momento a su estrategia: las FF.AA. y la Iglesia.

Durante esta coyuntura recrudece el conflicto a propósito del APS. Dos son los incidentes principales, ya casi definitivos, de esa lucha parlamentaria e institucional que había comenzado a fines de 1971. El primer incidente motivado por el decreto de insistencia enviado por el Ejecutivo, ya sin la presencia de Ministros Militares, como veremos más adelante, para la requisición de 55 industrias cuya legalidad había sido cuestionada por la Contraloría. El Gobierno le otorga a este acto un carácter puramente administrativo, mientras que el bloque opositor ve en él una nueva comprobación de los descos del Gobierno de continuar las reformas por la vía extra parlamentaria.

El segundo incidente en este conflicto se origina en la respuesta de la DC ordenando a sus parlamentarios poner en tabla la discusión sobre los vetos del Ejecutivo al proyecto sobre las áreas de la economía. Esta discusión había quedado paralizada en agosto de 1972 al percibirse el impasse jurídico entre la posición de Allende, que implicaba la promulgación parcial de la reforma constitucional, y la opinión de los opositores para los cuales sólo era posible una promulgación total o un plebiscito. En mayo estos temas vuelven a suscitarse. El Congreso rechaza ya definitivamente los vetos presidenciales y el problema queda entregado a la decisión del Tribunal Constitucional, el cual a fines de ese mes se declara incompetente.

La incompetencia del Tribunal Constitucional respecto a la legalidad del procedimiento usado por el Congreso al rechazar por simple mayoría los vetos a una reforma constitucional como la que estaba en discusión—cuando en el caso de una ley normal se exigía los dos tercios—, significaba para el Gobierno una grave derrota legal y política. El conflicto desencadenado carecía desde entonces de un arbitraje institucional. No le quedaba al Gobierno sino imponer su

tesis de la aprobación parcial o apelar al plebiscito (15).

El tercer acontecimiento —eje de esta coyuntura— es el desarrollo de formas nuevas de organización popular, cuyo origen se situaba en la crisis de octubre.

A partir de esa crisis empiezan a aparecer en diferentes partes del país una serie de organizaciones como los Comandos Comunales y los Cordones Industriales. Los primeros aglutinan por un principio territorial a todas las organizaciones de base; los segundos están más directamente ligados al aparato productivo, aunque también operan con un principio espacial que liga a varias unidades productivas. La lógica de esas nuevas formas organizacionales, en torno a las cuales giró el debate sobre el Poder Popular, es triple: a) ellas permiten nuclear a los trabajadores sobre una base territorial, facilitando la organización, la movilización y la coordinación de las actividades; b) son formas de organización que parecen corresponder a las nuevas necesidades políticas, pues el principio territorial permite que realicen con relativa eficacia tareas de defensa del Gobierno; c) son estructuras que permiten producir, desde la base, la unidad interpartidaria que cada vez se hace más difícil en la cúpula.

En un principio, el desarrollo de esas organizaciones no tradicionales es impulsado por el polo izquierdista, porque corresponde a su teoría del poder popular alternativo. El problema suscitado en un pequeño pueblo del Sur, Constitución, es sintomático. Allí el Coman-

(15) Recordemos que la Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía fue presentada por dos Senadores DC, Hamilton y Fuentealba, como respuesta a la política de expropiaciones del Gobierno, el 20 de Octubre de 1971. Su tramitación duró 18 meses. Aprobado por el Congreso Pleno, en Febrero de 1972, el Presidente vetó el Proyecto. El Congreso rechazó algunos vetos por mayoría, produciéndose el conflicto con el Ejecutivo. Al declararse incompetente el Tribunal Constitucional arguyendo que se trataba de una Reforma Constitucional sobre la que no tenía capacidad de juicio, el Presidente promulgó parcialmente el proyecto, lo que fue rechazado por la Contraloría.

do Comunal de Trabajadores ocupa simbólicamente la ciudad, en protesta contra los representantes del Gobierno central. En el acto se expresa una línea política, para la cual la única solución estratégica consistía en el despliegue de la iniciativa popular, aunque esta se pronunciara contra el Gobierno. Durante esta coyuntura ese tipo de movilizaciones son frecuentes. Todavía las nuevas organizaciones, a través de las cuales se pretende realizar la unidad con la acción de los trabajadores, son la expresión del grave conflicto estratégico que azotaba a la UP.

Este hecho impidió comprender el complejo carácter de estas organizaciones que unían un principio de defensa del consumo de las fuentes de trabajo ante el boicot patronal con una fuerte radicalización ideológica que reivindicaba para los sectores populares el rol de sujetos de la historia. El tema del poder popular, promovido tanto por sectores de la UP como de la Oposición, oscureció la significación real de esta movilización popular que al principio desbordaba a las organizaciones tradicionales. En todo caso, el desarrollo de estas nuevas organizaciones adquiere pronto un carácter autónomo de los conflictos internos de la UP. Entonces ellas son impulsadas por los sectores de ésta.

El conflicto interno de la UP se refleja en esta coyuntura con la división de uno de sus partidos (el MAPU), cuya significación reside en que revela, primero, un alto grado de descomposición dentro la UP y, segundo, un intento fallido de reagrupación general del bloque

Las temáticas centrales de esta coyuntura, en cuyos términos son leídos todos los acontecimientos, son la denuncia por parte del Gobierno del fascismo y de la posibilidad de una guerra civil y las declaraciones reiteradas de la Oposición sobre el carácter ilegal del Gobierno.

La violencia desencadenada en esta coyuntura, tanto en la forma de violencia de masas, suscitada a propósito de la ENU o de la huelga, provocada por la Oposición, del establecimiento cuprífero de El Teniente, o en la forma de terrorismo, ilustraba sin discusión la

situación amenazante que denunciaba el Gobierno. Sin embargo, ni siquiera la DC parece sensible a los peligros.

La razón de esta impermeabilidad es que la polarización había cumplido su ciclo dentro de ese partido. En el mes de mayo, la dirección centrista debe abandonar el timón en manos de la derecha partidaria.

El sentido de esta coyuntura es entonces, la preparación de un enfrentamiento definitivo, sin que haya claridad ni consenso en la UP sobre el carácter específico del mismo y sobre las respuestas posibles. La movilización de masas que invadió el escenario durante octubre del 72, tiene en esta fase un rol secundario. El incidente principal en este terreno es la huelga de trabajadores de El Teniente con una duración de 75 días. Ese conflicto es grave para la UP por tres razones: a) por las consecuencias económicas que acarrecaba la paralización del segundo mineral de cobre del país; b) porque el bloque opositor había logrado movilizar clase obrera en uno de los ámbitos políticos más importantes del PS, lo que representaba un avance para ese bloque respecto a octubre del 72; y c) porque durante el conflicto se generaron formas de acción común entre esos obreros y los estudiantes ultra derechistas de la Universidad Católica, lo que demuestra que había sectores muy minoritarios pero estratégicos de la clase obrera que también se alineaban en la perspectiva del derrocamiento.

Pero fuera de esa movilización importante y de la violencia, en diversas formas, que permanecía como un rasgo constante, la coyuntura tiene un desarrollo secreto, que no aparece ante los ojos del público, y que explica la menor intensidad de la lucha en el escenario: la pugna por atraer a las FF.AA. Todos los temas del bloque opositor se dirigen hacia ese objetivo o -por lo menos- se orquestan con él.

Así en la mañana del 29 de junio se produce el alzamiento de la más importante unidad blindada de Santiago, cuyos tanques rodean el edificio de la sede del Gobierno y atacan el Ministerio de Defensa. Aunque desde el principio el intento golpista estaba abortado, porque la unidad rebelde había quedado aislada, el Comandante en Jefe del

Ejército debió encabezar personalmente el contra ataque, movilizando las fuerzas militares disponibles. Las conexiones de este intento militar con grupos civiles quedó demostrada con el asilo político del dirigente máximo del movimiento Patria y Libertad y con las declaraciones de otros dirigentes de ese movimiento.

¿Cuál es el significado político y militar de este intento fracasado?. Es evidente que aún hoy día es muy difícil conocer el papel exacto que él juega dentro del diseño global, sobre todo si se piensa que después del golpe militar del 11 de septiembre, los dirigentes de este último lo han criticado desde el punto de vista de la impaciencia que revelaba y del respeto a los canales regulares de las FF.AA. Sin embargo, el desarrollo de este alzamiento permite señalar algunos puntos.

En primer lugar, la no existencia de una fuerza militar propia de la UP, capaz de enfrentar a cuerpos regulares del Ejército. Durante las horas de tensión en que las tropas rebeldes ocupaban las calles sin que ningún destacamento profesional móvil les hiciera frente, sólo recibieron la oposición de francotiradores dispersos y de la guardia de carabineros parapetada de la sede de Gobierno.

En segundo lugar, revela el exacto papel que juegan los cordones industriales, como lugar de nucleamiento, organización y coordinación, como ámbito de fortalecimiento emocional e ideológico. Seguramente a muchos llamó la atención la ausencia de organización armada popular. Los relatos de militantes y dirigentes de los Cordones revelan, más allá de la convicción y la valentía personal que reflejaban, la absoluta carencia de medios para enfrentar una lucha armada.

Sin embargo, eso no quiere decir que ese tipo de organizaciones carecieran de significación. Todo lo contrario, el día 29 despliegan una enorme labor de agitación, de vigilancia y de inteligencia, detectando los movimientos en torno a las industrias y barrios obreros. Al mismo tiempo, los Cordones y los Consejos Comunales sirven como base en los meses siguientes para una ofensiva de tomas

de industrias y de desarrollo de una organización económica de emergencia, donde se perfecciona y se masifica lo aprendido durante la crisis de octubre.

Pero es evidente que tanto los Cordones como los Consejos Comunales representaban importantes organizaciones de retaguardia, útiles para tareas políticas y para procurar la máxima normalidad en la producción y el abastecimiento y para la defensa de determinados emplazamientos. Ellas tendrían una enorme importancia militar sólo si se dividían las FF.AA. De nuevo el debate planteado en la Unidad Popular sobre el poder popular y por la Oposición sobre el poder armado paralelo impidió ver la realidad de estas organizaciones.

El alzamiento de fines de junio demuestra así el carácter dependiente de la política militar de la UP y aclara definitivamente un aspecto en el cual el General Prats insistía: las FF.AA. no podían correr el riesgo de hundir al país en una larga guerra civil. Este episodio comprueba, pese al carácter cómico e irrelevante que trató de asignarle el bloque opositor, que no habría guerra civil si las FF.AA. procedían según fórmulas de consenso.

La lucha por atraer a los militares estaba desencadenada desde octubre. En ese terreno la UP parecía tener una gran ventaja: la legitimidad jerárquica jugaba en general a su favor. Sin embargo, la UP no captó el deterioro a que ella estaba sometida, por cuanto el Gobierno esperaba todo del respaldo de los oficiales y de los soldados pero las condiciones políticas creaban dificultades para afirmar el mando militar.

Esto último se había expresado el 27 de marzo, después de las elecciones, cuando el Presidente reorganizó su Gabinete sobre la base de militantes de los partidos, prescindiendo de la colaboración militar. La decisión fue tomada según el criterio, expresado por el Alto Mando, de que la participación en el Gobierno deterioraba la correlación interna en las FF.AA. Para continuar en el Gabinete, ellas necesitaban plantear exigencias respecto al curso político, que per-

mitieran también un plan orgánico de colaboración. La UP enfrentó otra vez la disyuntiva del compromiso.

Ese tipo de colaboración despertaba el máximo de reticencias en la UP. Dos eran las razones principales: a) desde fines de octubre de 1972 había habido un gran desarrollo de las tendencias izquierdistas dentro de la UP, tanto en la cúpula -aglutinaban a la dirección del PS, de la IC, del MAPU y tenían el apoyo del MIR— como en sectores de base, que veían en los resultados electorales una posibilidad de avance y no de retroceso y reivindicaban una línea que acudía a las energías de la masa en vez de descargar el peso de la solución en las astucias de los altos dirigentes; b) la colaboración con los militares despertaba más sospechas que los acuerdos con la DC, pues se trataba de una fuerza que, llegado el momento, podría imponer sus condiciones.

En vista que reproducir la colaboración con los militares en un nuevo nivel cualitativo agudizaba los conflictos o las contradicciones en la UP, pues la mayoría de esta no quería modificar lo que se creía era el avance socialista, el Presidente decidió retirarlos del Gobierno. Si el desenlace no estaba escrito desde antes, quizás se comenzó a escribir en ese momento.

Finalmente, el alzamiento del 29 de junio revela datos importantes respecto al estado ideológico de la oposición, algunos de cuyo sectores claves estaban implicados en él. Pese a que se producen por parte de la DC, declaraciones de apoyo al régimen constitucional, el bloque opositor en su conjunto se niega a darle al incidente la importancia que merecía. Así rechaza la dictación de una ley de Estado de Sitio, sin la cual el Gobierno no tenía instrumentos legales para desarmar los dispositivos civiles del golpe.

La legitimidad democrática estaba fuertemente deteriorada. Para mucha gente, ferviente o aparentemente democrática hasta entonces, este régimen había perdido su sentido, o habían llegado a creer que la defensa de la democracia requería un cambio de Gobierno. La intensidad de la lucha política iba incubando un desprecio irracional y

pasional hacia el adversario, una odiosidad que justificaba la violencia y el terrorismo. Se asistía efectivamente a un clima de expansión de una ideología autoritaria.

3. DEL ALZAMIENTO DEL 29 DE JUNIO AL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO (Julio - Septiembre 1973).

La última coyuntura está definida por el largo desenlace que va desde el 1º de julio hasta el 11 de -septiembre. Los ejes principales son: a) el deterioro de la situación militar de la UP; b) el nuevo diálogo con la DC y c) el comienzo de una nueva huelga de los gremios patronales.

Las relaciones entre las FF.AA. y el Gobierno entran durante esa fase en una rápida declinación. Cuatro son los acontecimientos y al mismo tiempo los factores de aceleración de este proceso: 1) la visible y pública pérdida de legitimidad de la máxima jerarquía militar; 2) el fracaso del nuevo Gabinete con participación militar; 3) la aplicación de la Ley de Control de Armas contra las organizaciones de la UP; 4) la denuncia por parte del Almirantazgo de un plan izquierdista de infiltración en la Armada.

El día anterior al del alzamiento fracasado de junio, el General Prats, Comandante en Jefe del Ejército, se vio envuelto en un incidente al ser provocado desde un automóvil que viajaba en paralelo al suyo, con manifestaciones en su contra por parte del público que se congregó.

Esto constituía el primer clímax de un proceso que llevaba a desprestigiar a la principal jerarquía militar. En las fases previas a octubre, el PN y su prensa hicieron a las FF.AA. en su conjunto el blanco de sus ataques; más adelante la DC centró sus fuegos en el General Prats buscando mostrar que su conducta no era representativa. El PN recapacitó y al mismo tiempo que hacia llamamientos mesiánicos a las FF.AA., criticaba su participación en el Gobierno, como un baldón dentro de una trayectoria inmaculada.

Cuando se demostró que la influencia de la jerarquía máxima militar era determinante en la línea de defensa del Gobierno asumida hasta entonces, comenzó una campaña de desprestigio in crescendo contra ella, la que se agudizó después de marzo y sobre todo después del 29 de junio. Ese incidente callejero llevó a posteriores incidentes planificados, como concentraciones frente al Ministerio de Defensa y frente a la casa particular del Comandante en Jefe.

Este deterioro de la legitimidad jerárquica, que estaba provocando una crisis de las líneas de mando y la insubordinación abierta de algunos generales, llevaron a Prats a presentar su renuncia el 23 de agosto.

Después del fracaso de las conversaciones postreras con la DC, y poco antes de esta dimisión, Allende vuelve a recurrir a las FF.AA. con el objeto de paralizar la nueva ofensiva huelguística de los gremios. Sin embargo, ese Gabinete de emergencia dura corto tiempo. El primer traspies es la renuncia a su cargo ministerial del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, el General Ruiz. Allende, decidido a forzar la lealtad constitucional debida, lo obliga a pasar a retiro. Evidentemente que los motivos aducidos por el jefe militar no son el factor decisivo sino sólo un detonante. El conflicto aparente se suscita a causa de las limitaciones políticas que el General Ruiz habría encontrado en el desempeño de su labor. Sin embargo, es evidente que esa renuncia tenía otras implicancias, así como es evidente que la dimisión de Prats fue el reconocimiento explícito de cambios decisivos de la correlación de fuerzas en el Alto Mando. La UP no supo o no quiso interpretar en su justa significación ese mensaje.

El otro campo en que se muestra el deterioro de la situación militar de la UP es en la aplicación de la Ley de control de armas. En realidad esa disposición había sido aprobada en julio de 1972, por iniciativa de un senador demócratacristiano, pero sólo había empezado a ser aplicado en gran escala después de las elecciones de marzo de 1973. Aún mientras el General Prats era Comandante en Jefe, esa disposición fue utilizada de preferencia para pesquisar armas en manos de la

Izquierda sin afectar a las organizaciones de derecha. Esto revela las presiones internas a que estaba sometido.

En todo caso los incidentes provocados por los allanamientos militares de fábricas o de fundos aumentaban las protestas de los partidarios de izquierda, y los llamamientos a los soldados para que desoñocieran lo que los primeros consideraban órdenes sediciosas. Incluso, el allanamiento producido en Punta Arenas, el 4 de agosto en el cual encuentran la muerte dos obreros, da lugar a una áspera polémica entre Prats y el PS y el MIR, a la cual se suma también la Comandancia de la FACH. El día anterior se había producido otro allanamiento en el Cordón Cerrillos, respecto al cual también se levantaron quejas. Alguna prensa de izquierda empieza a preguntarse, si detrás de las acciones incriminadas no existiría la intención de preparar psicológicamente un posible enfrentamiento.

Durante esta misma semana, la Armada denuncia un plan de infiltración dirigido por el PS y el MAPU anunciando la detención de numeroso personal de tropa. El MIR y alguna prensa de izquierda denuncian que los suboficiales y marineros acusados se habían negado a cumplir órdenes de allanamiento y habrían advertido que no participarían en un golpe de estado.

A mediados del mes de agosto, en que se precipita el llamado a retiro del Comandante en Jefe de la FACH, las acusaciones de la Armada sobre infiltración política y las manifestaciones contra Prats, ya existe prácticamente en algunos terrenos una dualidad de poder. Tanto en relación con los allanamientos como en relación con el problema de los marineros procesados, el Gobierno se encuentra incapacitado de acción autónoma. Para el Gobierno la situación se agrava a partir del 23 de agosto, cuando las grandes líneas futuras parecen diseñarse con nitidez.

Esta situación de descomposición acelerada está relacionada también con un hecho anterior, el nuevo fracaso de las conversaciones con la DC. Esas conversaciones, que fueron promovidas por el Presidente y por el Cardenal en un esfuerzo por conseguir alguna

fórmula de arreglo, se realizan en medio de una fuerte ofensiva política de la Derecha que, entre otras cosas, acusa al Gobierno de fraude electoral en las elecciones de marzo con el fin de deslegitimar otro pilar básico de la institucionalidad política como eran las elecciones. También se realizan en un ambiente de violencia acelerada que es desatado por los sectores más extremos de la Oposición: sólo en el mes de julio se producen alrededor de 140 atentados de diferentes tipos, incluido el asesinato de un Edecán del Presidente. Para acompañar este clima se desencadena una nueva huelga de transportistas, que es seguida por gremios y Colegios Profesionales, con un carácter explícito de definitivo y con llamamiento a las FF.AA. y campañas públicas para obtener la renuncia del Presidente. El clima político llegaba a su punto de tensión más alto.

A su vez, estas conversaciones desencadenan fuertes polémicas dentro de la Izquierda y entre los dirigentes obreros de base de los Cordones y Comandos Comunales, de creciente expansión y movilización en esta fase. Las críticas más duras son las del MIR. Para éste las conversaciones son parte de la táctica del sector freista de la DC, la cual consiste en ir progresivamente cercando al Gobierno, sembrando el desconcierto y la desconfianza en su interior, pero sin un interés real por llegar a acuerdos. El Secretario General del MIR llama a esto la táctica del emplazamiento, cuya característica sería una radicalización progresiva de las exigencias.

En verdad esta descripción correspondía esta vez al desarrollo de las conversaciones. Las bases de acuerdo planteadas por la DC entonces son mucho más draconianas que las de hacia un año. Exigía un reconocimiento público del Gobierno de haber actuado al margen de la legalidad y la formación de un Gabinete de Garantías, sin representantes de los partidos marxistas, y donde los cargos fundamentales estuvieran en manos de uniformados.

El fracaso de estas conversaciones destinadas a buscar un consenso mínimo es una demostración de su carácter ficticio, porque los límites de flexibilidad de cada bloque eran demasiado estrechos para hacer posible una negociación. La DC tenía que hacer imposible la nego-

ciación o, lo que es lo mismo, a través de ella tratar de cambiar radicalmente el carácter del Gobierno, para no ser arrasada por el PN en la disputa por la dirección del bloque y perder toda influencia en él. La Izquierda no podía aceptar concesiones que alteraran radicalmente el carácter del Gobierno, porque se quebraba definitivamente tanto su bloque político como su base social de apoyo.

Después del fracaso de estas conversaciones, como se ha dicho, Allende intenta recomponer la situación mediante el Gabinete con participación de los tres Comandantes en Jefe. Sin embargo, esa fórmula en vez de normalizar la situación, como en octubre de 1972, desencadena un deterioro creciente que culmina con la dimisión del General Prats. En octubre los militares podían concebir esperanzas respecto a la trascendencia política de su papel, mientras que en agosto de 1973 saben que el Gobierno no está dispuesto a cambiar el carácter de su acción política y que los llama para que enfrenten la sedición desencadenada.

Entretanto, se había demostrado que la crisis política no tenía solución y también se había desarrollado en el interior de las FF.AA. la crítica a las posiciones constitucionalistas. Quizás sea el discurso del General Canales, llamado a retiro en septiembre de 1972, el que mejor expresa el contraproyecto militar en ciernes: gobierno autoritario, fuerte e impersonal, que debe ser realizado por aquella fuerza que constituye la reserva moral de la nación. El constitucionalismo era visto ahora como la aplicación abstracta de una doctrina a una situación que no podía definirse en esos términos, porque el Gobierno de Allende, para esta concepción, había dejado de ser legal hacía mucho tiempo.

De ese modo, el retorno de los militares en vez de apaciguar los conflictos políticos los agudiza, exacerbando las contradicciones dentro de las FF.AA. El 22 de agosto, el Parlamento pronuncia la ilegalidad del Gobierno: era un rito necesario, pero las decisiones estaban tomadas fuera del recinto parlamentario.

En ese campo de fuerzas, donde el elemento fundamental son los

militares, la agitación de los gremios de transportistas y comerciantes que rebrota durante ese período no tiene una importancia decisiva. Es la simple música de fondo. Pero está diseñada para mantener la visión y el clima de un país en caos en espera de sus salvadores.

La sorprendente parálisis política de la UP y del Gobierno durante esta última fase crucial revela tanto la magnitud de las contradicciones existentes en su interior, como el grado de su dependencia respecto de los militares, a los que algunos, a falta de otra esperanza, todavía suponían leales.

Hasta el final primaron la visión de la imposibilidad de cualquier compromiso y las esperanzas de enfrentar con éxito una guerra civil no buscada ni deseada sin tener para ello Ejército propio y presenciando día tras día la disolución de la influencia en las FF.AA. En realidad, el retiro de Prats había significado la desaparición del último obstáculo para conseguir la unidad interna en torno a una alternativa legal. Cuando este último acto del clímax se consuma, ya todo estaba escrito. El Gobierno, abandonado a su sola legitimidad constitucional y a un significativo pero impotente apoyo popular, no podía enfrentar una guerra que sus promotores sabían unilateral.

CAPITULO TERCERO
LOS BLOQUES POLITICOS Y
LOS PROCESOS GLOBALES

I. LA DINAMICA DE LOS BLOQUES POLITICOS

Un análisis profundo del periodo requeriría detenerse en los diversos actores del proceso social. Sin embargo, para los efectos de este trabajo, circunscrito al desarrollo del conflicto político, nos centraremos exclusivamente en los actores políticos, considerados por bloques (16).

1 . Empecemos por la DC, cuyo caso presenta una dualidad profunda entre la significación aparential y la significación real de su acción. Tanto la posición en el campo de fuerzas, como la relevancia interpretativa que le hemos dado al ciclo de polarización política, le otorgan a la DC una gran importancia en la evolución del proceso, sin embargo, la DC es, de todas las fuerzas, aquélla que menos se puede definir en terminos de acción histórica porque está atrapada por las contradicciones, racionalidades y conflictos que los polos desarrollan. El significado profundo de su lucha del período es la conservación de su identidad, interés principal de su clase política dirigente cualesquiera fueran sus diferencias contingentes, a través del mecanismo de la doble oposición, dentro de un campo lleno de presiones centrífugas. No puede, en parte por ella misma y en parte por la UP, llegar a un

(16) Los riesgos de este tipo de análisis son evidentes, en cuanto no permiten recuperar el comportamiento de las clases en forma autónoma de sus representantes políticos. La consideración por bloques permite, sin embargo, al menos apuntar a los problemas de representación que enfrentan los agentes propiamente políticos o partidarios. En el nivel de la escena política en que nos movemos, este enfoque, aunque insuficiente, es un primer paso ineludible. Recuérdense el matiz necesario del concepto racionalidad de los actores (ver nota 2).

compromiso con la UP y se resiste a la alianza con la Derecha durante un tiempo porque quiere presentar sus intereses políticos de largo plazo. Cede a las presiones centrifugas que tratan de arrancarla de la posición de centro fluctuante cuando ya era demasiado tarde para imponer un diseño que presentara su condición de actor político significativo.

Para entender la problemática de este actor político hay que remontarse a su pasado. Después de haber sido desde su fundación el partido de una elite católica preocupada por la cuestión social y de los cambios, que pretendía separar a la masa católica de la opción política conservadora, se empieza a convertir desde 1958 en un partido que, sin perder esa definición ideológica, pretendía atravesar todas las clases y grupos de la sociedad, tanto desde el punto de vista de la militancia como de las esferas de influencia social y electoral. De hecho, consigue este carácter nacional sólo de modo parcial, sin dejar nunca de expresar, ideológica y socialmente, principalmente a las capas medias, de lo que es una buena ilustración la naturaleza de las reivindicaciones contenidas en el Estatuto de Garantías en octubre de 1970. Esta atracción de la DC en los sectores medios fundaba: a) en las ventajas que se le asignaban al centro en materia de alianzas y de posibilidades de representar intereses; b) en la importancia del catolicismo, como núcleo ideológico irradiante que sirve para orientar las referencias de los sujetos en el terreno político como en otros y, también, para articular las relaciones con la Iglesia Católica y aprovechar su influencia social; c) en el alternativismo ideológico, cuyo carácter abstracto crea un amplio espacio para la presencia decisiva de una élite y un programa tecnocrático cuya expresión le permite a la DC recoger la inquietud generalizada por cambios, pero ofreciendo una solución gradualista.

Esos mismos elementos, pueden explicar -por lo menos en parte- no sólo la atracción sobre las capas medias, sino también la atracción sobre cierto tipo de sectores obreros católicos y anticomunistas y también sobre sectores de burguesía modernizante.

Simultáneamente esa combinación de reclutamiento en abanico e

ideología alternativista -tan típica del pensamiento socialcristiano- actúa para impedir que la DC realice con fluidez compromisos globales. Esto se observa nítidamente durante su período de Gobierno, cuando tiene la posibilidad de ejecutar lo que había proclamado. Allí realiza una política efectiva de modernización capitalista y de reformas sociales que le permiten organizar desde arriba a algunos sectores hasta entonces marginados del sistema nacional de negociación, pero termina su período en un absoluto aislamiento político.

Una de las claves de ese fracaso político reside en la asimetría entre un acusado sentido de misión histórica y de alternativa de poder de largo plazo y la absoluta ausencia de una estrategia razonable para realizar esa vocación o para permitirle quebrar el esquema de tres fuerzas, donde necesariamente tenía que caer en una dinámica de negociación.

La DC eludía ese problema, pensando que lo resolvería mediante la absorción y el renudeamiento de las bases sociales de las otras fuerzas políticas, desconociendo así la real institucionalización del sistema partidario, donde se observaba una estabilidad del voto de la Derecha y de la Izquierda, por cierto que con caídas coyunturales.

Al principio del gobierno de Allende, la DC, robustecida en su clase política y tecnocrática durante su gobierno y con influencia cristalizada en una gama de instituciones sociales, vuelve a caer en la ilusión que fue su tema durante la fase entre septiembre y noviembre de 1970: no hay otra alternativa democrática de cambios. Ella cree entonces, como lo creyó cuando en 1965 la Derecha fue barrida electoralmente, en un desplazamiento permanente de la base social y electoral más conservadora. Quizás no era irracional tal cálculo, por que la derrota de Alessandri frente a Allende y el asesinato del general Schneider, tenían sumida a la dirección política de la Derecha en la confusión y porque los representantes corporativos del capitalino preconizaban públicamente una estrategia moderada y de acomodamiento. Sin embargo, los resultados electorales de abril de 1971, demuestran que el Partido Nacional no sufría una crisis de representación política sino una crisis momentánea de expresión política.

Las fluctuaciones de la DC durante todo el período se explican tanto por el interés de su clase política en mantener la identidad organizacional, como por aquello que era su virtud como organización de masas, reclutamiento diversificado y alternativismo ideológico. En el marco de una desinstitucionalización de la lucha política, a la que la DC contribuye de hecho, este centrismo social e ideológico político no le permite jugar un rol de sujeto y en la práctica, como hoja al viento es llevada de un lado para otro por la contingencia, víctima de presiones contradictorias que nunca resuelve en los momentos adecuados.

Al principio del gobierno de Allende no se juega a fondo en una línea de compromiso y de alianza con la UP porque la obsesión de la identidad y el peso interno de sectores ligados al capitalismo, la enredan en una opción de corto plazo; más adelante, su alternativismo ideológico, la presencia popular, la fuerza de consideraciones doctrinarias en las decisiones de los dirigentes y las divisiones internas le impiden jugar plenamente una estrategia de dirección de la oposición, asumiendo para ello plenamente el carácter de lucha frontal que iba adquiriendo la política. Acepta ese rol, cuando ya no había solución institucional viable y cuando su papel carecía, por lo tanto, de significación.

Su carácter organizacional, muy eficiente en las situaciones de enfrentamiento político atenuado, se transforma en las situaciones de agudización del conflicto en un obstáculo y en un factor de esterilidad política.

2. Al contrario, la Derecha se recupera parcialmente durante este período de la debilidad política constante que había tenido desde 1938. Esa debilidad significó su desplazamiento en el control del Gobierno por el Centro semi-reformista o reformista desde 1938 hasta 1958 y desde 1964 hasta 1970.

Hemos señalado que la estabilidad del centrismo como fuerza gobernante reposaba sobre ciertas condiciones que lo hacían orgánico: a) fue capaz de responder a una crisis del desarrollo hacia afuera,

impulsando la industrialización y la transformación del Estado en un agente económico activo; b) desarrolló una política de democratización económica, social y política que le aseguró la lealtad de los sectores medios; c) tuvo, hasta el período de Frei, una gran fluidez y flexibilidad en materia de compromisos y de alianzas, permitiendo una gran agregación de intereses, al mismo tiempo que mantuvo ciertas importantes exclusiones sociales permanentes como la de los sectores campesinos y marginales urbanos y fue capaz de jugar con exclusiones políticas temporales, como la del Partido Comunista entre 1947 y 1957; d) permitió -porque convenía a sus propios intereses políticos- una política de acomodación, por parte de los grupos capitalistas.

Dentro de ese campo de alternativas restringidas, la Derecha tuvo que consagrarse a partir de 1938 a una política defensiva, diferenciándose del centrismo, porque éste expresaba la dirección de otros grupos, pero manejando una política pendular de acercamiento distancia. No declara la guerra frontal a los partidos gobernantes, por lo menos hasta 1964, y tampoco busca fusionarse con ellos, manteniendo para sí la representación política de las clases dominantes.

En este cuadro, lo interesante es que esas clases no abandonan a sus representantes tradicionales cuando el trasvasije hacia el centro parecía una estrategia racional puesto que el centrismo era predominante y tendía a una política pendular, de alianzas de gobierno con la Izquierda, que obligaban a la Derecha a multiplicar las tácticas de acomodación y ajuste.

Este fenómeno tiene estrecha relación con la naturaleza de las clases que hemos denominado genéricamente predominantes, en el interior de las cuales era muy significativo hasta 1964 el peso de la fracción latifundaria. Esa significación estaba relacionada, entre otros, con dos factores. En primer lugar con las vinculaciones entre capital financiero, comercial, industrial y propiedad latifundaria que otorgan a estas clases su carácter indiferenciado. En segundo lugar con la importancia social y política del campo. Por un lado, la propiedad de la tierra proporcionaba status, acceso a la cerrada

sociedad de la época, con sus ceremoniales que trataban de imitar - con modalidad provinciana- los fastos aristocráticos. Pero el eje de esa importancia residía en que hasta la década del 60 la posesión de la tierra le otorgaba a los grandes propietarios acceso al poder político. Las relaciones sociales agrarias le permitían al hacendado el manejo de una base social propia y, a través del sistema de clientelas rurales, el acceso a los votos que manejaban los caciques agrarios.

El latifundio era una especie de espacio común de todos los sectores capitalistas, de modo que el arcaísmo del sistema latifundiarío imprimía su sello en la conducta de esas clases, haciéndolas defensoras de un tipo de relaciones sociales con fuertes rasgos pre-capitalistas.

A su vez el centrismo, para quien era necesaria la política de ajuste y acomodación de la Derecha porque ampliaba su margen de maniobra política, se atiene siempre a los límites marcados por la estructuración de las clases predominantes, como lo prueba la exclusión político social del campesinado hasta el período que se inicia en 1964.

Esta política entra en crisis entre 1964 y 1970 porque el reformismo centrista de la DC es muy diferente del tradicional. Se niega jugar una política de negociación que permitiera por parte de la Derecha una estrategia de acomodación y ajuste; trata de quebrar el bloque político latifundio burguesía, dándole a la reforma agraria y a la sindicalización campesina el carácter de factores de expansión capitalista; pretende - con eso y con un conjunto de medidas de modernización económica- atraer a parte importante de las bases sociales de la Derecha.

Las experiencias del período 64-70 producen la resurrección política de la Derecha, a través de: a) la fusión en uno solo, el Partido Nacional, de los dos viejos partidos históricos, el Conservador y el Liberal; b) algunas sustituciones y recambios dentro de su élite política y c) la influencia ideológica dentro de la nueva organización del nacionalismo, esto es de aquellos grupos que criticaban a la Derecha histórica en términos de la oposición entre política nacional y política oligárquica.

Esa re-estructuración, a través de la cual se doblegan las tendencias a mimetizarse con el Centro que habían tenido vigencia en los debates internos de 1965, revelaba el deseo de superar el esquema clasista que había tenido la acción de la Derecha. Ya desde 1967 intenta recuperar la capacidad de dirección de capas medias, haciéndole portadora de un programa que buscaba reorientar en otra dirección las expectativas de cambio: recuperación de la decadencia ocasionada por el estatismo exagerado, por el populismo y por la falta de autoridad. Ello cristaliza en el programa de la Nueva República, de Alessandri, en 1970.

En el período 70-73 la Derecha sólo tiene un corto período de incertidumbre durante el cual los gremios patronales jugando entonces una política de acomodación- demuestran una incipiente capacidad de dirección y de movilización. Pero aun en ese período de confusión, empieza a buscar las condiciones de la alianza con la DC, a través de tentativas que, como el Frente de Ideas, caen en terreno todavía estéril. En las elecciones complementarias por un Senador en el extremo austral, junto a las municipales y en las de Valparaíso en 1971, demuestra que está dispuesta a hacer sacrificios políticos de corto plazo, cediéndole el campo a la DC, en función de los objetivos generales. La Derecha no antepone nunca durante este período sus intereses políticos a sus intereses de clase. Para atraer a la DC está dispuesta a cualquier concesión, así como más adelante está dispuesta a renunciar a la participación política, conformándose con la dominación militar y autodisvolviéndose como organización política.

Hasta diciembre de 1971 la Derecha, sin contactos castrenses orgánicos y traumatizada por el fracaso de los intentos golpistas de octubre de 1970, realiza una estrategia de anulación del Gobierno a través de una ofensiva política continua, pero a partir de ese momento hace explícita una estrategia cuya única salida era el derrocamiento de Allende.

A través de los gremios patronales de grandes industrias y comerciantes y a través de la coordinación de la Confederación de la Producción y el Comercio, dirigida por personeros ligados al gran

capitalismo, la Derecha logra dirigir políticamente a las organizaciones gremiales patronales o profesionales de capas medias. De nuevo allí la Derecha tiene una gran ventaja de operación política frente a la DC, puesto que en la decisión de ésta siempre priman los intereses políticos antes que los intereses de clase. A la primera no le importa tanto como a la DC la competencia por la dirección de la ofensiva, sino que busca desencadenada por cualquier medio, importándole quien capitaliza sólo en términos del objetivo, el derrocamiento de Allende. Para ella no tienen importancia los intereses organizacionales porque está volcada íntegramente hacia la defensa del capitalismo.

La temática de la lucha política parece organizarse en torno a las ideas de la DC, como lucha por los valores democráticos amenazados pero, como hemos visto, desde octubre ella sólo se estructura aparentemente en torno a esas ideas, las cuales son sólo consignas ideológicas que recubren un proceso de fascistización. La Derecha recoge instrumentalmente las consignas de libertad y democracia, mientras apuesta todo a una intervención militar. Esconde, por lo tanto, sus verdaderas concepciones del orden político y sus intereses contra revolucionarios de fundar un orden autoritario para asegurar, mediante ese artificio, la dirección política efectiva. Así conduce inexorablemente la situación a una salida extra institucional. La Derecha, entonces, se mueve en una lógica de clases.

3. La Izquierda también se mueve en una lógica de clases en la medida que estructura su política en función del socialismo, sea porque lo ve próximo, sea porque piensa el período como comienzo de un tránsito ininterrumpido, sea porque se impone la tarea de preparar las condiciones. Pero, en todo caso, en ella se mantiene el interés por preservar el orden político formal.

Esas convicciones respecto a la proximidad del socialismo o respecto a la determinación por el fin último de cada una de las etapas intermedias, eran el resultado de una evolución reciente.

En 1912 se funda el Partido Obrero Socialista, que, a diferencia del Partido Demócrata -en donde habían militado sus principales

dirigien-, era una organización que expresaba exclusivamente intereses obreros y que tenía una ideología revolucionaria, mezcla de elementos anarquistas y marxistas, cuyo sello era un fuerte moralismo. Ya en 1922 se funda el Partido Comunista, el cual sufre después de la muerte de Recabarren un proceso de standardización ideológica.

A partir de entonces las evoluciones ideológicas del Partido Comunista están determinadas en gran parte por la línea de la II Internacional y, más tarde, por la línea del PCUS. En 1932, cuando tiene lugar en Chile el corto experimento de la República Socialista, el PC todavía sostenía la tesis de la ofensiva general contra el capitalismo para aprovechar las condiciones creadas por la crisis mundial y rechazaba las alianzas con sectores pequeño-burgueses, fiel a la línea aprobada por la III Internacional. Más adelante se plegó a las tesis del Frente Popular aprobadas en el 7º Congreso de la Internacional celebrado en 1935. Después de la guerra asumió las críticas soviéticas al broderismo y fustigó las políticas conciliadoras. Cuando a causa de la guerra fría y la bipolaridad, los soviéticos desarrollaron la teoría del papel predominante de la contradicción imperialista, la cual subordinaba las contradicciones con las burguesías nacionales, el PC definió la línea del Frente Democrático de Liberación. Cuando se aprobó la teoría del tránsito pacífico, el PC hizo suyas tales tesis.

Estos isomorfismos revelan, por una parte, una gran debilidad ideológica. Esta, a su vez, puede ser explicada por diferentes factores, entre los que pueden señalarse: a) la composición del partido y sus direcciones en donde la mayoría de los intelectuales del aparato son formados en el exterior a partir de una base teórica autodidacta o recibida en las escuelas partidarias, las que reproducen el circuito de dependencia; b) la ausencia en Chile de un fuerte polo ideológico de corte social democrata que obligara a la polémica e innovación ideológicas. Por otra parte tales isomorfismos revelan también que la perspectiva internacionalista constituía, por lo menos hasta la disolución de la Tercera Internacional en el 45, un elemento central de la cultura política marxista. Esta rigidez teórica iba paradójicamente asociada a una gran flexibilidad y creatividad práctica y unida a una alta sensibilidad al movimiento de masas.

En todo caso, las tesis del PC después de 1936 no postulan el socialismo inmediato o próximo. Los comunistas planteaban un frente político amplio, que agrupara al mayor número de fuerzas posible y su concepción estratégica era rigurosamente gradual.

Las tesis sobre el socialismo y la preocupación por vincular las etapas democráticas de la revolución con el socialismo, provienen principalmente del PS. En su evolución interna a este respecto juega un papel importante la Revolución cubana y las teorías desarrolladas a partir de ella.

A diferencia de países como Italia, Francia o Alemania, donde la dualidad de representación de la clase obrera contempla una ala social demócrata encarnada por los PS, en el caso chileno llama la atención la construcción de la unidad de acción entre las dos fuerzas políticas de representación obrera, PC y PS. Esta unidad dura -pese a todas las polémicas, roces, discrepancias públicas y disparidad de tesis- desde 1957 y ella se produce aunque las diferencias entre estos partidos sean de composición, organización y línea política. El PS, más que un partido obrero era un partido popular, que vinculaba clase obrera con sectores profesionales y de pequeña burguesía. Desde el principio, la competencia por una masa electoral común, la influencia trotskista en el interior del PS que se ejerce a través de algunos intelectuales que fueron muy significativos en la primera época y el hecho de representar a bases sociales diferentes, polarizan la relación entre ambas fuerzas. El PS busca desarrollar una nueva concepción respecto a la revolución chilena y latinoamericana y rechaza el stalinismo lo que acentúa su distancia frente al PC. Pero al no construir una visión unitaria y sistemática, impedido por la atomización interna, por la pluralidad de tendencias que lo constituye y por una racionalidad más expresiva que instrumental, pierde la especificidad inicial y su discurso es sólo una variación un poco más izquierdista.

Desde el 58, pero de un modo más intenso desde el 64, el PS define la línea del Frente de Trabajadores como alternativa a la línea de los Frentes de Liberación. Las nuevas experiencias revolucionarias, los sucesivos fracasos electorales, las crisis internas que había provocado

en el PS su propia experiencia reformista de 1952 cuando apoyó a Ibáñez, la crítica a las posiciones internacionales del PC y la búsqueda de una línea propia en esta materia, crearon condiciones para que las tesis sobre el carácter armado y socialista de la revolución tuvieran decisiva influencia interna. Lo interesante es que la constitución de un bloque entre el PC y el PS coincide en el tiempo con todo este proceso de diversificación de líneas. De hecho fue por la presión del PS, y en menor medida de los grupos escindido del reformismo a fines de los 60, que el Programa de la UP asumió un contenido de preparación de las condiciones del socialismo. La radicalización del Programa compensaba así la incorporación del Partido Radical a la alianza a la que el PS se había opuesto tenazmente.

Inmediatamente después del triunfo de Allende, es reemplazado el Secretario General del Partido vinculado a las tendencias más moderadas, por un representante de las posiciones opuestas. Ese cambio no tuvo nada de accidental: expresaba la voluntad de jugar frente al Presidente Allende un papel político crítico y activo, y de oponer a su pragmatismo las exigencias que imponía la teoría revolucionaria.

No se ha evaluado todavía lo suficiente el impacto de la Revolución cubana, como elemento ideológico de ruptura en los medios de Izquierda. Creemos que ese impacto fue fuerte en Chile, donde su función de quiebre fue hacer descubrir las insuficiencias de la acción legal, justamente en un momento propicio después de la derrota de 1964. En un país donde la Izquierda había ensayado desde 1938 muchas formas de alianza y de compromiso político, la Revolución cubana aparece como la demostración de las posibilidades de la lucha armada y de la necesidad de una rápida transformación de la revolución democrática en socialista.

Las evoluciones sumariamente descritas están en relación con las modificaciones experimentadas por los análisis intelectuales entre 1964 y 1970. A través de la extrapolación al terreno político de interpretaciones que mostraban los límites del desarrollo capitalista en países con una industrialización relativamente tardía y además

delimitada por la dinámica del sistema capitalista mundial, por lo tanto a través de un desplazamiento sin mediaciones, se expande como sentido común político la idea que la resolución de la crisis de la sociedad chilena requería una rápida transformación socialista. Estos análisis, revestidos de legitimidad científica, carecían de una perspectiva en la cual los datos estructurales sobre los límites del desarrollo capitalista se vincularan con un análisis de la dinámica de las clases sociales, del universo ideológico cultural y de la naturaleza del Estado, sumariamente descrito como un Estado burgués, y de los actores políticos sociales. La significación social de estos análisis fue producida por la compatibilidad con un clima ideológico, respecto al cual operaban como sistematizadores más que como focos críticos.

Vinculado a lo anterior está el rol que juegan en la última evolución ideológica de la Izquierda los grupos escindidos del reformismo demócrata cristiano a finales de la década del 60 y comienzos de los 70. Por un lado, su aporte inicial se expresa en la discusión del Programa de la UP. Pero, por otro lado, estos grupos ceden a la tentación de buscar su legitimidad en la alternativa a los grandes partidos populares. Su potencial innovador es reducido, entonces, a un discurso que expresa las contradicciones de una élite que busca un hueco político en un proceso de movilización de masas. Para hacerlo, sin embargo, debe buscar el referente de su discurso en la práctica de los otros actores políticos, con lo que dicho discurso adquiere un carácter ecléctico en que teoría y práctica política nunca aparecen integrados y en que los problemas ideológico estratégicos no pueden ser superados.

Todo el desarrollo anterior nos lleva al problema que, en otra parte, hemos denominado tentativamente el vacío teórico-ideológico de la Izquierda (17). La evolución de la crisis del régimen político, de

(17) La idea de un vacío teórico-ideológico ha sido desarrollada por M.A. Garretón en «Dos hipótesis sobre el proceso político chileno 1970-1973» (Revista Mexicana de Sociología 4/1977) y por T. Moulian en «Vacío teórico ideológico y proyecto nacional popular». Dentro de esta misma problemática, el concepto fetichización de la teoría ha sido usado por C. Cox en «Teoría e

la cual hemos mostrado los elementos de polarización, de desinstitucionalización y de degradación de la legitimidad, es, como hemos dicho, el resultado de la lucha política y de clases que se constituye en torno a la realización del programa de la UP. Es evidente que en eso tuvo un papel importante el modo como la UP concibió, semantizó y realizó ese proyecto.

Plantear la hipótesis de un vacío teórico-ideológico implica señalar la distancia entre el carácter objetivo posible y las formas históricas que asume el proceso social, sea como práctica o como discurso y apuntar al requerimiento de una práctica y un discurso que fueran compatibles con ese carácter objetivo posible.

Si se analizan las polémicas internas de la UP durante el período veremos que ellas reflejan en algunos puntos centrales, una problemática del modelo revolucionario, lo que hace que el modo de pensar y los contenidos del pensamiento estén a menudo desplazados directamente desde los textos clásicos o desde otras referencias históricas a la realidad concreta. No se trata sólo del estilo, aunque también en ese terreno llama la atención la presencia de una terminología militar que en el caso de Lenin o Mao correspondía a las exigencias de la situación política, sino de la transposición mecánica de la concepción (papel de la violencia, papel de la fuerza o de la ofensiva, necesidad de ruptura del Estado burgués) y también de algunos diseños de acción, como el papel que se le asigna al poder popular de base en la generación de condiciones revolucionarias. Se trata de un fenómeno de fetichización de la teoría. Es evidente que los elementos derivados de algunas concepciones clásicas de la revolución, estaban mezclados y combinados con elementos que surgían de la tradición política chilena o de la experiencia práctica de sus dirigentes. Esa combinación aleatoria no constituía una teoría, lo que hace que el problema de las alianzas y de los compromisos o del carácter del Gobierno haya sido analizado en una perspectiva muy insuficiente.

Ideología de la Unidad Popular». Estos dos trabajos figuran en el Informe de Investigación «Ideología y Procesos Sociales en la Sociedad chilena 1970-1973» citado al inicio de este libro.

El análisis de estos fenómenos, llámense vacío teórico-ideológico, fetichización de la teoría, o simplemente insuficiencias, no puede reducirse al análisis de las contradicciones internas dentro de la UP. Se trata de problemas de orden diferente. Sin embargo, es evidente que existe relación entre ellos.

Estas contradicciones o diferencias de línea, como hemos señalado, tenían una base histórica, expresada antes de la constitución de la UP en la oposición de la línea del Frente de Trabajadores del PS y de la línea de apertura al centro radical del PC.

Cuando a partir de la llamada Asamblea del Pueblo de Concepción a mediados de 1972, empezó a configurarse de un modo orgánico la oposición de líneas, la acción práctica de la UP tomó cada vez más carácter errático, en el cual se manifestaba la precariedad de los arreglos políticos internos. La crisis de octubre 1972 operó como factor de homogenización, dando la impresión que las exigencias del momento y las urgencias de la acción práctica hubiesen apagado el creciente ardor de las disputas de línea; sin embargo, pasado el momento de la tensión, el debate renació a propósito de la participación de los militares en el Gobierno para no decaer. Lo que parece interesante es la simetría entre el ritmo en que esas contradicciones se manifiestan y el ritmo de la crisis en desarrollo. Es la percepción del deterioro de las condiciones políticas generales la que hace rebrotar los conflictos internos, creando el espacio político para opciones alternativas de dirección.

Sin embargo, la aceptación por todos los grupos de la necesidad de mantener la unidad del frente y el carácter pragmático de la conducción política de Allende, hace que la pauta de arreglos deriven en un cuadro de atomización y dispersión ideológica. La característica de ese tipo de cuadros es o que no se constituyen alternativas ni siquiera como discursos coherentes, que respondan a los problemas principales necesarios de abordar, o que, existiendo un bloque homogéneo con un discurso sistemático, este último no logra constituirse como dirección política. En este caso, parece haber predominado

largamente la primera situación, aunque bastante avanzado el proceso haya cristalizado la otra.

En síntesis, este rápido análisis de la izquierda política revela un doble fenómeno, cuyos componentes están entrelazados aunque no pueden reducirse el uno al otro. Por un lado, la ausencia de una teoría adecuada a las características del proceso, lo que explica el recurso al empirismo o a lo que se cree son las teorías y leyes universales de la revolución. Por otro lado, la existencia de un proceso de polarización ideológica interna durante el período del Gobierno UP, cuyo resultado es la atomización y dispersión políticas.

Es en este cuadro que puede formularse una breve apreciación sobre la conducción de Allende. Ella presenta un doble aspecto contradictorio, de coherencia y claridad en lo que se refiere a la concepción general del proyecto político y su viabilidad, por un lado, y de palmatismo para impedir las rupturas del bloque político, por otro. Su acción aparece desgarrada entre estos planos. Históricamente esto tiene sus raíces en el rol que juega en la expresión pública de la alianza comunista socialista. Su racionalidad de acción le acerca al PC, pero tiene legitimidad histórica dentro del PS, aún cuando esto último no se cumpla siempre en los niveles más altos de dirección. Pero ello mismo le impide ejercer acciones decisivas en el dominio interno de ambas organizaciones. Su conducción tiene entonces más el carácter de resultante de un campo de fuerzas que de eje que asegure un liderazgo efectivo.

Es evidente que un análisis de las expresiones y la conducción política de la Izquierda es necesariamente limitado cuando no se hacen las referencias a las dinámicas propias de la base social y el movimiento popular con que ellas están relacionadas. Dos fenómenos relativamente contradictorios llaman aquí la atención. Por un lado, los altos grados de conciencia política de esta base social, que vive el período, más allá de los beneficios objetivos recibidos, como un proceso de liberación. Ni las dificultades de funcionamiento de la sociedad, ni los problemas señalados de su expresión político partidaria, minan su adhesión y movilización en torno al Gobierno. Por

otro lado, las dificultades de los canales partidarios de dar cuenta de esta experiencia vivida. Tales dificultades se expresan a su vez en dos planos. El primero se refiere a la relativa incapacidad teórica y práctica de proyectar el carácter universalista y de alcance nacional de la experiencia de liberación vivida por estos grandes núcleos populares. El segundo, a la dificultad de entender la dinámicas autónomas del movimiento popular, que implicaban cambios necesarios en una conducción política demasiado ligada a los intereses inmediatos de los sectores populares más tradicionalmente organizados. La radicalización masiva fue interpretada -por uno y otros- mucho más en términos de modelos políticos correctos o desviados, que en cuanto expresión de intereses y aspiraciones concretos que no eran canalizados por los mecanismos institucionales y políticos.

4. Cualquier análisis de actores políticos del período no puede dejar de detenerse, aunque sólo sea esquemáticamente, en las FF.AA. A este respecto cabe señalar que nuestras hipótesis reflejarán la ausencia generalizada de un conocimiento histórico y empírico suficiente.

Entre los factores que hacían posible el constitucionalismo Ideológico y el sometimiento al poder civil de las FF.AA., pueden señalarse: a) el fracaso de los militares como alternativa política cada vez que intentaron serlo, entre 1927 y 1931, o en 1932; b) la capacidad del sistema político para resolver los conflictos y enfrentamientos políticos sin necesidad de recurrir a soluciones extra institucionales; c) la unidad ideológica de la elite política, desde conservadores a comunistas, en la necesidad de preservar al sistema de la intervención militar; d) el enclaustramiento de las FF.AA. en un mundo militar, lo que hacía difícil la constitución de alternativas políticas o la difusión de un consenso político; e) por parte de la Derecha, el recuerdo del carácter progresista o izquierdizante de las intervenciones militares más significativas.

Sin embargo, existían factores que debilitaban la subordinación de las FF.AA. al poder civil, algunos de los cuales se manifestaron en 1969, en una rebelión militar de carácter parcial o localizado, cuyo

objetivos explícitos eran de naturaleza gremial. Los que nos parecen más relevantes son los siguientes: a) el hecho de vivir, tanto personal como institucionalmente, en una situación de escasez relativa de recursos, acentuada en los últimos gobiernos, y de status disminuído; b) la dependencia, tanto individual como institucional, del poder político, que hacía actuar a las FF.AA. como grupo de presión dentro del sistema de negociación; c) la existencia de una disonancia entre la imagen pública y la imagen institucional: los militares se sentían como una encarnación de la Patria y eran tratados como burocracia estatal por los políticos o incomprendidos por el ciudadano corriente.

Al acceder Allende al Gobierno se modifica la situación militar en cuanto se les otorga a las FF.AA. mejores remuneraciones y mas recursos y se valora públicamente la función militar, tratando de vincular sus cuadros a responsabilidades gubernamentales en empresas fiscales.

Sin embargo, aún sin tomar en cuenta las condiciones políticas concretas en que se desarrolló el Gobierno, los siguientes factores deben considerarse determinantes en la relación de las FF.AA. con un Gobierno de Izquierda: a) el reclutamiento selectivo socialmente, predominantemente de capas medias y, en ciertos casos, de hijos de familia, unido a la compatibilidad entre algunos ejes de realización militar y la ideología de las capas medias, por ejemplo, la concepción naturalística del orden; b) los vínculos entre los militares y los sectores de latifundistas y empresarios durante su paso por las guarniciones de provincias; c) la influencia norteamericana creciente en la FF.AA., especialmente en lo que se refiere a las modernas doctrinas de Seguridad Nacional respecto a la subversión y el enemigo interno. Este último, nos parece uno de los factores más importantes. La socialización en tales concepciones fortaleció la autoimagen de la FF AA. y rompió el enclaustramiento en que vivían a nivel nacional durante un largo período. Por otro lado, en la medida que tales concepciones vinculaban el fenómeno subversivo no sólo a problemas de tipo militar sino a factores económicos, políticos, militares y culturales, se preparaba el camino para la implementación de un proyecto político de las FF.AA., las que ven en tales concepciones los

elementos necesarios para formular tal proyecto. Así, estas concepciones operarán como selector de alternativas cuando, por motivo de la crisis, intervienen en la arena política como fuerza decisiva (18).

Todo ello se refleja en un fuerte anticomunismo de las actuales generaciones de oficiales superiores, formados en el período de la guerra fría, aunque también este anticomunismo se vincula a la formación de tales generaciones en la época de la Ley de Defensa de la Democracia (19).

Sin embargo, lo interesante es que la intervención militar no se produjo en octubre de 1970, ni siquiera en octubre de 1972. Nuestra hipótesis es que las condiciones que la hacían posible estaban en relación, por un lado, con la evidencia de una crisis de funcionamiento, evidencia que debía estar lo más generalizada posible, aun entre los que seguían apoyando al gobierno y, por otro lado, con la culminación del ciclo de polarización, desinstitucionalización y pérdida de legitimidad, es decir, con el desarrollo de la crisis del régimen político, a lo que aludiremos más adelante. Desde el punto de vista operativo, tales condiciones dicen relación con la unificación del alto Mando, de modo de tener a favor la legitimidad jerárquica, y con la recuperación del máximo de fuerzas para el líder insurreccional, para lo cual éste debía, en el caso del Ejército, eliminar al pratismo, nucleando sus sectores de apoyo.

(18) Si bien el despliegue efectivo de estas doctrinas más allá de las FF.AA. ha tenido lugar a partir de la instauración del gobierno militar, donde aparece en su carácter de ideología de dominación, los datos sobre la asistencia de oficiales chilenos a los centros donde tales enseñanzas se impartían en los EE.UU. son reveladores. Entre 1950 y 1974, se entrenan ahí 4,815 oficiales (Military Assistance Facts, Washintong D.C. Dpt. of Defense, 1969 y Covert Action in Chile, op. cit.).

(19) La ley de Defensa de la Democracia fue aprobada en 1948. Entre sus principales disposiciones contenía la ilegalización del PC. Esa Ley se aprueba en el marco político de la guerra fría y de la gran ofensiva iniciada por el PC después de su triunfo en las elecciones municipales de 1947. Esa ley estuvo vigente hasta 1957. Sin embargo, desde 1952, con el acceso de Ibáñez al Gobierno, el PC actúa en la semi legalidad.

A estas hipótesis hay que agregar la principal. Durante todo el período, las FF.AA. se orientan por una lógica: preservar sus intereses institucionales primordiales, evitando ser desmembrados y divididos. La situación de crisis política lo hace darse cuenta en un primer momento de su significación política decisiva como árbitro y, con el deterioro de la situación, la posibilidad de ser alternativa de poder si actuaban unificados. La fuerte unidad conseguida para derrocar a Allende demuestra, supuestos los factores ideológicos ya señalados, la importancia de las lealtades e intereses corporativos en las situaciones de conflicto. Desde este punto de vista, lo que las FF.AA. podían esperar del Gobierno de la Unidad Popular era sólo un rol subordinado en la resolución de la crisis política, en tanto que el bloque opositor les asignaba un rol mesiánico, cuyo correlato era la percepción de un proyecto autónomo de poder.

Así, una vez asegurada la unidad de las FF.AA. en torno a una alternativa propia de poder, no habrá mucho margen para la articulación del nuevo sistema de dominación. En efecto, la polarización de la lucha política, el anulamiento de uno de sus polos, la desaparición del centrismo como actor significativo y la consolidación ideológica del modelo autoritario en el liderazgo del bloque opositor y de sus sectores radicalizados -además de los factores estructurales de la crisis- permiten entender la naturaleza que adquiere el nuevo proyecto político desde el momento mismo del derrocamiento de Allende y la ruptura del sistema político vigente.

II. LOS PROCESOS GLOBALES DE LA LUCHA POLITICA.

Intentemos ahora una recapitulación esquemática de los procesos que desencadenan la crisis del régimen político.

1. Hemos dicho que el carácter general de la lucha política está dado en torno a la naturaleza del proyecto histórico de la UP y al enfrentamiento entre los intentos por radicalizarlo y los intentos de anularlo o eliminarlo.

Pero aunque el contenido anticapitalista del proyecto de la UP explica el carácter de la oposición de los intereses capitalistas y aunque el comportamiento de la DC en esta materia estuvo plagado de ambigüedades, él no explica por sí solo el proceso de polarización política (20).

Si se analiza este proceso, nos damos cuenta que él tiene tres tiempos.

Hasta octubre de 1972, la DC actúa siguiendo una línea de distancia y acercamiento discontinuo frente a ambos polos. En octubre de 1970 colabora con sus votos a la ratificación de Allende por el Congreso Pleno; durante el período pre-electoral, que culmina en abril de 1971, acentúa su distancia, buscando fortalecer su propia identidad y por lo tanto atacando duramente al Gobierno pero sin acercarse orgánicamente a la Derecha; después de las elecciones se insinúan

(20) Respecto a la mencionada ambigüedad, recuérdese que el principal conflicto institucional del período se originó a raíz del proyecto de las áreas de la economía, presentado por la DC a través de dos de sus senadores y por el que se entrababa la política de expropiaciones del Gobierno

posibilidades de compromisos parlamentarios con la Izquierda. Como consecuencia del asesinato de Pérez Zujovic y de la división de la DC, se invierte ese proceso, produciéndose un mayor acercamiento con la Derecha, que se concretiza en pactos electorales a diversos niveles. Sin embargo, al sentirse desbordada por una ola de movilizaciones que no controla, se decide a iniciar conversaciones con la UP, buscando siempre obligar a la UP a actuar dentro de un marco que le exigía compromisos y negociaciones que ésta percibe como cancelación de su proyecto.

Es evidente que después de julio de 1972 la DC todavía dirigida por su tendencia centrista, abandona la línea del compromiso, urgida por la exigencia de evitar su aislamiento respecto de una masa radicalizada. En ese terreno, el distanciamiento que se produce entre el Gobierno y sectores importantes de las capas medias, repercute en la DC.

A partir de octubre de 1972, la polarización se hace casi completa. Desde entonces y hasta mayo de 1973, aunque sigue preocupada de mantener la especificidad, sobre todo de sus discursos, frente a la Derecha, sus movimientos pendulares son incompletos. Su crítica se centra en el Gobierno, sin denunciar en ningún momento el desarrollo de una ofensiva que conducía al golpe militar.

En mayo de 1973, con el cambio en la dirección del Partido, se cierra el ciclo de polarización, aunque hacia fines del período se realiza una nueva rueda de conversaciones. Nos parece claro que ese diálogo, como se le llamó, estuvo vacío de sentido, por lo menos político. A esa altura la DC no busca llegar a un compromiso con el Gobierno y, quizás tampoco, ese compromiso habría sido capaz de cambiar el curso de los acontecimientos, sino de acelerar o retrasar su ritmo. A través del período, la DC casi no es un sujeto político, un actor que pueda determinar con autonomía su línea de conducta: está atrapada en la posición céntrica de un proceso de lucha política agudizada, donde se multiplican las presiones centrífugas. En mayo de 1973 había dejado de serlo absolutamente. Sus intereses organizacionales la habían obnubilado e impedido, así, comprender el

carácter universalista del apoyo popular al Gobierno y la naturaleza ineludiblemente represiva y antipopular de cualquier régimen que lo derrocara.

Es importante captar el significado de esa pendulación y conectarlo con la clásica tendencia al aislamiento que la DC desarrolla a partir de 1958, cuando se afirman sus posibilidades autónomas de poder. Ninguna de estas dos características se pueden explicar recurriendo, sin más, al argumento de la ambigüedad típica del centrismo. Más allá de ese elemento, sin duda importante en los momentos en que se enfrenta una situación política con predominio polar, está el problema de la compleja expresión de clase de la DC. Por ahora queremos sólo retener este argumento de un modo global, esperando explicitarlo más adelante.

Decíamos que los contenidos anti-capitalistas del programa de la UP no explican más que parcialmente la dinámica de polarización, porque no dan cuenta satisfactoriamente del comportamiento político del Centro, aunque sólo sea a causa de sus intereses políticos. La polarización política es ajena a estos intereses de Centro. Este soporta mal los cuadros de exacerbación de la lucha política que ponen en tensión las contradicciones latentes en las organizaciones de reclutamiento diversificado. Además la restricción del campo de maniobra política que acompaña los procesos de polarización perjudica a las capas medias, que son los sectores que el Centro representa más específicamente, las cuales han estado habituadas a la posibilidad de combinaciones múltiples y fluctuantes para realizar sus intereses.

Sin descartar entonces que en la base de la polarización estén presentes los contenidos del programa de la UP, pensamos que es necesario analizar otros factores que den cuenta de este proceso al menos respecto de las capas medias y la DC. Algunos de ellos actúan como originantes y otros como multiplicadores o aceleradores. Señalemos, a modo de hipótesis, los siguientes: a) la semantización del proceso por parte de la UP como socialismo y revolución dirigida por la clase obrera; b) las modalidades de la acción política de la UP; c) el desarrollo de una crisis que se expresa en violencia o desorden

político y en escasez; d) la fascistización ideológica que va produciendo la propia polarización y sus secuelas, los conflictos, las huelgas, los enfrentamientos.

La tendencia difícilmente evitable de la UP a expresarse en los términos de una revolución dirigida por el proletariado y en la que otros sectores eran aliados y a usar símbolos y ritos consiguientes no era accidental: revela tanto una tradición teórica como que el proceso era vivido por los dirigentes y por gran parte de la masa como tal. Aunque es evidente que la UP significó una ruptura y un quiebre de la continuidad en muchos aspectos, ese tipo de semantización chocaba a muchos sectores de las capas medias, cuya ideología tenía muchos elementos que componen el tipo clásico pequeño-burgués: aversión a lo plebeyo y distanciamiento de lo obrero, amor al orden, veneración a la propiedad; y también chocaba a los representantes políticos de esos sectores por las razones que hemos anotado, a las cuales hay que agregar un fuerte anti-comunismo y un temor de ver copado el campo político.

El otro factor, las modalidades que asume la acción política de la UP, tiene una importancia aún mayor, porque actúa directamente sobre la DC. En páginas anteriores hemos mostrado que los principios constitutivos del orden político eran la negociación, el compromiso y la gradualidad expresados institucionalmente en el equilibrio de poderes y en un sistema de atribuciones ciudadosa y a veces sútilmente contrabalanceadas.

La UP, impulsada por la necesidad de implementar su proyecto sociopolítico y por las expectativas populares y, además, acicateada por el fantasma de lo que se consideraba el fracaso de los reformismos, puso en práctica desde muy temprano una estrategia que, si bien se sustentaba en argumentos jurídicos de peso y se enmarcaba en la legislación vigente, cuestionaba los principios señalados en que se basaba el sistema, aquellos que constituían una de las bases principales del consenso alcanzado por las fuerzas políticas predominantes. En efecto, al ser rechazados esos procedimientos legales por los otros poderes del Estado, plegados a la racionalidad capitalista, se creaba una crisis de legitimidad legal.

Esta forma de desinstitucionalización producida por la modalidad de la UP de sobrepasar en forma legal la negociación impuesta por el sistema y de superar las barreras del gradualismo, agudiza como efecto otra forma de desinstitucionalización ya presente en la estrategia inicial de sectores de la Oposición: el cambio de la arena del enfrentamiento político. Es evidente sin embargo que esas opciones previas tenían, pese a su contingencia, su racionalidad. La UP, que deseaba preparar las condiciones de una transformación global de la sociedad, necesitaba acumular apoyos y capacidad de gestión y para ello debía desarrollar un programa integral. El ciclo que comienza en octubre de 1972 es el despliegue de una racionalidad antagónica ya existente en algunos sectores, que se opone a la racionalidad de la UP.

La lógica de la acción de la UP está fundada en la necesidad de una ampliación de los límites del Estado de compromiso con su dinámica de negociación, gradualidad, relativa fluidez y diversificación con la articulación y agregación de intereses. Ese estado es visto como un freno y un estorbo y su orden legal es aceptado instrumentalmente pero no desde el punto de vista valórico. A su vez la lógica de la acción de la Derecha, y en cierto grado de la DC, revela que la democracia como orden político les interesaba desde el punto de vista de clase, sólo cuando permitiera el capitalismo. Es decir su adhesión también era instrumental pero su acción ideológica invertía totalmente esa realidad, puesto que a nombre de la democracia desarrolla las condiciones para su quiebre. Así el principio de legitimidad valórica de la acción era la lucha por la libertad, aunque el sentido de acción era preparar las condiciones del golpe y ese sentido era visible para todos los actores, incluida la DC, por lo menos desde octubre de 1972 para adelante. Desde ese momento, como sucede muchas veces en las situaciones de crisis, tiene lugar una degradación de los valores que se usan para legitimar la acción, los cuales son utilizados, en definitiva, como máscaras.

Sin embargo, ese tránsito desde una crisis de legitimidad inicial al nivel de las élites políticas, entre las cuales se debilitaba la adhesión instrumental y condicionada al régimen, y esa degradación final, donde los discursos sobre la libertad son esgrimidos como coberturas,

a el producto de la crisis, la cual amplifica esa fisura inicial. A través de la masificación y exacerbación de la lucha política se masifica también la idea de que cualquier medio es bueno para derrocar al Gobierno. Desde octubre de 1972 en adelante, pero sobre todo desde mayo o junio de 1973, ya no se está en el campo de la política sino en el campo de la guerra desigual, por lo que no es raro que los valores que se esgrimen escondan las artimañas que se usan en la batalla. Por ello, la incuestionable legitimidad constitucional del Gobierno no podía ya ser un freno para la búsqueda de su derrocamiento.

2. Así, la crisis del régimen político se desarrolla a través de procesos de polarización, desinstitucionalización y deslegitimación. Desde el punto de vista del sistema político, el problema principal parece ser su incapacidad de soportar la destrucción del equilibrio céntrico. Este desplazamiento geométrico tiene origen en la racionalidad de desinstitucionalización de la Derecha, que para defender el capitalismo busca anular o eliminar al Gobierno, ya sea rigidizando el sistema de elaboración legal, ya sea movilizándolo masas, ya sea algunos de sus sectores recurriendo a la violencia política y al terrorismo. Cuando la lucha política se plantea en esos términos, ya existe una destrucción virtual de la base de legitimidad del sistema. Por su lado, la Izquierda busca realizar su programa sin caer víctima de una dinámica de negociación y cambio gradual que cancelaría, su proyecto sociopolítico y la empantanaría en el reformismo, frustrando su base popular. Sin mayorías institucionales para realizar el proyecto, y en esto hay también una responsabilidad del Centro, ello es otro elemento de desinstitucionalización.

Todo lo cual va minando la base de intereses concertados sobre los cuáles se sostenía el sistema político y favorece la polarización en la medida que crea condiciones para que el Centro, cuyos intereses políticos estaban relacionados con soluciones negociadas de los conflictos -marco dentro del cual jugaba un rol de arbitraje-, se vaya sumando a la estrategia que favorecía las acciones extra institucionales y las soluciones de fuerza.

Planteadas así las cosas, que el quiebre haya demorado tres años

tiene una doble explicación: a) el ritmo lento y discontinuo del ciclo de polarización política, lo cual permite que se mantenga la esperanza de soluciones negociadas hasta octubre de 1972 y de un retroceso del Gobierno, hasta marzo de 1973; b) el atractivo y fuerte apoyo popular que el Gobierno conservó casi sin deterioro durante esos tres años y que se expresa también en los resultados electorales; las energías de movilizaciones surgían de la esperanza revolucionaria de obreros y campesinos, los cuales habían tomado en sus manos el control de la producción en asentamientos, fábricas, la organización del abastecimiento en las JAP, la agitación política, la organización en las masas y la defensa del Gobierno en los sindicatos, en los Cordones Industriales o en los Comandos Comunales. En esta adhesión están presentes no sólo los indudables beneficios económicos y sociales recibidos por los sectores populares, sino una alta conciencia política y la identificación de una parte sustancial de ellos con una experiencia social y política que los reivindicaba como los actores de historia que hasta entonces los había marginado.

3. Tratar el proceso desde el punto de vista que lo hemos hecho, como totalización de la crisis que se realiza a través de la crisis del régimen político, puede producir una visión parcial y distorsionada. Es evidente que un enfoque de ese tipo no agota las posibilidades analíticas. Además, el sesgo potencial aumenta cuando el lector opera con la idea que una crisis es un proceso de degradación. En realidad, hay ciertas crisis que no son una simple decadencia de un orden previo, sino que se constituyen por los efectos sociales de la lucha entre uno y otro proyecto de sociedad.

Una crisis de este tipo es ambivalente, siendo vivida por algunos grupos como momentos de exaltación, en los cuales lo deseado se va haciendo posible, y por otros, como fin de un mundo o de un modo de vida. La crisis que se desarrolla en la sociedad chilena durante el periodo 70-73 fue de este tipo.

Durante ese lapso se produjo una enorme activación política de la sociedad, lo que significaba movilizaciones, movimientos sociales y, en general, implicación política de masas. La politización de la vida

social arranca de la apatía y del retraimiento de muchos sectores que hasta entonces tenían una participación formal, reducida a los actos electorales. De algún modo, esta masificación de la participación desborda el carácter elitario de la política tradicional, reducida al ámbito parlamentario y canalizada a través de los partidos. Estos ven limitada su autonomía respecto a la sociedad y sus posiciones dejan de ser -por lo menos parcialmente- el resultado de la lucha interna de facciones, para estar sometida directamente a la presión de masas polarizadas.

A nivel popular, el período 70-73 significó una explosión de los niveles de participación y, más que eso, de su identidad como sujetos históricos no sólo se expande la idea que el pueblo es actor, también grupos diversos buscan activamente la posibilidad de ejercer el poder en la base. Es evidente que esas tentativas generan contradicciones entre los actores movilizados y las estructuras políticas, Estas últimas buscan mantener el control y la manipulación de la participación esgrimiendo razones, muchas veces objetivas, de eficacia y dirección unificada. sin embargo, esas razones valederas no podían ser efectivas porque el proceso había desencadenado un impulso de democratización política al cual respondían esas reivindicaciones, muchas veces confusas y otras equivocadas.

La crisis es, entonces, mucho más que desorden y explosión de conflictos que no pueden ser eficientemente canalizados. La dinámica de movilización social produce también una profundización de la democratización política. Es evidente que los intentos de control popular de la producción y del abastecimiento, las tomas de fábricas, como incluso algunas movilizaciones iniciales de sectores de oposición, era mucho más que el resultado de una estrategia gobiernista para alcanzar el poder total, o de la Oposición para derrocar al Gobierno, como uno u otro bloque afirmaba. En el primer caso, revelaban el despertar de la iniciativa popular o de base y eran expresivas, muchas veces simbólicamente expresivas, de la idea del pueblo-actor. También es evidente que ese proceso de profundización de la democracia política es recuperado en la lucha contra el Gobierno como una manifestación de crisis destructiva y no de crisis creadora.

Sin embargo, no es posible olvidar que la sociedad chilena en el período 1970-1973 era mucho más que una sociedad convulsionada. Era también una sociedad en activo y dinámico proceso de autogestión. Y eso fue lo que el golpe y el régimen militar destruyeron.

ANEXOS

SIGNIFICACION DE SIGLAS

APS	:	Area de Propiedad Social.
CAS	:	Consorcio Agrícola del Sur (Organización Patronal Agrícola de tipo regional).
CODE	:	Confederación Democrática (Agrupación electoral de los partidos PN, PIR, DR Y DC).
CORA	:	Corporación de la Reforma Agraria (Organismo Estatal).
CUT	:	Central Unica de Trabajadores
DIRINCO	:	Dirección de Industrias y Comercio (Organismos estatal).
DC o PDC	:	Democracia Cristiana o Partido Demócrata Cristiano.
DR	:	Democracia Radical (Fracción de Derecha escindida del PR antes de las elecciones de 1970).
ENU	:	Escuela Nacional Unificada.
FF.AA.	:	Fuerzas Armadas
FECH	:	Federación de Estudiantes de Chile.
GASCO	:	Compañía de Gas de Santiago (Empresa Privada)
IC	:	Izquierda Cristiana
JAP	:	Juntas de Abastecimientos y Precios.
JDC	:	Juventud Demócrata Cristiana
MAPU	:	Movimiento de Acción Popular Unitaria.
MIR	:	Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
PIR	:	Partido de Izquierda Radical.
PN	:	Partido Nacional
PR	:	Partido Radical.

LA VIA CHILENA AL SOCIALISMO ELEMENTOS DE UNA DEFINICION.

El siguiente es un extracto de un artículo preparado por M.A. Garretón con la colaboración de Felipe Agüero para el Diccionario de Ciencias Sociales de la UNESCO (versión española) y para el volumen editado por CLACSO con los Términos Latinoamericano de Ciencias Sociales, en 1974.

El Concepto Vía Chilena al Socialismo refiere al proyecto político de la Unidad Popular de acceder al objetivo del socialismo, dentro de los marcos de sufragio, a través del uso de la institucionalidad vigente y en democracia, pluratismo y libertad (Salvador Allende, «Discurso del 5 de noviembre de 1970», en Hernán Godoy, «Estructura Social de Chile», Editorial Universitaria, Santiago, 1971, pgs. 582 -593).

Una gran cantidad de documentos de los partidos políticos hacen referencia directa o indirecta al concepto. (En especial, del Partido Comunista, Luis Corvalán, «Camino de Victoria», Impresora Horizonte, Santiago, 1972. Del Partido Socialista, una selección de discursos de Carlos Altamirano en Editorial Quimantú, Santiago, 1972. Del MAPU. «El carácter de la revolución chilena», Ediciones Unidad Proletaria, Santiago, 1971). Por otro lado, existe un conjunto amplio de estudios sobre el tema que discuten el contenido del concepto y las características del proceso político en curso (especialmente en las Revistas «Cuadernos de la Realidad Nacional», Santiago, N°s 10, Diciembre 1971, sobre «Problemas y perspectivas del Socialismo en Chile», y 15, diciembre de 1972, sobre «Revolución y Legalidad: problemas del Estado y del Derecho en Chile»; «Chile Hoy», Santiago de Chile; «Revista de la Universidad Técnica

del Estado», Santiago de Chile, Volúmen Especial N° 11 y 12, de noviembre-diciembre 1972; Dale L. Jonhson, editor, «The Chilean Road to Socialism», Anchor, New York, 1973; Ann Zamit y Gabriel Palma, editores, «The Chilean Road to socialism», IDS, Sussex, 1973).

Pero el término fue principalmente acuñado y específicamente sistematizado y desarrollado en los discursos de Salvador Allende (Discurso del 5 de noviembre 1970, op. cit. «Mensajes al Congreso Nacional», 21 de mayo de los años 1971, 1972 y 1973; «Allende habla con Debray», Revista Punto Final, N°126, marzo 1971; los discursos más importante están presentados en dos antologías: Salvador Allende, «Nuestro camino al socialismo: la vía chilena», Ediciones Papiro, Buenos Aires, 1971 y «Allende, pensamiento político», Quimantú, Santiago 1972) y en trabajos de sus asesores políticos y económicos (especialmente, Joan E. Garcés. «El Estado y los problemas tácticos en el Gobierno de Allende», Siglo XXI, Madrid 1974 y «Estado Burgués y Gobierno Popular», en «Cuadernos de la Realidad Nacional», N°15, op. cit., pgs. 132 - 152; Eduardo Novoa, «El difícil camino de la legalidad», en Revista de la Universidad Técnica del Estado», VII, abril 1972, pag. 7-34, Santiago, y «Vías Legales para avanzar al socialismo» en Revista de Derecho económico N°33 y 34, octubre 1971, Santiago; José A. Viera Gallo, «El segundo camino al socialismo: aspectos institucionales», en «Cuadernos de Realidad Nacional» N°15 op. cit., pgs. 152-191; y en el plano económico, Sergio Ramos, «Chile, Una economía de transición», Casa de las Américas, La Habana 1972; Pedro Vuskovic, «La experiencia chilena: problemas económicos en CESO-CEREN, op. cit.; «El pensamiento económico del Gobierno de Allende», antología editada por Gonzalo Martner, Editorial Universidad, Santiago 1971). Es a partir de este tipo de documentos que se puede tratar de establecer una definición de la vía chilena al socialismo.

Es preciso señalar que el término, cuando es aplicado, no hace especial referencia al objetivo final, el socialismo, que es postulado sólo en rasgos generales como un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y

aspiraciones, como el único régimen que se ofrece a las naciones modernas para reconstruirse racionalmente en libertad autonomía y dignidad y para superar el sistema capitalista y dependiente, y en el cual lo esencial es la socialización de los medios de producción, la gestión del Estado por parte de los trabajadores, y un sistema de valores culturales que permitan una convivencia solidaria (Allende, Primer Mensaje al Congreso Nacional, Mayo 1971, en «Nuestro camino al socialismo...», op cit.). Más bien, la definición de la vía chilena al socialismo se centra en la modalidad específica que Chile tiene de acceder a ese objetivo. Su tratamiento más o menos sistemático contempla tres aspectos: una definición negativa, una justificación de su posibilidad teórica y su viabilidad histórica y un conjunto de elementos que configuran la definición positiva.

a) La definición negativa formula un conjunto de juicios por oposición. La vía chilena se entiende como aquella que no sigue los caminos tradicionales de anteriores procesos socialistas: ella no utiliza la violencia física, no realiza una ruptura violenta con el orden social existente, es decir, no es una vía armada; no se basa en una forma dictatorial o autoritaria de Gobierno y no contempla la exigencia de un partido único de Gobierno. (Allende, «Primer Mensaje al Congreso», op. cit., pág. 27; «Segundo Mensaje al congreso», mayo 1972, en «Allende, su pensamiento político», op. cit., pág. 373; Discurso del 5 de noviembre 1970, op. cit., pág. 589. Un enfoque más teórico de estos aspectos en Joan Garcés, «Estado Burgués...», op. cit., pág., 135-136 y José Rodríguez E. «Hacia la conquista del Derecho Popular» en «Cuadernos de la Realidad...», Nº15 op. cit., 191).

b) La justificación teórica de la vía chilena al socialismo, tiene una doble base. Por un lado, la posibilidad prevista por los clásicos de la teoría marxista: Puede concebirse la evolución pacífica de la vieja sociedad hacia la nueva, en los países donde la representación popular concentra en ella todo el poder, donde, de acuerdo con la Constitución, se puede hacer lo que se desee, desde el momento que se tiene tras de sí a la mayoría de la nación (Engels, citado por Allende, en «Discurso del 5 de noviembre 1970», op. cit., psg. 586) Por otro lado, las características propias del nivel político e institucional de la

sociedad, el que, junto con poseer relativa autonomía respecto a la base socio económica que le dió origen, influye sobre la transformación de ésta y contiene en su seno elementos contradictorios en la medida que ha debido absorber en muchos casos las reivindicaciones y conquistas de los movimientos revolucionarios.

Pero el argumento teórico, para darse en la realidad histórica, exige ciertas condiciones particulares de la sociedad que permitan una justificación histórica. Tales condiciones en el caso chileno, serían:

En primer lugar, la existencia de un Estado, de estructura primordialmente liberal burguesa, con separación de poderes y régimen presidencial con Ejecutivo fuerte, con creciente intervención en la vida económica, dotado de un conjunto de mecanismos arbitrales legitimados, entre ellos el sistema electoral, para resolver los conflictos entre los grupos sociales, y que se han extendido a amplios y significativos sectores de la población, y, finalmente, caracterizado por una relativa elasticidad para aceptar importantes conquistas impuestas por los trabajadores; es decir, un Estado abierto o la acción política de las masas (Garcés, «El Estado y los problemas tácticos»..., op. cit.).

En segundo lugar, el desarrollo democrático-burgués relativamente amplio, ha configurado un conjunto de condiciones políticas entre las que se cuentan la sólida organización política y sindical de la clase obrera y las masas populares con la consagración de su poder de presión, la existencia de partidos políticos organizados con ideologías que representan los intereses de las diversas clases sociales, el ejercicio real de la libertad por parte de grupos significativos de la población, un sistema de elecciones libres y periódicas con alta participación, y un sistema jurídico abierto que sin perder su connotación de tipo clasista ha incorporado intereses inmediatos de los sectores populares.

En tercer lugar, la existencia de mecanismos arbitrales legitimados del Estado para la resolución de conflictos habría permitido el desarrollo de una ideología profesionalizante y constitucionalista en

las Fuerza Armadas, cuyo rol profesional habría históricamente neutralizado el ejercicio del papel que tradicionalmente han tenido como árbitros potenciales en favor del orden establecido.

A las condiciones estructurales anteriores, se agregaban la experiencia de una prolongada crisis económica con el fracaso histórico de los modelos de desarrollo dentro del sistema capitalista, la existencia de un sistema internacional multipolar que excluía la posibilidad de una intervención directa de potencias extranjeras y, finalmente, el factor subjetivo constituido por la fuerte conciencia política y revolucionaria de los sectores más significativos del proletariado.

Todos los factores anteriores permiten el triunfo electoral de la Izquierda chilena y el inicio consiguiente de la vía chilena al socialismo.

c) La definición positiva del concepto abarca fundamentalmente cinco aspectos: el rol de la institucionalidad, el papel del movimiento popular, las tareas programáticas, la definición en torno a las libertades públicas y el sistema de expresión política y el rol de la violencia y las Fuerzas Armadas.

En primer lugar, la vía chilena al socialismo se inicia con la conquista por parte del movimiento popular, conducido por los partidos de izquierda, del Poder Ejecutivo. El Gobierno aparece, entonces, como un elemento estratégico en la lucha por el poder político de los trabajadores y del pueblo en general. Es a partir de él que pueden iniciarse las tareas de transformación social que conduzcan al socialismo. Sin embargo, la conquista del Gobierno no ha alterado el conjunto de la institucionalidad vigente y, por lo tanto, son dentro de sus marcos que deberán realizarse estas transformaciones. La meta es crear una nueva institucionalidad y una nueva legalidad a partir de la existente, culminando en una nueva Constitución aprobada según las normas prescritas en la Constitución vigente (Allende «Su pensamiento político», op. cit. pgs. 69, 95, 143, 32, 374 y «Nuestro camino...», op. cit., pgs. 35-36, 64, 87). No hay, pues el intento de destruir la institucionalidad sino de servirse de ella para transformar-

la. Históricamente esta institucionalidad ha sido usada por los grupos sociales dominantes para la perpetuación del sistema y de sus posiciones de dominio. La vía chilena al socialismo pretende usarla al servicio de los intereses de las clases populares y de su proyecto de construcción de un nuevo tipo de sociedad, lo que implica un cambio del contenido de clase en el aparato normativo y organizacional del Estado (Allende, «Su pensamiento político», op. cit., pgs., 373 García, «Estado burgués...», op. cit., pgs. 139, 140, 141). Todo ello es posible por cuanto el poder de conservación de la sociedad no tiene su fundamento en la institucionalidad misma, sino en el poder económico y en las relaciones sociales establecidas por los grupos dominantes.

De ahí la característica de gradualidad de la vía chilena al socialismo, por lo que el conjunto de la institucionalidad y del Estado es transformado progresivamente por el movimiento popular a partir de su conquista del Gobierno.

En segundo lugar, el uso de la institucionalidad para la transformación social, exige como condición sine qua non un proceso simultáneo de organización, movilización, presión y participación de las masas en la dinámica de las transformaciones, que se traduce en un creciente aumento del poder de los trabajadores (Allende «Su pensamiento político», op. cit., pgs. 306, 315, 358, 362, 375, 401; «Nuestro camino...», op. cit., pg. 35, 36). Por otro lado, este creciente poder de los trabajadores es visto como una condición de la estabilidad del Gobierno.

La movilización y participación popular y su apoyo al Gobierno, no pueden quedar reducidos a los partidos y adherentes a la Unidad Popular, ni siquiera al conjunto del proletariado urbano y rural. El éxito de la vía chilena al socialismo exige la consolidación de una amplia alianza de clases en torno a ellos, especialmente de las llamadas capas medias, que solo excluye a los denominados enemigos fundamentales de la revolución chilena, la gran burguesía monopólica y agraria, y sus representantes políticos. (Programa Básico de la Unidad Popular, Editorial PLA, Santiago, 1970).

En tercer lugar, la vía chilena consagra la realización simultánea y combinada de tareas destinadas a satisfacer las necesidades materiales de las masas trabajadoras y a ampliar las bases económicas, sociales y culturales de la democracia política, y de tareas destinadas a promover las reformas socioeconómicas que modifiquen el sistema capitalista. (Allende, «Nuestro camino...», op. cit., pág. 29; Garcés, «Estado burgués...», op. cit., pgs. 145). Es lo que se ha llamado la combinación de tareas democráticas y tareas socialistas (Ramos, op. cit.), en la que la política económica juega el rol crucial de asegurar una redistribución masiva del ingreso en favor de los sectores populares y de asegurar la propiedad social de los medios de producción fundamentales, en poder hasta ahora de grupos monopólicos (Vuskovic, op. cit.).

La socialización de los medios de producción, a partir de la proyección dominante del Área de Propiedad Social al resto de la economía y la transformación subsiguiente de las relaciones sociales de Producción, constituyen la médula programática de la vía chilena al socialismo en esta fase de su desarrollo. Esto permite darle un contenido al reordenamiento institucional, cual es su adecuación al postulado programático de transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto el poder político y el poder económico (Allende, «Nuestro camino...», op. cit., pgs. 35-36) y su correspondencia con las transformaciones del nivel económico y social. Así, el Estado en la vía chilena al socialismo, aparece con un doble carácter: es un objetivo político a conquistar y, al mismo tiempo, es un medio del que se sirven los trabajadores, a través del Gobierno, para satisfacer intereses inmediatos y para realizar los cambios estructurales que les permitan controlar el resto del Estado (Allende, «Su pensamiento político, op. cit., pgs. 299-230).

En cuarto lugar, la vía chilena al socialismo, definida como el camino al socialismo en democracia, pluralismo y libertad, consagra la mantención del sistema democrático vigente, con especial énfasis en la conservación y extensión de las libertades individuales y colectivas y su expresión política en el régimen de partidos. A este respecto, no sólo garantiza la existencia y el pluralismo de partidos de

oposición. sino que acepta la multiplicidad de partidos de Gobierno (Allende Discurso del 5 de noviembre de 1970", op. cit., pág. 589; «Nuestro no...», op. Cit., pgs. 37 y 41, «Su pensamiento político». op. cit. 333-334 Viera Callo, op. cit.pgs. 173).

Finalmente, la vía chilena al socialismo excluye de su definición la violencia física y abierta como medio de lucha política y postula la autonomía y prescindencia política de las Fuerzas Armadas. El desarrollo violento de la revolución, que busca ser evitado, sólo es admitido como una posibilidad de respuesta a la violencia que ejerzan contra el Gobierno sus enemigos políticos (Allende, «Mensaje al Congreso 21 de Mayo 1971», en «Nuestro Camino...». op. cit., pgs. 38 y sigs... y 98 y sigs.; «Allende habla con Debray», op. cit., Garcés, «El Estado y los problemas tácticos...», op. cit., pág.108).

Para terminar señalemos que las conceptualizaciones anteriores, que expresan una determinada visión del proyecto político de la Unidad Popular, fueron objeto de profundas controversias intelectuales y políticas. Desde sectores de derecha, se plantea la incompatibilidad fundamental entre democracia y el socialismo, por lo que se niega la existencia de una vía chilena al socialismo, la que no sería sino la utilización por parte del movimiento comunista internacional del lenguaje propio del sistema político chileno, con el fin de encubrir el acceso al poder total del Partido Comunista y la instauración de la dictadura del proletariado («Editoriales del diario El Mercurio» del período y «Visión crítica de Chile», edición preparada por Tomás P MacHale, Ediciones Portada, Santiago 1972). Para sectores intelectuales representativos de la Democracia Cristiana, la vía chilena al socialismo representaba esencialmente un proceso de estatización de la economía y de control, a través de ese medio, de la expresión política de los diversos sectores de opinión, lo que debía llevar necesariamente a la consolidación de un sistema totalitario (Alvaro Bardón y otros, «Itinerario de una crisis», 1972, y Pablo Hunceus y otros, «Chile, el costo social de la dependencia ideológica», 1973, Editorial del pacífico, IDEP, Santiago).

Entre los sectores intelectuales de la izquierda chilena, tampoco

hubo consenso en el contenido del término. Para algunos, que participaban en el Gobierno de la Unidad Popular, el término era inadecuado para dar cuenta del proceso político, en la medida que postulaba una excepción histórico que se apartaba de las leyes que rigen los procesos revolucionarios de corte socialista. Otros sectores de izquierda, que no participaban en el Gobierno, cuestionaban la existencia de una vía chilena al socialismo que excluyera por definición el enfrentamiento armado y la destrucción violenta del Estado y la institucionalidad. Según este punto de vista, el carácter burgués del Estado y la institucionalidad genera contradicciones insuperables, dentro de sus marcos, con el movimiento revolucionario, lo que conduce necesariamente al conflicto violento, por lo que la vía chilena al socialismo estaría condenada de antemano al fracaso en la medida que no contemplara la preparación armada del movimiento popular. (Esta posición se expresa especialmente en la «Revista Punto Final», que recoge la posición del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. También Ruy Mauro Marini, «El desarrollo industrial dependiente y la crisis del sistema de dominación», en «Marxismo y Revolución», N° 1, Julio-Septiembre 1973, Santiago, y «Chile, Revolución o Transición», presentado al Seminario Estado y Derecho organizado por el Centro de Estudios de la Realidad Nacional CEREN, Santiago, Enero 1973).

SEGUNDA PARTE
LA CRISIS DE LA
DEMOCRACIA EN CHILE
NUEVAS CONSIDERACIONES

LA TRAYECTORIA DE UNA CRISIS

TOMAS MOULIAN E.

La compleja trama de acontecimientos y procesos que llevaron al derrumbe de la democracia y a la instalación de una dictadura duradera, necesita ser explorada a lo largo de tres tiempos históricos diferentes. Ellos son la década del sesenta, el período de la Unidad Popular y las decisiones posteriores al golpe militar.

I. LA DÉCADA DEL SESENTA: UNA RADICALIZACIÓN SISTEMICA

Un interés central del análisis de la preparación de la crisis, es comprender el aislamiento estratégico de la derecha en 1970. Para ello hay que remontarse a la oportunidad perdida, a la fase del gobierno de Alessandri entre 1958 y 1964. La radicalización del sistema de partidos se desarrolló activamente después de esa fase, cuando por un conjunto de circunstancias, entre las cuales hay que señalar los errores políticos de la derecha, el centro alternativo desplazó al centro articulador, generando un proceso de centrifugación que tuvo lugar entre 1964 y 1970.

Fue entonces cuando se preparó el escenario del conflicto político ocurrido entre 1970 y 1973. No hay que entender esto en clave evolucionista-determinista, como si los procesos ocurridos entre 1958 - 1964 hubieran gestado y dado a luz la polarización de 1964-70 y ésta, a su vez, la crisis de 1970-73. En la acción política no hay resultantes necesarias y existe siempre espacio para las estrategias. Ella no puede entenderse como la pura combinatoria de fuerzas ciegas e ineludibles.

En 1958, la derecha ganó la elección presidencial con la primera pluralidad (31,2 por ciento), en un campo de fuerzas muy fragmentado, después de haber perdido en otras tres ocasiones sucesivas frente a coaliciones de centro-izquierda y, en una, frente a un líder populista, apoyado por una alianza heterogénea de partidos entre los cuales figuraba la organización socialista más importante.

Esta situación perdedora en ciertas elecciones claves, había producido limitaciones y cercenamientos del poder político de la derecha, su sustitución como el actor principal, como la fuerza dirigente de la modernización capitalista ocurrida después de la gran crisis. Este proceso asumió una forma particular, en la cual se combinaron la aceleración de la industrialización con la democratización social, especialmente de derechos laborales y previsionales y con la fuerte presencia de un Estado regulador. Las acerbias críticas de los partidos de la derecha a los gobiernos radicales, las dificultades que tuvo hasta 1958 para entenderse de manera estable con esa fuerza centro, revelan que si bien toleraba lo que había, su deseo era otra relación entre Estado y sociedad. Su ideal era un Estado que conservando el papel de propulsor de la industrialización a través de protecciones y franquicias, renunciara a los papeles de control y regulación; por lo tanto, un Estado que favoreciera la acumulación capitalista en las condiciones de la industrialización sustitutiva, pero que dejara de pensarse como el responsable y el generador de la equidad.

No tengo espacio en esta exposición para mostrar por qué la derecha fue incapaz de aprovechar el cambio político restrictivo de 1948, la ilegalización de los comunistas, para promover una reorganización del modelo de desarrollo. En todo caso, por lo mismo que entre 1948 y 1958 no pudo imponer un programa orgánico de contrarreformas que limitaran el intervencionismo estatal a sus aspectos funcionales, la oportunidad abierta por la elección presidencial de 1958 cobró una enorme significación. Constituyó, en realidad, un momento estratégico.

El programa económico-social de Alessandri buscó la liberalización del comercio exterior y de los precios internos, pero manteniendo

un papel activo del Estado, con un sector industrial que debía modernizarse con su apoyo para colocarse paulatinamente en condiciones de competir por mercados externos y de disputar en el mercado interno con productos importados. El horizonte hacia el que apuntaba esa política era sortear el problema del estancamiento producido por las limitaciones del mercado interno, a través de una apertura externa, a la cual se debía llegar tras sortear el requisito de la profundización de la industrialización.

Después de veinte años de alejamiento del control presidencial y de las oportunidades de poder que esto significaba, la derecha tuvo por fin la posibilidad de poner en aplicación un programa más o menos coherente. Sin embargo, los problemas de corto plazo y los déficits de la balanza de pagos, provocaron ya en diciembre de 1960, el cambio de los equipos económicos y la necesidad de una drástica devaluación en diciembre de 1961, con lo cual se consolidó la imagen pública de fracaso del llamado «gobierno de los gerentes».

Antes aún de esta crisis, cuando se fue imponiendo la tesis opositora de que algo no funcionaba en la política económica, pese a los buenos resultados inflacionarios de 1960 y 1961, Alessandri se vio obligado a abandonar su agresiva y altanera independencia frente a partidos, incluso de los propios partidos de derecha, para amarrar un pacto de gobierno que también incluyó al Partido Radical. El 26 de agosto de 1961, los radicales se incorporaron al gabinete.

En 1962, la alianza materializada entre la derecha y los radicales para apoyar al Gobierno de Alessandri, se perfeccionó en un pacto que garantizaba el apoyo conservador y liberal a un candidato radical en las elecciones presidenciales de 1964. Desde que Allende en 1958, estuvo a punto de conquistar el gobierno con un inesperado 28,5 por ciento contra 31,2 por ciento de Alessandri, un síndrome de amenaza orientaba los cálculos de la derecha. Desde entonces, el futuro era visto como peligroso.

Una posibilidad de evitar la catástrofe habría sido conseguir, produciendo la imagen de un gobierno eficaz y distinto (técnico en

vez de político), una modificación profunda de las relaciones de fuerza. Esta fue la carta que jugó Alessandri y la derecha con su política de modernización capitalista de corte liberal, la cual efectivamente paralizó la inflación y provocó un crecimiento industrial, pero no soportó los desequilibrios externos.

Después que el Gobierno se vio obligado, incluso con un cierto retardo, a aceptar la realidad de la crisis, la derecha tuvo también que abandonar el diseño del camino propio que había sido su táctica en todas las elecciones presidenciales, que tenía que subordinarse al centro radical.

Pero en realidad este pacto de 1962 con lo radicales era una variante mitigada de solución conservadora. Sin la luz roja de 1958, la derecha hubiese preferido el camino propio: no a las alianzas. Aceptó a los radicales porque un pacto con ellos tenía un limitado y acotado costo de cambios. Pero en ese momento, no estaba dispuesta a aceptar a los demócratacristianos. El diseño de modernización de estos últimos, basado en reformas estructurales, redistribución de ingresos, acentuación del papel contralor y regulador del Estado, no era tolerante para una derecha tan corporativizada, con tanto miedo a los cambios, con tan poca capacidad de impulsar una modernización a fondo, con tan fuerte ligazón con los latifundistas.

Por eso, la opción que la derecha se vio forzada a tomar en 1964, después de las elecciones complementarias de Curicó, solamente se explica por el pánico. Y tiene todos los componentes potencialmente catastróficos de las opciones del mal menor. En realidad, los resultados de Curicó en sí mismos, no tenían demasiada importancia porque esa circunscripción solamente representaba el 0,8 por ciento del total del electorado y porque, pese a su ruralidad, tenía una antigua penetración izquierdista. Lo que esas elecciones demostraron era el poder negativo, por así llamarlo, de la Democracia Cristiana. Este consistía en su falta de capacidad para ganar con sus propias fuerzas una elección presidencial, dado que ésta no había llegado al 25 por ciento de los votos en las elecciones de regidores de 1963 y en su

capacidad simultánea de mantener una cuota de votación irreductible que podía hacer peligrar el triunfo de la coalición de centro-derecha.

La gran fuerza de la Democracia Cristiana en ese momento fue la mantención de un importante contingente de voto duro, que era insensible a las amenazas de catástrofe. Esto ocurría porque dicha fuerza política había logrado transmitir la convicción de que su programa de cambios era el único dique posible contra la izquierda, porque ofrecía una alternativa para todo ese amplio y creciente segmento de la población que tenía una sensación de crisis de la sociedad, de expectativas nacionales frustradas, situación de la cual, oscura o abiertamente, culpabilizaban al capitalismo y más frecuentemente a los patrones, cuya imagen estaba asociada entonces con falta de capacidad creadora, rapacidad y corrupción.

Habiendo privilegiado la derecha una política defensiva formalmente exitosa en 1964, es necesario explicar por qué en la elección presidencial de 1970, persistiendo la situación de amenaza, se produjo una estructura tripartita y no resultó un nuevo pacto defensivo. Detrás de esto hay razones profundas que tienen que ver con el comportamiento político de la derecha y del centro predominantes.

La respuesta es la radicalización experimentada por la derecha durante el gobierno de Frei. Pueden distinguirse dos tipos de elementos en ese proceso. Algunos están relacionados con la centrifugación provocada por las características particulares del partido intermedio gobernante; y otros, con la desilusión de la derecha respecto de la democracia competitiva.

Aquella, al haber optado en 1962 por el pacto presidencial con el radicalismo, no estuvo en condiciones de negociar en 1964 cuando se vio forzada a apoyar a Frei. Debió traspasar su votación sin poder ponerse de acuerdo en un programa común y, lo que es peor, sin siquiera poder negociar algún pacto de garantías. A su vez, la Democracia Cristiana llevó adelante sin contemplaciones su programa agrario, el cual significaba un duro golpe, tanto desde el punto de

vista económico patrimonial, como desde el político y simbólico, para un segmento social representado básicamente por la derecha. Ese fue un factor de centrifugación, por varias razones. Entre ellas, porque obligó al nuevo partido de la derecha, creado en 1966, a enfatizar su dimensión propietarista, dificultando su búsqueda de nuevos principios de identidad.

Otro factor de centrifugación fue que la Democracia Cristiana buscó captar de una manera estable clientela política de la derecha, intentando impulsar una manera moderna de capitalismo, por supuesto con un sistema cambiado y humanizado que por ello mismo sería más integrado y dinámico. El intento era reducir a la derecha sobreviviente, a los terratenientes nostálgicos y a los tradicionalistas acérrimos, dado que el resto sería absorbido por el centro polifacético, capaz de rastrillar a ambos lados. En esa época, esta propuesta era especialmente competitiva para la derecha porque había una crisis de legitimidad del capitalismo, el cual no solamente aparecía como injusto e inequitativo, sino también como ineficaz. Un capitalismo reformado, más integrador y más abierto a los cambios, aparecía como una posibilidad tentadora. Esta oferta de capitalismo moderno y humano, que era una de las dimensiones de una Democracia Cristiana «cath-all» le dificultaba más el camino a la derecha para posicionarse en la clave de modernidad.

La Democracia Cristiana, por su acción de reformas como fuerza gobernante y por su intento frustrado de reducir a la derecha a un segmento insignificante, provocó en la nueva derecha surgida en 1966, una exacerbación pasional del resentimiento hacia el centro, que hizo muy difícil pensar en un nuevo pacto defensivo. Los agudos conflictos entre la Democracia Cristiana y el Partido Nacional durante el gobierno de Frei, las mutuas descalificaciones, crearon un clima confrontacional entre ambas fuerzas.

En ese contexto, se fueron forjando en la derecha las condiciones que la llevaron a preferir la aventura del camino propio, al realismo defensivo de un pacto en condiciones de subordinación. Este aventurerismo revela una especie de fatalismo o más bien la fantasía

catastrofista de que antes de ceder es preferible llegar hasta lo peor (para sí); la misma lógica autodestructiva o simplemente suicida, que se encuentra en una parte de la izquierda.

Para las elecciones de 1970, la derecha, hasta entonces atenazada por el pánico al marxismo, prefirió correr el riesgo total, antes que entregar sus votos a la Democracia Cristiana. Ese gesto, entre altanero y desesperado, tiene un alto contenido simbólico: revela que la derecha estaba desbordada por el juego polarizado con un centro irreductible y revela también que, inconscientemente, tenía puestas sus esperanzas en la catástrofe.

El otro elemento central de la radicalización del sistema de partidos que preparó el escenario del breve pero dramático período 70-73, fue la izquierdización de la izquierda esta dinámica también fue favorecida por el papel centrifugador del centro alternativista, aunque tuvo causas independientes.

La izquierda de la década del sesenta, ya no era la que había participado en las coaliciones de centro-izquierda entre 1938 y 1947, ni la que había ido tras Ibáñez en 1952. En gran medida era distinta por efecto de esas experiencias. El análisis autocrítico de los partidos ponía énfasis más en limitaciones y defectos que en los éxitos, quizás porque se les examinaba con un código marxista. Finalmente, para esa teoría, las reformas tenían sentido en la medida que permitían acumular fuerzas para la gran epopeya que en algún momento llegaría: la revolución. Evidentemente no había sido ese el resultado de la participación gubernamental de la izquierda.

Sin embargo, la izquierda chilena de los 60, traumatizada por la colaboración con el centro o con el populismo ibañista, no realizó un cambio de vía, como ocurrió en otros países de América Latina. Los sesenta fueron un período de rebrote de las esperanzas revolucionarias y de revalorización de la lucha armada, como consecuencia tanto de Cuba como de la polémica chino-soviética. El clima de la época fue marcado por el triunfo de Castro y por la oleada guerrillera que cubrió casi todo el continente, por los virajes de la revolución China,

por las rebeliones estudiantiles en los países desarrollados, tanto como falta de energía y vitalidad cultural de un capitalismo adocenado, casi sin liderazgo después el asesinato de Kennedy.

La forma de izquierdización que tuvo lugar en Chile fue peculiar; la de una izquierda marxista intrasistémica. El elemento principal fue el cambio de programa por parte de uno de los partidos históricos. Desde un sector de la izquierda se comenzó a pensar que el «gobierno popular» debía superar el esquema nacional-popular y realizar tareas claramente anticapitalistas; por tanto, su base política debían constituirlos los partidos clasistas. La conquista del Gobierno por la vía de las elecciones pasó a ser vista como el primer momento de un proceso ininterrumpido de transición al socialismo.

Esta izquierdización sintetizaba el espíritu de una época en que se combinaban el rebrote de las esperanzas revolucionarias provocadas por Cuba y China, junto con la convicción de que el capitalismo nada resolvía pese a su expansión en los países centrales. Lo cual sólo servía para acentuar las diferencias irritantes con la periferia y para que aumentaran sus contradicciones.

El estilo particular que tomó la izquierdización de la izquierda chilena en los sesenta, tiene que ver también con la evolución de las oportunidades políticas. En 1952, Allende ni siquiera soñaba en el éxito. En 1958 hubo más expectativas, pero no demasiadas, porque recién se había creado el Frap (1956) y conseguido la legalización de los comunistas. El no esperado éxito electoral del 58, produjo en la izquierda la cuasi certeza del triunfo en el 64. Esta probabilidad fue considerada de una manera bastante ingenua, como resultante del progreso histórico. Detrás de este optimismo había una mentalidad política que entendía que la izquierda y las fuerzas progresistas representaban el futuro y que la sociedad existente marchaba hacia la descomposición. ¿Cómo no iba a ser posible ganar el 64 si el tiempo jugaba a favor de la izquierda, puesto que entre una y otra elección sólo podía profundizarse la crisis orgánica del capitalismo chileno?

Como bien se sabe, en la elección de 1964 se retornó a un

esquema casi olvidado; la bipartidización del campo de fuerzas. El tercer candidato, Julio Durán, solamente cumplió la función táctica de retener la votación radical, más que nada para conservar la identidad del partido. Se comprobó que dentro de un esquema bipartito, con la derecha volcada sin entusiasmo pero con resignación hacia el candidato demócratacristiano, la izquierda no tenía posibilidad de triunfo.

Esta derrota tuvo consecuencias en el campo ideológico. Se pasó del optimismo respecto a la creciente acumulación de fuerzas, al pesimismo sobre la vía electoral. Bajo el peso de esa derrota, que como horizonte representaba la posibilidad de un perpetuo segundo lugar, se empezaron a desarrollar discursos críticos sobre el electoralismo y el parlamentarismo de una izquierda que sólo sabía caminar por una senda. Apareció también la propaganda de las acciones armadas, cuyo foco principal fue la revista Punto Final. La lucha épica de guerrilleros, cuyo epítome simbólico de devoción de entrega sin límites a las convicciones fue la muerte de Guevara en 1967, despertaba en Chile una admiración mezclada con sentimientos de culpa.

La aparición del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en 1967 tuvo más importancia simbólica que política. Esos jóvenes, admiradores activos de la lucha armada y críticos del adocenamiento electoralista, arrojaron a la cara de sus mayores el baldón de la inconsecuencia. Les dijeron que la revolución no se hace entre los decorados neoclásicos del Parlamento, ni tampoco con masas indefensas. Muchos políticos, especialmente del Partido Socialista del cual provenían los iconoclastas, se sintieron tocados por esta crítica ideológica que tenía la fuerza de los cuestionamientos morales, en los cuales un hombre es confrontado con las consecuencias de sus convicciones.

Además, a mediados de la década del sesenta se desarrolló en Chile, por aporte de una serie de intelectuales extranjeros, una nueva teoría sobre el desarrollo capitalista; la teoría de la dependencia. Los sectores más radicales de esta tendencia, no solamente plantearon

que el subdesarrollo en los países periféricos no podía considerarse una etapa hacia el desarrollo, sino una forma de ser del capitalismo; además dedujeron de esa tesis consecuencias políticas, la principal de las cuales era que sin socialismo no podría romperse el bloqueo de las fuerzas productivas. Esta teoría vino a reformar el componente determinista que ya existía en el marxismo chileno de la teoría de las etapas, pero dándole ahora un contenido izquierdista. Basándose en ella se afirmó la inviabilidad de las políticas de reformas, ya que el problema de Chile no era la falta de modernización capitalista de algunos sectores, sino el capitalismo mismo. De ese modo, el socialismo fue presentado como necesidad técnica; sin él no habría posibilidad de crecimiento sostenido y real.

En este contexto ideológico se produjo la izquierdización política del Partido Socialista. Ella tomó dos formas en el período previo al gobierno de la Unidad Popular: la adopción del marxismo leninismo y la adopción de la tesis de la combinación de las formas de lucha. Dos breves comentarios sobre un tema que debería analizarse con mucha mayor extensión. El Partido Socialista se había caracterizado por un marxismo abierto, poco ortodoxo, que era usado como arma crítica contra el estalinismo, lo cual era una herejía hasta 1956 y aún después. Esta forma de considerar el marxismo generaba una diferenciación con el Partido Comunista, lo que era para los socialistas un importante principio negativo de identidad. En la década de los sesenta, los socialistas derivaron hacia el marxismo-leninismo, acercándose en el plano teórico a los comunistas, pero siempre manteniendo principios de diferenciación. En este caso consistieron en una lectura izquierdista que enfatizaba la necesidad de combinar todas las formas de lucha. Esta tesis ya estuvo presente en las polémicas socialista-comunista del 62-63. Significaba más que nada una afirmación de principios que no se tradujo ni en actos ni en la organización de aparatos especializados serios. Los que existieron, tenían un carácter artesanal, una total falta de medios y de profesionalismo, lo que revela una relación fantasiosa y retórica con el tema militar.

Sin embargo, el Partido Comunista permaneció más o menos inalterable, sin que el espíritu de los sesenta hiciera mucha mella en

que el subdesarrollo en los países periféricos no podía considerarse una etapa hacia el desarrollo, sino una forma de ser del capitalismo; además dedujeron de esa tesis consecuencias políticas, la principal de las cuales era que sin socialismo no podría romperse el bloqueo de las fuerzas productivas. Esta teoría vino a reformar el componente determinista que ya existía en el marxismo chileno de la teoría de las etapas, pero dándole ahora un contenido izquierdista. Basándose en ella se afirmó la inviabilidad de las políticas de reformas, ya que el problema de Chile no era la falta de modernización capitalista de algunos sectores, sino el capitalismo mismo. De ese modo, el socialismo fue presentado como necesidad técnica; sin él no habría posibilidad de crecimiento sostenido y real.

En este contexto ideológico se produjo la izquierdización política del Partido Socialista. Ella tomó dos formas en el período previo al gobierno de la Unidad Popular: la adopción del marxismo leninismo y la adopción de la tesis de la combinación de las formas de lucha. Dos breves comentarios sobre un tema que debería analizarse con mucha mayor extensión. El Partido Socialista se había caracterizado por un marxismo abierto, poco ortodoxo, que era usado como arma crítica contra el estalinismo, lo cual era una herejía hasta 1956 y aún después. Esta forma de considerar el marxismo generaba una diferenciación con el Partido Comunista, lo que era para los socialistas un importante principio negativo de identidad. En la década de los sesenta, los socialistas derivaron hacia el marxismo-leninismo, acercándose en el plano teórico a los comunistas, pero siempre manteniendo principios de diferenciación. En este caso consistieron en una lectura izquierdista que enfatizaba la necesidad de combinar todas las formas de lucha. Esta tesis ya estuvo presente en las polémicas socialista-comunista del 62-63. Significaba más que nada una afirmación de principios que no se tradujo ni en actos ni en la organización de aparatos especializados serios. Los que existieron, tenían un carácter artesanal, una total falta de medios y de profesionalismo, lo que revela una relación fantasiosa y retórica con el tema militar.

Sin embargo, el Partido Comunista permaneció más o menos inalterable, sin que el espíritu de los sesenta hiciera mucha mella en

esa organización pétrea. Sin embargo, no fue capaz de responder en el terreno teórico a las críticas de la teoría de la dependencia. Siguieron sosteniendo, aunque aislados de la capa de intelectuales significativos, un programa de carácter más nacional-popular que socialista. Sin embargo, en el momento de elaborar la plataforma de la Unidad Popular, aceptaron, antes que nada por pragmatismo, una política de nacionalizaciones más amplia de la que hubieran querido; y también aceptaron definirle tareas socialistas al «gobierno popular». En realidad, los comunistas, esencialmente realistas e imbuidos de una fuerte lógica de racionalidad instrumental, no cayeron en las fantasías épicas de la lucha armada, ni del socialismo a la orden del día. Pero en cambio, ya en la fase de formación de la Unidad Popular, demostraron estar atenazados por el veto socialista, obligados a perpetuas concesiones, porque el eje de su estrategia era la unidad entre los dos partidos obreros.

Esta «izquierdización» de la izquierda tiene una dinámica interna; pero también es el producto de la centrifugación producidas por la ocupación del centro por un partido alternativista que, así como quería anular a la derecha, pretendía competir con la izquierda por los sectores populares. La política de nacionalizaciones del programa de la Unidad Popular fue, en parte, el producto de la competencia con la Democracia Cristiana que prometía continuar haciendo importantes reformas, envolviéndolas en un lenguaje revolucionario. Ese centro polifacético le exigía diferenciarse, a la izquierda, yendo más allá.

2. EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR: UNA COYUNTURA DRAMÁTICA

Creo que dicho período no debe entenderse en la clave de una tragedia, es decir, de un proceso cuyo final estaba prefijado desde el principio, porque se trataba de la realización de un destino o de un designio providencial. Fue efectivamente un drama, pero pudo tener otros decursos y otros finales, sobre todo si los actores hubieran podido imaginarse el futuro.

La propia Unidad Popular definía su tarea como el comienzo de un tránsito institucional al socialismo, una forma inédita de revolución, hasta entonces no experimentada y tampoco teorizada. Entre los partidos significativos de la coalición existían matices a la hora de definir la trayectoria concreta de esta forma nueva de realizar el socialismo. Los comunistas se imaginaban, porque de eso se trataba, un tránsito gradual, lento, un proceso de larga duración, con varios gobiernos sucesivos y copamiento progresivo del poder. Al contrario, algunos sectores socialistas hacían suya la divisa de que era necesario un rápido tránsito del capitalismo al socialismo, lo cual era presentado como gran lección de Cuba. Estas diferencias en la manera de pensar la transición y el papel del Gobierno de Allende en ella, eran una prolongación crítica de antiguas diferencias entre socialistas y comunistas respecto de la política de alianzas y al tema de las tareas inmediatas de la revolución.

Por otra parte, la situación de poder del Gobierno de la Unidad Popular dentro del sistema político no permitía ni proyectar la realización de un programa importante de reformas, ni mucho menos iniciar una transición, sin ampliar significativamente la alianza. El carácter doblemente minoritario de ese gobierno no era en absoluto anormal. González Videla, Ibáñez y Alessandri habían sido ratificados por el Congreso sin alcanzar la mayoría absoluta; incluso el último, había obtenido un porcentaje más bajo que el de Allende. A su vez, la mayor parte de los Presidentes no tuvieron mayoría en ambas Cámaras y, a veces, ni siquiera en una de ellas. En realidad, solamente Alessandri consiguió en 1961 formar un pacto mayoritario total. Y Frei tuvo mayoría en la Cámara desde 1965 hasta 1969, pero sin llegar a contar con ella en el Senado.

Por lo tanto, la falta de apoyo en el Congreso también era frecuente en el sistema político chileno. Pero un Presidente en condiciones minoritarias en ambas Cámaras no podía pretender realizar un programa de cambios importantes. Estaba obligado a una política de compromisos y negociaciones y, frecuentemente, a una política de división de sus opositores para ampliar su margen de maniobra.

Podemos decir que la cuasi perpetua situación minoritaria de los Presidentes era más sofisticado contrabalance del sistema político, que un problema. Era un mecanismo destinado a forzar la negociación, protegiendo al sistema de los ímpetus fantasiosos. Llegado el momento de concretar sus promesas y sus ilusiones, todos los Mandatarios se veían enfrentados al hecho de que en un sistema multipartidario con distribución electoral dispersa, era muy excepcional la existencia de un partido mayoritario. Además, cuando llegaba a haber uno (como lo fue la Democracia Cristiana en la Cámara) existía el contrapeso adicional de la elección parcelada del Senado, la cual creaba un rezago conservador en la representación.

El problema fue que la Unidad Popular decidió sortear la ingrata realidad de la situación de poder existente a nivel del Estado, impulsando una estrategia de cambios extraparlamentaria a través del uso de mecanismos que aumentaban las facultades presidenciales. En un principio, entre la asunción al gobierno y las elecciones municipales de abril de 1971, esa estrategia tuvo una cierta racionalidad. En una coyuntura preelectoral, aumentaba la capacidad de acción del Gobierno, demostrando de paso voluntad de cambios, energía política y disposición a realizar las promesas electorales. En el corto plazo, esa estrategia tuvo éxito o por lo menos no fue un obstáculo para la espectacular alza de la votación de la Unidad Popular.

Se recuerda muy poco que en las elecciones municipales de abril de 1971, aquella alcanzó cerca del 50% de la votación. Sin embargo, dado el carácter de las elecciones, ese resultado no tuvo efectos sobre las reales disponibilidades de poder estatal, porque no estaba en juego la composición del Parlamento. Aún más; puede decirse que ese resultado tuvo un efecto perverso porque aumentó la legitimidad sin aumentar la capacidad de acción, alimentando de ese modo las tentaciones de resolución fantasiosa. Después de ello, podía argumentarse que era factible seguir adelante con la estrategia de reformas extraparlamentarias, porque se había obtenido una especie de mayoría moral.

En realidad, la estrategia extraparlamentaria no solamente tensionaba de un modo extremo el sistema político; además permitía eludir el problema de fondo, cual era dejar pasar el tiempo sin afrontar la realidad. El dato básico que se evadía consistía en que si bien era frecuente un gobierno minoritario, era imposible pretender reorganizar la economía y la sociedad sin buscar un apoyo mayoritario. Al no aceptar eso o al soslayarlo mediante subterfugios, se agregaba un obstáculo más a las dificultades propias de todo cambio profundo: el problema de que una parte de la sociedad podía cuestionar la legalidad formal, los procedimientos usados. Evadir ese problema era suponer que los sectores empresariales o lo que se llamaba la clase dominante, iba a aceptar resignadamente que su poder económico fuera cercenado. El aparente izquierdismo del avanzar sin transar, de la no negociación, escondía un análisis ingenuo de la correlación de fuerzas, una subvaloración de la capacidad de contrataque de la derecha y una absoluta incompreensión de las condiciones de operación del centro en un clima polarizado.

No era posible realizar las reformas que la Unidad Popular proponía sin formar un amplio bloque democratizador. Hubo oportunidades de plantear esa posibilidad en el momento de la negociación inicial, aquella que permitió el apoyo de la Democracia Cristiana a Allende en el Congreso. Cuesta entender desde el clima histórico de hoy, por qué no hubo esfuerzos consistentes en esa coyuntura inaugural, cuando la Unidad Popular no comenzaba todavía a gobernar y no había comprendido su imagen con una estrategia. Pero la cultura política de las elites era muy diferente a la de hoy día. En primer lugar era, de ambos lados, muy confrontacional. Además, por otra parte de la UP no existía mucha sensibilidad a las limitaciones institucionales, puesto que se apostaba a la movilización como receta mágica para ampliar su margen de maniobra. Se creía ingenuamente que lo que faltaba de poder estatal sería compensado con la combatividad de las masas.

Más tarde existió un clima propicio para el entendimiento posterior a las elecciones municipales de 1971, cuando la UP llegó a su punto máximo en materia de apoyo y legitimidad. De hecho, se

produjeron acercamientos entre el gobierno y sectores demócratacristianos fortalecido aquél por su éxito electoral. Una de las «almas» de la Democracia Cristiana, popular, anticapitalista y reformadora, se sentía atraída por la posibilidad de participar en la construcción de una sociedad nueva; a su vez, no pocos dirigentes moderados de dicho partido temían, por razones pragmáticas, ser arrastrados hacia una oposición conjunta con la derecha que los desperfilara y les dificultara la mantención de su identidad múltiple. Pero el incomprensible asesinato de Pérez Zujovic introdujo elementos nuevos en la visión, diría en los sentimientos de la Democracia Cristiana respecto de la Unidad Popular: ellos fueron la paranoia y la definición del otro, como maquiavélico. A partir de entonces, la sospecha y la desconfianza se infiltraron en las relaciones, dificultando más la ya difícil situación de negociación.

La Democracia Cristiana estuvo mucho tiempo en un dilema. Las negociaciones con la Unidad Popular se fueron tornando cada vez más costosas para el centro. Al continuar el Gobierno con las nacionalizaciones, el piso era cada vez más alto y los acuerdos podían significarle al centro de pérdidas de sus votantes más moderados. Pero por otra parte, la DC tampoco quiso durante bastante tiempo embarcarse en el juego de lucha a muerte de la derecha, prefirió permanecer en su céntrica posición e intentando arbitrar el enfrentamiento polarizado de los extremos.

Finalmente, después del fracaso de las negociaciones de mayo-junio de 1972, en que se estuvo a punto de llegar a un acuerdo, la Democracia Cristiana terminó por entenderse con la derecha, proporcionando base popular de las masas a una oposición movilizadora hacia un objetivo de derrumbe del régimen: una oposición que combatía en la calle y que se embarcó, en octubre de 1972, en un largo paro de camioneros, comerciantes, empleados, médicos, etc., cuyo objetivo era mostrar el carácter ingobernable de la sociedad y la ilegitimidad práctica del Gobierno.

La crisis económica con alta inflación, desabastecimiento y caída de la producción, se hizo evidente en 1972, creando el caldo de cultivo

para una radicalización de la oposición que se manifestó en el llamado «paro de octubre». La Democracia Cristiana tuvo que seguir, dejando de lado sus remilgos, las iniciativas rupturistas de la derecha, impulsada por el temor de perder apoyo en una masa anti Unidad Popular crecientemente exacerbada, que podía preferir la política sin ambigüedades de la derecha, a sus estrategias neutralizadoras.

La Unidad Popular no pudo resolver el problema básico de las relaciones con el centro, porque dentro de ella había un sector insensible a la necesidad de negociar y de ceder, que creía que había que agudizar las contradicciones y llegar hasta los puntos límites. En él se había desarrollado un purismo fundamentalista que lo llevaba a abominar de los compromisos. Pensaba en ellos en términos morales, como traiciones, puesto que la revolución estaba ahí, al alcance de la mano, siempre que se supiera usar bien esa especie de fuerza mística de las masas.

Es muy llamativo que una izquierda que se sentía experta en el análisis científico de la correlación de fuerzas, hiciera un análisis tan fantástico o tan evasivo de la realidad. Colocados en la perspectiva de la época, hay que entender que el socialismo, además de ejercer fascinación y atractivo, era visto como necesidad, ya que se creía que el capitalismo no tenía viabilidad como camino de desarrollo. Las nacionalizaciones permitían poner las empresas en manos del Estado, el único actor que podía manejarlas con eficiencia y que aseguraba, además, la inversión de los excedentes de acuerdo a las necesidades sociales e intereses públicos. Hay que ubicarse en ese clima cultural para entender por qué la Unidad Popular actuó como lo hizo. Era una época en que el capitalismo estaba desacreditado y la iniciativa privada no tenía imagen de modernidad, de eficiencia ni menos de honradez.

Pero aunque es necesario contextualizar la lógica que orientaba la acción, hay que mostrar también que ella era de un flagrante economicismo, en el cual estaba ausente el análisis político y la misma realidad de lucha de clases. Desde el punto de vista de la

relación de fuerzas, lo real, no lo fantasioso ni lo evasivo, era que se necesitaba un pacto con el centro para hacer reformas económico-sociales y que ese pacto requería concesiones y transacciones. La política de nacionalizaciones, impulsada sin considerar al Parlamento, creaba el vaciamiento del centro y el reforzamiento de un bloque opositor radicalizado, provocando además un clima de exacerbación pasional.

La Unidad Popular no tomó el único camino que minimizaba las posibilidades de crisis catastrófica, por la razón de que un sector se fue introduciendo cada vez más en la lógica de la no transacción, impulsado por la fijación mítica en la fuerza de las masas y también por la creencia de que de la crisis saldría la luz. Pero hay otra razón complementaria. El sector negociador, mucho más realista, no fue capaz de imponer su política, porque retrocedió ante los costos que eso significaba, entre ellos, la ruptura de la unidad de la izquierda. La debilidad de ese grupo residió en el fondo, en que en vez de discrepar sobre el tipo de sociedad que surgiría de una política confrontacional, clasista, sin capacidad de vincular lo popular con lo nacional, limitó su discrepancia a meras cuestiones tácticas de cálculo.

La tendencia radicalizada no tenía en realidad un proyecto viable. Realizaba una especie de apuesta pascaliana, porque impulsaba una política que llevaba a la profundización de la crisis y a enfrentamientos crecientes sin tener más recursos de poder que la esperanza en la capacidad de movilización de las masas. Todos los aprestos militares eran infantiles e ingenuos; existían básicamente en el nivel de la palabra o eran ilusiones, formaban parte de la relación fantasiosa con la realidad.

Esta izquierda, dividida entre una relación mágica con el poder y un realismo inerme, se enfrentaba a una derecha con una gran lucidez estratégico-táctica, que supo ir desplegando la política necesaria para el aislamiento de la Unidad Popular. Haciendo gala de una visión política que generalmente le había faltado, la derecha del período 70-73 tuvo siempre claras algunas cosas fundamentales: que no se podía jugar al putschismo antes de tiempo, que debía impedirse la negocia-

ción entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, que debía atraerse al centro hacia la oposición, que debían combinarse formas de lucha combatiendo a la Unidad Popular en su propio campo, las calles, sin eludir una cierta cuota de ilegalidad y de violencia; por ejemplo, enfrentamientos callejeros, barricadas, cortes de energía eléctrica, bombazos, copamiento de carreteras, etc.

El elemento central de la estrategia de la derecha era producir el vaciamiento del centro, con el objeto de anular la posibilidad de una negociación en que se pactara un programa de nacionalizaciones, aunque fuera más moderado que el de la Unidad Popular. El Partido Nacional se dio cuenta, desde el principio, de la importancia del apoyo democratacristiano para poder presentar con verosimilitud la lucha contra la Unidad Popular, como lucha democrática y nacional y no como la resistencia de propietarios resentidos.

El éxito de esa estrategia fue sin duda facilitado por la política de la Unidad Popular. La insistencia en sacar del Parlamento la discusión de los grandes cambios económico-sociales, la falta de decisión y audacia para imponer soluciones realistas por parte de los sectores que encabezaban Allende y los comunistas, hicieron imposible aprovechar las oportunidades de acuerdo. Cuando entre mayo y julio de 1972 se iniciaron conversaciones formales, ya era tarde porque se había desencadenado la crisis económica abierta y cundían entre la masa opositora sentimientos de exasperación contra el Gobierno, los que limitaban las posibilidades de la Democracia Cristiana de llegar a acuerdos.

La posibilidad de alcanzar soluciones negociadas no era fácil entre mayo-julio de 1972. Pero después se hicieron prácticamente imposibles. A la existencia de un núcleo duro inicial, constituido por el Partido Nacional, a quien no le interesaba la legalización de las nacionalizaciones, se le agregó la expansión y creciente radicalidad del sector duro de la Unidad Popular, el que creía que profundizando la crisis, se llegaba por un salto dialéctico desde lo peor a lo mejor. A ello se sumó la creciente derechización de la masa de apoyos del centro, como consecuencia del deterioro de la situación económica,

del lenguaje confrontacional y de amenaza que usaba la Unidad Popular y de la paranoia que esto creaba.

El hecho que la formación en noviembre de 1972 de un gabinete cívico-militar no sirviera para encontrar soluciones negociadas con el centro, ni tampoco para moderar la línea estratégica de la Unidad Popular, es una demostración adicional del carácter rígido de la situación.

En marzo de 1973 fracasó definitivamente la estrategia de derrumbe, que era desde el principio la alternativa de la derecha, a la cual había logrado sumar a la Democracia Cristiana. Desde que el Partido Nacional se rearmó políticamente a mediados de 1971, después de recuperarse de los salpicones políticos del asesinato del general Schneider y de los errores cometidos en la elección de 1970, se lanzó en una campaña orientada a hostigar al Gobierno en todos los frentes, sin golpear abiertamente a los cuarteles, pero buscando caotizar al máximo la situación, ya bastante difícil por los errores de la Unidad Popular, con el objetivo de sensibilizar a los militares frente a los problemas de ingobernabilidad del país.

Como se ha dicho, para que esta estrategia funcionara, era necesario vaciar el centro y polarizar el conflicto político, ya que ella necesitaba la movilización de un espectro amplio. Pero al incorporarse la Democracia Cristiana al bloque opositor, obligó a la derecha a legalizar su estrategia de derrumbe, especialmente después de la experiencia del paro de octubre de 1972. En esa coyuntura, los **democratacristianos** se vieron arrastrados en un movimiento de masas que al principio no controlaban, debiendo gastar grandes esfuerzos para impedir los desbordes de violencia y los objetivos **golpistas**. La derecha, consciente de la importancia de la alianza con la Democracia Cristiana, aceptó el horizonte de las elecciones de **marzo de 1973**. La estrategia del derrumbe así redefinida debía culminar en esa oportunidad con la obtención de una mayoría aplastante de los dos tercios más uno de los escaños de cada rama del Congreso.

Los resultados de las elecciones parlamentarias fueron un éxito

electoral para la Unidad Popular. Ella demostró, en medio de una crisis galopante, una enorme capacidad de retención de votantes. Bajó menos respecto a abril de 1971, que la Democracia Cristiana en 1969 respecto a 1965. Esta descendió un 12,5 por ciento, mientras que la primera bajó un 6,2 por ciento. Además, la coalición gobernante consiguió 63 de 150 diputados, con lo cual la oposición no podía intentar un juicio político al Presidente. Hubiera necesitado 101 diputados y sólo consiguió 87.

Con esto, fracasó la estrategia del derrumbe legal, porque no se podía obligar legalmente a Allende a abandonar el gobierno. Paradójicamente, el éxito electoral de la Unidad Popular cerró las posibilidades de una solución pacífica. Lo hizo en dos sentidos: porque seguramente en ese momento se puso plenamente en marcha la conspiración que culminó con el golpe militar y porque el alto porcentaje de votación conseguida por las fuerzas del Gobierno le permitió a algunos seguir alimentando una visión fantasiosa de la realidad y evadiendo la necesidad de una urgente transacción defensiva. Las claras señales que presentaron el golpe frustrado de junio de 1973 y la renuncia forzada del general Prats, no fueron correctamente interpretadas por una izquierda obnubilada y enceguecida.

Después de la renuncia de Prats y del nombramiento de Pinochet, la Unidad Popular se sumió en la parálisis. Allende y los sectores negociadores no tuvieron ni la fuerza ni la decisión para imponer una transacción que necesariamente debía significar retrocesos. Los grupos que estaban por no negociar continuaron hablando de la necesidad del enfrentamiento o de la posibilidad de aplastar un golpe. Siguieron haciendo política en base al deseo y la fantasía, porque no existían armas, ni menos soldados. Es verdad que los diferentes partidos habían preparado aparatos militares. Sin embargo, su grado de organización y su disponibilidad de recursos eran mínimos y su experiencia, inexistente. El sueño utópico era que el pueblo movilizado ganaría para su causa a los soldados y que los generales leales se enfrentarían a los generales golpistas. Hasta el final se pensó que un sector de las Fuerzas Armadas defendería al Presidente elegido democráticamente.

Por otra parte, la falta de aparatos militares operativos se puso claramente en evidencia durante la intentona militar fracasada de fines de junio. Ningún grupo para militar de la Unidad Popular fue capaz de actuar y se debió esperar la movilización de las unidades profesionales. Cuando los militares dieron el golpe, sabían perfectamente que el Gobierno no tenía fuerza militar propia con una mínima capacidad de resistencia.

En todo caso, la ceguera de la Unidad Popular para conocer la realidad y para encauzar su acción por el único camino posible era la consecuencia de graves insuficiencias en la evaluación de la democracia, de una ciega creencia en las virtudes mágicas de la revolución y del socialismo. Esos vacíos llevaron a la izquierda de la época a desvalorizar la democracia formal, tildada peyorativamente de burguesa. Detrás de la negativa de negociar y transar, existía el pánico a quedarse, en el medio camino, en el formalismo y el deseo obsesivo de llegar cuanto antes al momento paradisiaco de la revolución. El sueño de un mundo mejor nubló totalmente la mirada, impidió ver cómo se tejía el drama final: el golpe militar.

3. LA CONSUMACION DE LA CRISIS DEMOCRATICA

Los antecedentes y las causas indirectas y directas de la crisis de la democracia chilena deben ser buscados en la coyuntura 1970-1973, pero también más allá. Más allá significa antes, lo que parece evidente, pues todo proceso tiene raíces, pero significa además después. En realidad, la crisis de la democracia chilena no se consumó el 11 de septiembre de 1973, aunque ese momento haya sido crucial desde muchos puntos de vista. La crisis, con toda su profundidad, con todos sus significados y consecuencias, muchas no esperadas, solamente se desplegó después del derrumbe como resultado de acciones, estrategias y decisiones que adoptó el nuevo bloque de poder. Estas tenían historicidad, en el sentido que aunque estuvieran condicionadas, no pueden considerarse regidas por una lógica de necesidad: no fueron inevitables.

La lucha contra la Unidad Popular se realizó a nombre de la restauración de la democracia, pero el golpe militar dio paso a una dictadura de 16 años. El verdadero quiebre de la democracia se produjo cuando los vencedores decidieron imponer una revolución capitalista modernizadora, en vez de restaurar, según lo prometido, la democracia política. La terrible paradoja de la Unidad Popular fue que su intento de realización empecinada del sueño del socialismo abrió paso a una revolución de otro signo, dotada ella sí, de recursos de poder, del apoyo militar que le aseguró una capacidad represiva y de violencia que inmovilizó durante largos años a las masas populares y que permitió impulsar una reestructuración profunda del esquema de desarrollo vigente en Chile desde la década de los treinta.

En el período 70-73 existió una profunda crisis política producto de los graves desaciertos de la Unidad Popular. Entonces, la democracia se quebró ; pero después del golpe fue barrida, clausurándose el Parlamento, quemándose los registros electorales, prohibiéndose el funcionamiento de los partidos. La decisión de instalar una dictadura duradera no constituyó una necesidad derivada del caos de la Unidad Popular o de alguna amenaza militar, puesto que la izquierda estuvo largos años desmovilizada y hasta 1980 solamente un grupo minoritario, y además duramente castigado por la represión, estaba por la lucha armada del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

La decisión de instalar una dictadura de largo plazo tiene relación con los objetivos que los militares se asignaron; con la voluntad revolucionaria del nuevo régimen. Para conseguir la refundación de la sociedad de la cual hablan desde los primeros días los ideólogos del poder, la democracia debió ser sepultada y no revivida, como lo indicaban las promesas de restauración, en cuyo nombre se realizó la lucha contra Allende.

La democracia chilena llegó hasta la agonía en el período de la Unidad Popular; pero su verdadera muerte ocurrió después que se tomó la decisión de transformar el golpe en una revolución, una revolución capitalista que reorientó el desarrollo, minimizó el poder de los trabajadores, intentó despolitizar la sociedad, disminuyó la

influencia del Estado y **desacreditó su papel** regulador. Estas opciones no eran necesarias, **no se derivaban de la crisis** precedente, no eran el único **camino posible**, ya que sabemos que eso no existe en política. Lo sucedido fue el resultado de la formación de un bloque de poder entre **militares e ideólogos** neoliberales, ambos coludidos, para realizar lo que consideraban la gran modernización que Chile necesitaba.

La Unidad Popular soñó con la revolución. Los militares la ejecutaron como contrarrevolución. Ellos tenían el poder que a los otros les faltaba y la férrea y fanática capacidad de **adecuar los medios empleados a los fines** que se consideraron necesarios.

**LA CRISIS DE LA
DEMOCRACIA EN CHILE.
DISTINCIONES Y CONSIDERACIONES
MANUEL ANTONIO GARRETON M.**

Durante largo tiempo el tema de la crisis de la democracia chilena fue elevado a carácter de monólogo por parte del régimen militar. Sin embargo, muchos participamos en un esfuerzo necesariamente reducido, social y políticamente, de intentar incluso bajo dicho régimen, de descifrar más allá de nuestros propios involucramientos, el significado, antecedentes, causas y efectos de esa crisis. Afortunadamente hoy, este esfuerzo puede hacerse a la luz pública y convocar a muy amplios sectores. Por ello, por no seguir esperando el juicio de la historia como tantas veces se pretexta para no asumir responsabilidades intelectuales y políticas, es que celebro muy sinceramente la iniciativa del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, de la cual se nos expulsó arbitrariamente a raíz precisamente del derrumbe democrático de 1973, de convocar a un debate tan necesario para el presente y futuro de nuestro país.

Mis pretensiones en este trabajo son muy delimitadas. Sin entrar a un análisis histórico ni pormenorizado de los antecedentes y causas de la crisis de la democracia de Chile, quisiera solamente desarrollar un esquema que permita distinguir las diversas dimensiones de aquélla, separarla del fenómeno del término o derrumbe democrático y señalar, a veces sólo enunciándolos, los diversos factores que, a mi juicio, un análisis del tema debe considerar. Mi estilo será esquemático y enunciativo de conceptos e hipótesis, prescindiendo de la argumentación que he desarrollado en otros trabajos, algunos de los cuales fueron realizados junto con Tomás Moulian.

1. EL CONCEPTO DE CRISIS POLITICA

La primera aclaración al enfrentar un tema tan delicado como éste, se refiere al concepto de crisis y a los diversos tipos de crisis por las que puede pasar un sistema social y político. Entendemos por crisis la agudización de tensiones y contradicciones entre los elementos y componentes de un sistema político o en alguna dimensión de éstos, en un período relativamente corto o preciso de tiempo, con la agudización de antagonismos y conflictos entre los actores o algunos actores significativos de ese sistema.

Vale la pena establecer, entonces, una primera diferencia entre crisis en un régimen político, la que ocurre en alguna dimensión del régimen y no lo afecta necesariamente en su integridad; y crisis de un régimen, la que afecta la totalidad de él. Pero ambos tipos de crisis deben ser distinguidas, a su vez, de una crisis terminal o derrumbe de ese régimen. Del mismo modo, una crisis puede afectar sólo al régimen o a otro de los componentes del sistema político, o a éste en su integridad. Los otros componentes del sistema político son el Estado, los actores (especialmente, los propiamente políticos, como los partidos), la cultura política, etc. El sistema político tiene una autonomía respecto de otras dimensiones de la sociedad (organización social, economía, cultura), pero está interrelacionado con ellas.

A su vez, cuando hablamos de democracia, hablamos de un determinado tipo de régimen político. Este es uno de los componentes del sistema político y consiste en el conjunto de mediaciones institucionales entre Estado y sociedad tendientes a resolver el cómo se gobierna la sociedad (participación, representación y poder políticos) y cómo se relaciona la gente con el Estado (ciudadanía). La democracia es un régimen que resuelve estos dos problemas de acuerdo a ciertos principios y mecanismos que la distinguen de otros regímenes. Entre ellos, Estado de Derecho, vigencia de Derechos Humanos y libertades públicas, soberanía popular, sufragio universal para la elección de las autoridades políticas, alternancia en el poder, separación de poderes del Estado, pluralismo político, etc.

2. CRISIS Y DERRUMBE

Las consideraciones anteriores nos llevan a insistir en la distinción entre crisis y derrumbe o término de la democracia chilena. De la primera no se sigue necesariamente el segundo.

Así, habían existido diversas crisis de democracia chilena antes de 1973, algunas de las cuales se habían resuelto sin ruptura o término del régimen; otras sólo habían sido resueltas parcialmente, es decir, estaban en estado latente. Señalemos entre las primeras, la crisis de representatividad electoral que afectó a las mujeres hasta los cincuenta y a más del sesenta por ciento de la población, hasta mediados de la década de los sesenta. Entre las segundas, la existencia de gobiernos sin mayoría política durante largo tiempo.

Por otro lado, en el período 1970-1973 estamos en presencia de una crisis específica, en que coinciden una crisis del sistema político, con una crisis social más amplia. Ambas van a contribuir al derrumbe del régimen democrático, cuya explicación refiere a otros elementos que los que se consideran al hablar de los problemas arrastrados por ese régimen.

Dicho de otra manera, explicar la crisis en la democracia chilena y explicar la crisis de la democracia y su término, son dos cuestiones diferentes. Nos referiremos a ellas por separado.

3. LAS HIPOTESIS PARCIALES

Nos apartamos aquí de tres tipos de hipótesis que confunden o identifican crisis con derrumbe o término; o que no consideran el conjunto de dimensiones que hemos indicado más arriba.

El primer tipo de hipótesis con el que cabe tomar distancias,

abarca las dos explicaciones polares sobre la crisis de la democracia chilena.

Una es la explicación de ella por razones estructurales, en la que lo central es la incapacidad de la base económica chilena para dar cuenta de las demandas sociales y de la proliferación de presiones sobre ésta, que terminan por hacer estallar el acuerdo y las instituciones políticas. Se trata aquí de la clásica explicación de la política por la economía, donde la capacidad de creación histórica de los actores sociales es mero reflejo de lo que ocurre en la estructura socio-económica, careciendo de autonomía frente a ella.

La otra, exactamente opuesta, es la explicación del derrumbe democrático por la llamada «crisis de los consensos», donde en otros términos, lo que se dice es que la democracia, que no es otra cosa que el acuerdo político entre actores sociales, terminó porque se acabó el consenso entre los actores socio-políticos, lo que es perfectamente tautológico y no explica por qué se acabó tal consenso.

El segundo tipo de hipótesis es aquél que ve la democracia sólo como una expresión particular de la dominación social o de clases, como el reflejo político de esa forma de dominación. Al ser cuestionada esta dominación y entrar en crisis, su expresión política, la democracia, no puede dejar de hacer lo mismo. Se trata de un caso extremo de reduccionismo estructural, donde la esfera política y los actores no son sino meras manifestaciones de la estructura de clases y sus conflictos.

El tercer tipo de hipótesis del que nos apartamos, es la visión conspirativa de la sociedad y la política, que hace recaer en la estrategia consciente de un solo actor, la búsqueda del derrumbe democrático para imponer su propio proyecto (llámese el imperialismo o el plan Z o de cualquier otra manera); o que deduce de un solo factor, toda una cadena de hechos que culminan en el inevitable término de la democracia (reforma agraria, por ejemplo). Se trata de visiones puramente ideológicas, para justificar conductas y que no consideran la necesaria interacción entre todos los actores.

4. LAS VIRTUDES DE LA DEMOCRACIA CHILENA

Un primer esfuerzo intelectual que debe hacerse es el balance del régimen democrático imperante hasta 1973.

Ello implica, antes que nada, rescatar aquellos aspectos o dimensiones que contribuyen a explicar el éxito relativo de la democracia chilena, comparada con otras situaciones del continente. Es decir, se trata de caracterizar aquellos aspectos o dimensiones que no estaban en crisis, de modo de no equivocarse en el diagnóstico y aislar precisamente los elementos que sí configuraban una crisis latente.

Dicho de otra manera, la democracia chilena había resuelto en las últimas décadas antes de su derrumbe, cuatro grandes problemas, aún cuando cada una de estas resoluciones había sido al precio de elementos que actúan como contrafactores para una crisis en evidencia.

En primer lugar, la democracia chilena había resuelto el problema de su estabilidad. En gran parte, ello se debe a la correlación que se generó entre régimen político, modelo de desarrollo y democratización social, lo que no ocurrió en otros países del continente. Sin embargo, la integración de los sectores populares urbanos organizados al sistema social fue siempre subordinada y hubo exclusión, hasta avanzado los años sesenta, de otros sectores como el campesino y marginales urbanos.

En segundo lugar, se había resuelto el problema de la representatividad, es decir del pluralismo de la representación política. Sin embargo, hubo exclusión temporal de ciertos sectores políticos (ley de Defensa de la Democracia) e incorporación tardía de la participación de masas (mediados de la década del sesenta).

En tercer lugar, el régimen democrático aseguraba la efectividad o capacidad de gobierno. Sin embargo, ello no impedía la inestabilidad de las políticas públicas, la existencia de gobiernos minoritarios y la creciente polarización ideológico-política.

En cuarto lugar, se había asegurado la resolución institucional de los conflictos políticos. Sin embargo, no existían mecanismos institucionales de creación de mayorías políticas y persistía un enclaustramiento del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, que podían llevar a su intervención autónoma en política separándose del conjunto del Estado.

Todo lo anterior se reflejaba en el alto grado de legitimidad social del régimen democrático. Se le veía como oportunidad efectiva de competencia política y de satisfacción de intereses. Sin embargo, tal legitimidad era más instrumental que valórica, es decir, vulnerable si había la percepción de otros métodos viables para satisfacer demandas e intereses y sometida a erosiones potenciales, debido a los contrafactores que hemos mencionado.

5. LA CRISIS LATENTE EN LA DEMOCRACIA

Había así, una crisis latente en el régimen democrático chileno, como expresión de los contrafactores señalados y de la vulnerabilidad del tipo de legitimidad, que puede resumirse en tres grandes dimensiones.

Por un lado, una forma de constituirse o estructurarse la política, que dejaba poca autonomía a la sociedad civil y que, muy útil en determinados períodos porque aseguraba la representatividad de los actores políticos, sin embargo hacía depender todos los fenómenos de los conflictos políticos centrales.

En diversos trabajos nos hemos referido a este tema. La columna vertebral de la sociedad chilena era la articulación de organización social con sistema político-partidario presionando hacia el Estado. El canal organización social Partido-Estado era, para vastos sectores, el único procesador legítimo y viable de demandas.

Sin detenernos ahora en las virtudes de esta columna vertebral,

y el Conflicto Político en Chile

señalemos que ella planteaba varios problemas que ayudaban a conformar la crisis latente a que nos hemos referido. Así, la representación político-partidaria no da cuenta de una sociedad crecientemente compleja y diversificada. A ello se añade que la configuración de tres polos relativamente irreductibles en el sistema partidario (derecha, centro, izquierda), que conforman verdaderos mundos culturales cerrados sobre sí mismos, y que amenazan con trasladar permanentemente la polarización de la clase política al conjunto de la sociedad, carente de otros mecanismos de representación y de autonomía de sus propias organizaciones. Un efecto de ello es que en situaciones de crisis o de agudización de conflictos y contradicciones, se hace muy difícil su resolución consensual.

Por otro lado, hemos mencionado también que la institucionalidad política no proveía mecanismos que aseguraran mayorías estables. Ello facilitaba la polarización y entrampaba las transformaciones, alargando los conflictos en el tiempo (dificultades de la ley de reforma agraria, por ejemplo). Es decir la institucionalidad había sido de tal modo estable, que no se había adaptado a la democracia de masas ni a los nuevos rasgos de la cultura política.

Finalmente, cabe señalar los rasgos contradictorios de una cultura política, que reforzaban esta crisis latente. Junto a una larga tradición de negociación y transacción política y parlamentaria, propia de una visión instrumental de la democracia, coexistía el exacerbado ideologismo y la presencia de proyectos excluyentes de los otros actores, lo que es propio de una visión revolucionaria de la política, prevaleciente en todos los sectores, aunque ello no adquiriera necesariamente la forma insurreccional.

El lenguaje político de cada actor identificaba al país consigo mismo o con el sector social del que se sentía el único representante. Ya hemos hecho mención a la existencia de subculturas políticas irreconciliables identificadas con los partidos políticos, donde cada uno identifica su proyecto particular con el interés general del país de modo excluyente. Así, la derecha no concibe la modernización como un proyecto nacional y pierde el sentido de la República que ella

misma contribuyó a forjar, marcada por un fuerte sello antipopular. El centro político, ocupado por la Democracia Cristiana, pierde la capacidad que tuvo el centro laico de articular y pendular entre uno y otro extremo, evitando las crisis de polarización e identifica su proyecto **partidario con un cierto mesianismo alternativista a derechas e izquierdas. La izquierda**, por su parte, identifica la **transformación social con la alianza de sus dos partidos** y subordina las **dimensiones nacionales, a la dimensión clasista**. Todo ello facilita el que **para algunos actores la cuestión del régimen sea irrelevante, en relación a la realización de su propio proyecto confundido con el interés general de la nación.**

Pero hasta 1970, las tres dimensiones anteriores permiten a los más, hablar de una crisis en la democracia y no de la democracia, en la medida que no se postula ningún régimen alternativo viable y portador de nueva legitimidad.

Estos elementos críticos se agudizan en la década del sesenta y se exacerban entre 1970-1973, debido a tres fenómenos que cambian y radicalizan el escenario político. Ellos son, por un lado, la emergencia de una democracia de masas debido a la irrupción electoral y organizacional de nuevos sectores a mediados de los años sesenta. Por otro lado, el agotamiento de la relación entre modelo de desarrollo y democratización social. En tercer lugar, la redefinición, potencial en el caso chileno, del papel de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en sus sociedades, como producto de su inserción en el sistema geopolítico hegemónico por los Estados Unidos. En virtud de ello, asumen en diversos momentos según las características del sistema político de cada país, tareas directamente políticas relacionadas con la mantención del orden, la lucha anti-subversiva y la «preservación de la unidad y grandeza de la nación» supuestamente amenazada desde dentro de cada país. Ante este cambio de escenario, los actores políticos más significativos siguen jugando el mismo libreto.

6. LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA

Todos los elementos anteriores permiten entender la crisis latente en la democracia. El período 1970-1973 es el paso de una crisis latente en la democracia a una crisis de la democracia. Aunque ello tampoco implica la ineluctabilidad del derrumbe de la democracia. Los elementos potenciales indicados a lo largo de estas páginas se actualizan así en este período.

Sin entrar al análisis de éste, lo que hemos hecho en otras partes, cabe señalar los principales elementos que permiten explicar este paso de una crisis latente a una crisis de la democracia misma. Todos ellos se refieren al comportamiento intelectual y práctico de los actores concernidos y a sus interacciones.

En primer lugar, la existencia por parte de la izquierda de un proyecto de transformación global sin estrategia de construcción de mayoría, con una verbalización crítica de la democracia y con una estrategia institucional de cambio que, si bien perfectamente ajustada a la legalidad, quebraba la tradición de negociación y transacción y por lo tanto contribuía a erosionar la legitimidad democrática.

En segundo lugar, una lógica de confrontación por parte de la derecha, cuya finalidad última, implícita o explícita desde el comienzo, era el término del gobierno de la Unidad Popular y la eliminación de cualquier proyecto de transformación social, concibiéndolo como un enemigo irreconciliable. Para este fin todos los medios eran justificables.

En tercer lugar, frente a ese proyecto, una estrategia de neutralización, por parte de la Democracia Cristiana, sin hacerse cargo de las consecuencias que ello implicaba. Hubo aquí nuevamente un cierto obnubilamiento mesiánico, convencidos sus dirigentes que la presencia del partido garantizaba que ni el Gobierno ni la oposición de derecha se saldrían de los marcos institucionales y que la erosión del primero, llevaba a la recuperación del liderazgo nacional para la Democracia Cristiana.

En cuarto lugar, una **lógica puramente clasista** o corporativista y en algunos casos **conspirativa de los actores sociales** (empresarios), **instituciones autonomizadas del Estado** (Fuerzas Armadas, Poder Judicial) y **del gobierno de Estados Unidos**, donde la ideología y los intereses de cada uno pierden todo sentido nacional. Con excepción de la Iglesia en ciertos momentos, no hay actores que no sean penetrados por el conflicto político y sus opciones polares y que por lo tanto, hablen sólo desde la perspectiva de la preservación del sistema institucional. La ausencia de personalidades e intelectuales por encima del conflicto, que hicieran ver con cierta distancia los efectos de lo que estaba ocurriendo, es también un elemento coadyudante en la crisis, en la medida que los sectores intelectuales se identificaron estrechamente con alguno de los bandos en conflicto.

A lo anterior, hay que agregar lo ya mencionado en el sentido de la ausencia de instituciones y espacios que forzaran al diálogo, a acuerdos y a compromisos desde el inicio del proceso, por cuanto más adelante ello sería imposible.

La crisis de la democracia, que condensa todos los elementos y factores que hemos indicado, se traduce en una crisis de su legitimidad, factor que había permitido sobrellevar los elementos de crisis latente. Cuando los actores sociales y políticos significativos apuestan sólo a sus propios proyectos, identificándolos con la nación, nadie apuesta al régimen como tal, es decir, a las mediaciones institucionales para la realización de cualquier proyecto. Los actores principales dejan de creer en la democracia como el mecanismo eficiente de representación de la totalidad por sí mismo y buscan su propia resolución del conflicto.

7. EL DERRUMBE DEMOCRATICO

Pero ni los factores de la crisis latente ni la crisis de legitimidad explican por sí solos el derrumbe y el término de la democracia chilena y su supresión por largo tiempo. Podía haber habido otras

soluciones que recuperaran sin derrumbe la legitimidad democrática y resolvieran los elementos de crisis latente. El término de la democracia se explica porque hay un proyecto consciente de reemplazarla como régimen político por otro, y porque los actores que encarnan ese proyecto tienen fuerza, en el momento de crisis de legitimidad y de agudización de todos los factores de crisis latente, para imponer otro tipo de régimen. Ni los actores de centro ni los actores de izquierda, ni una buena parte de los actores sociales, todos ellos también responsables de las crisis mencionadas, postulaban un régimen distinto al democrático, aunque no supieran valorarlo o defenderlo o hubieran perdido parte de su fe en él. Si hubo derrumbe fue porque en el momento de la crisis hubo intelectuales, políticos y empresarios que junto al actor decisivo que fueron las Fuerzas Armadas, quisieron instaurar en Chile un régimen militar que pudiera reproducirse en el largo plazo como un régimen autoritario permanente.